

**CENTRO DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA - AUTORIZADO PARA CONOCER DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PERSONA NATURAL
NO COMERCIANTE**

**Código
Centro**

1065

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CASO

CONSTANCIA - NO ACUERDO

Número del Caso en el centro: 4566 **Fecha de solicitud:** 22 de agosto de 2024
Cuánta: 213000000.00 **Fecha del resultado:** 2 de octubre de 2024

CONVOCANTE(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
1	ORGANIZACIÓN	NIT	890000440	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A

CONVOCADO(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
1	ORGANIZACIÓN	NIT	890000442	COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES
2	ORGANIZACIÓN	NIT	860026182	ALLIANZ SEGUROS
3	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	10225828	JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO

Area:	Tema: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
CIVIL Y COMERCIAL	Subtema:

Concllador: PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO

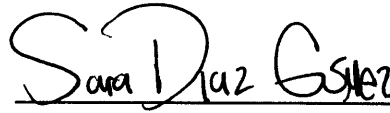
Identificación: 42119042

El presente documento corresponde al registro del caso en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 numeral 9 y artículo 66 de la Ley 2220 de 2022. Una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 64 de la citada norma y corroborada la adscripción del (la) conciliador (a) a este Centro de Conciliación. Las primeras copias del acta prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada en los casos y para los efectos establecidos en la Ley. El original del acta y la copia de los antecedentes del trámite reposan en los archivos de este Centro de Conciliación.

En constancia de lo anterior, se suscribe por el (la) Director(a) del Centro:

Identificador Nacional SICAAC	
N° Caso:	2637834
N° De Resultado:	2467055

Firma:



Nombre:

SARA DIAZ GOMEZ

Identificación:

1088296258

***CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN
RESOLUCIÓN 1340 DEL 18 DE JUNIO DE 1993 DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO***

CONSTANCIA No. 4566

La suscrita conciliadora del **CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA**, Doctora **PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO** identificada con la cédula de ciudadanía No. **42.119.042** y portadora de la tarjeta profesional No. **122.188** del Consejo Superior de la Judicatura, avalada como conciliadora por el Ministerio de Justicia y del Derecho e inscrita ante este Centro, en cumplimiento a lo ordenado en la Ley 2220 de 2022.

HACE CONSTAR

Que en este Centro se recibió solicitud de conciliación el día veintidós (22) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), remitida por el ustedes **CHRISTIAN ANDRES GUEVARA CHICA**, mayor de edad, identificado con la **CC No 9.873.925** de Pereira Risaralda, abogado en ejercicio y portador de la **TP No 177107** del CSJ, actuando en calidad de apoderado de la parte convocante **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SA** con NIT **890.000.440-7**, representada legalmente por **ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ** , donde las partes convocadas son: **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA**, con NIT **890.000.442-1**, representada legalmente por **JOSE IGNACION VARON CARDENAS**, **ALLIANZ SEGUROS**, con Nit **860.026.182-5**, **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, identificado con la C.C. No. **10.225.828**

La solicitud de conciliación allegada a este centro se refiere básicamente a los siguientes hechos y pretensiones narrados por el solicitante los cuales se transcriben fielmente:

HECHOS

1. Se presentó una demanda de REPARACION DIRECTA, en donde las partes fueron las siguientes personas:



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia

    www.camarapereira.com

DEMANDANTE: BERTILDA ROSA VALENCIA Y OTROS

DEMANDADOS: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL-
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SA COLDETRANS – JUAN AUGUSTO
RIOS OSORIO

2. Dicha demanda de reparación quedó radicada así:

JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS

RAD: 17001-33-33-0042014-00566-00

3. En dicha demanda se estaban pidiendo la reparación directa de los demandados en la muerte ocasionada en accidente de tránsito del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, a consecuencia de los hechos acaecidos el día 12 de junio de 2013, en la vía Cauya, la pintada, kilómetros 31 +750 vereda la sierra en el Municipio de Rio Sucio Caldas.

4. En el trámite procesal el señor JUAN AUGUSTO RIOS RINCON, llamo en garantía a ALLIANZ SEGUROS, quien posee la póliza de responsabilidad civil extracontractual del vehículo, del cual es propietario. Así mismo la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES SA, llamo en garantía a la COOPERATIVA QUINDIA DE TRANSPORTADORES LTDA, pues era quien tenía en custodia y cuidado el vehículo a consecuencia de un contrato que realizo con el propietario del vehículo para utilizar el vehículo y usufructuarlo para llevar una mercancía de su propiedad.

5. A través de sentencia de 05 de diciembre de 2019 el JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS, fallo lo siguiente:

A. Declarar administrativamente responsable a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, por la muerte del ciudadano ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA.

B. Declarar probada la excepción de culpa de un tercero, propuesta por COLDETRANS Y JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, denegando las pretensiones en contra de estas dos personas.

C. A consecuencia de lo anterior se denegó el llamamiento en garantía al no existir responsabilidad de los anteriores.

D. Condenar a la policía nacional al pago de:



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia

    www.camarapereira.com

\$ 213.388.909,17 a título de perjuicios materiales.

500 SMLMV para la época de la sentencia.

Condenar en costas.

6. La anterior tesis se basó en base a la siguiente conclusión probatoria dada por el despacho judicial: "En primer término el despacho considera que la imputación en el presente asunto recae en cabeza de la autoridad pública que realizó un retén con alteración del funcionamiento normal de la vía, sin que se tomaran las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos que una acción de este tipo conlleva. Por esta razón en el acápite de solución de las excepciones propuestas, se exonera de responsabilidad a la compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS SAS y JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, dejando sin piso jurídico el llamamiento en garantía realizado en contra de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y ALLIANZ SEGUROS SA".

7. Dicha decisión fue objeto de apelación, y quedó su competencia en el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas sección Quinta, magistrado ponente Augusto Ramón Chávez Marín.

8. A través de sentencia de segunda instancia del 26 de agosto de 2022, el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas, modificó la sentencia de primera instancia de la siguiente manera:

- A.** Modifíquese el ordinal primero de la providencia recurrida, el cual quedara así: DECLARESE administrativa y patrimonialmente responsable a la nación – ministerio de defensa- policía nacional, en un 50% y de manera solidaria al señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO Y A COLDETRANS en el 50%, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA.

DECLARESE PROBADO el siguiente medio exceptivo formulado por la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA – INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD.

9. Dicha decisión fue notificada a las partes el 24 de octubre de 2022.

10. La decisión del Honorable tribunal, referente a lo que nos atañe en este libelo es referida a lo siguiente:



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia

    www.camarapereira.com

PRIMERO: Es solidariamente responsable el señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, por ser el propietario del tracto camión de placas TTG200, según el certificado de tradición del vehículo en mención.

SEGUNDO: Manifiesta que el vehículo automotor está afiliado a COLDETRANS, POR UNA ACEPTACION HECHA POR EL SEÑOR JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO Y LA COMPAÑÍA EN RESPECTIVAS CONTESTACIONES. Queremos indicar que no existe contrato de afiliación del vehículo automotor con COLDETRANS, y el señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, es simplemente un socio de COLDETRANS.

TERCERO: No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera de LA COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, implica que esta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

COLDETRANS NO ACREDITO QUE NO TUVIERA EL CONTROL EFECTIVO DEL VEHICULO.

11. Como el honorable tribunal dejo en veremos el tema de la responsabilidad solidaria de la cooperativa quindiana, esta se deberá con este proceso, no con el ánimo de demostrar la responsabilidad en la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, sino en la responsabilidad de pago, frente a un recobro, realizado por la empresa que represento.

12. Para el día 12 de diciembre de 2023, la empresa que represento hace los siguientes

pagos, a consecuencia de dicha condena:

Cheque No B 005360 por valor de \$ 59.987.014

Cheque No B 005358 por valor de \$ 96.025.972

Cheque No B 005359 por valor de \$ 56.987.014

TOTAL: \$ 213.000.000

13. Dicho dinero debió haber sido cancelado por la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y EL SEÑOR JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, por los siguiente:



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia



www.camarapereira.com

PRIMERO: Nunca ha existido una afiliación de parte de COLDETRANS con el tracto camión de placas TTG200, ni verbal ni documentalmente.

SEGUNDO: El vehículo tracto camión de placas TTG200 es de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, según certificado de tradición del vehículo.

TERCERO: El vehículo es utilizado, usufructuado, mantenido y demás por el señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, es quien paga todo lo relacionado con el vehículo y con las personas que lo manipulan, en este caso el conductor del día del siniestro.

La empresa nada tiene que ver con el vehículo indicado.

CUARTO: El señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO es socio de la empresa COLDETRANS, pero no tiene derecho a vincular su propiedad dentro de la empresa o simplemente no hay un documento soporte de esto.

QUINTO: Para el día de los hechos la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA contrato con el señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, el transporte de mercancía en el vehículo tractocamión, contrato que realizaron directamente ellos, en donde nada tuvo que ver la empresa COLDETRANS, por esta razón el vehículo estuvo en propiedad y posesión bajo un contrato de estas personas, la COOPERATIVA QUINDIANA Y EL SEÑOR JUAN AUGUSTO.

Nótese como en todo el expediente la Cooperativa reitera que, si contrato la carga de transporte con el señor JUAN AUGUSTO, a punto de afirmar que le pagaron el correspondiente flete. No existe prueba alguna de que el vehículo hubiese estado utilizado o contratado por mi poderdante.

14. Así las cosas, mi prohijado paga el valor por el tema de responsabilidad por la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ, pero está repitiendo contra el propietario del vehículo y la Cooperativa Quindiana de transportadores, así como de la compañía de seguros que respalda al señor propietario.

15. En el proceso de reparación directa, se manifestó que no existía prueba alguna sobre que el vehículo no estuviera bajo la guarda de mi prohijado, para este evento estamos demostrando que el vehículo no estaba bajo el cuidado y custodia de mi prohijado sino bajo el cuidado y custodia del propietario y contratado por la cooperativa quindiana de transportadores.



Certificado SC 1622-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia

    www.camarapereira.com

PETICIONES:

1. Que se cite a audiencia de conciliación de carácter extrajudicial a los señores JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, mayor de edad, identificado con la CC No 10.225.828, como propietario del vehículo de placas TTG-200; la Cooperativa Quindiana de transportadores Ltda., empresa identificada con Nit No 89000442-1, empresa ubicada en la ciudad de Armenia en la calle 53 No 16-04, representada legalmente por el señor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, mayor de edad, identificado con la CC No 7535429 y la compañía de seguros ALLIAZ SEGUROS SA sucursal Manizales, ubicada en la Cra 23 B No 64-22 piso 5 y 60 barrio laureles.
2. Que a consecuencia de lo anterior se declare que para la fecha de los hechos en accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de junio de 2013, el vehículo de placas TTG-200, estaba bajo el cuidado y custodia del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADRES LTDA, bajo un contrato de transporte.
3. Que no existe ni ha existido vínculo alguno entre el vehículo de placas TTG200 y mi prohijada.
4. Que se ordene el reembolso del dinero pagado por mi prohijada de \$ 213.000.000, los cuales fueron pagado a consecuencia de la solidaridad a los herederos del difunto ISRAEL GUTIERREZ, y en contra de JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y ALLIANZ SEGUROS SA.
5. Que se busquen fórmulas de arreglo para este evento.

AUDIENCIA

En el municipio de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2024), siendo las 4:00p.m., comparecieron de manera virtual al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Pereira, ubicado en la carrera 8 No. 23 – 09 Edificio Sede Administrativa y Cultural Cámara de Comercio de Pereira Piso 3 a través del aplicativo Google meets por la parte convocante:



Por la parte convocante:

- Comparece **ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 42.010.815**, en calidad de representante legal de **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A**, con **Nit 890.000.440-7**, gerencia@coldetrans.com, Cra 16 calle 80 esquina servicentro Primax, barrio la Romelia en Dosquebradas. Teléfono: 3187825946, quien otorga poder especial, amplio y suficiente con facultad para conciliar al **Dr. CHRISTIAN ANDRES GUEVARA CHICA**, mayor de edad, identificado con la **CC No 9.873.925** de Pereira Risaralda, abogado en ejercicio y portador de la **TP No 177107**, ubicado en la calle 18 No 8-41 edificio banco cafetero oficina 403 en la ciudad de Pereira – Risaralda, Teléfono: 3104133358, Correo: christiananandresguevara@hotmail.es, a quien se le reconoce personería amplia y suficiente para actuar.

Por la parte convocada:

- Comparece el señor **JOSE IGNACIO VARON CARDENAS**, identificado con la **C.C. No. 7.514.609**, en calidad de representante legal de la **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES, NIT 890.000.442-1**, dirección: Calle 53 No 16-04 barrio arenales en Armenia Quindío, Teléfono: 3206418282 Correo: asistenteadministravo@cooquitrans.com – gerencia@cooquitrans.com, quien otorga poder amplio y suficiente a la **Dra. GLORIA MARCELA BALLENCERON**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 41.933.921**, portadora de la **T.P 105.542**, quien se ubica en el Edificio Cámara de Comercio oficina 711 Armenia, Quindío, correo: marcelaballen@mbabogados.com, a quien se le reconoce personería amplia y suficiente.
- Comparece el señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, identificado con la **C.C. No. 10.225.828**, ubicado en la Calle 22 No 17 A-74 en Dosquebradas Risaralda, Teléfono: 3155400869, correo: jaugustoriosos@hotmail.com, quien otorga poder amplio y suficiente al **Dr. NICOLAS RIOS GONZÁLEZ**, identificado con la **C.C. No.1.088.325.095** expedida en Pereira y portador de la **T.P. 289.040** del C.S. de la J., correo: nicolas.rios01@hotmail.com, a quien se le reconoce personería amplia y suficiente para actuar.
- Compare la **DRA. MARIA CLAUDIA ROMERO LENIS**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.873.416, con T.P No. 83061, con dirección electrónica para notificaciones maria.romero@externos.allianz.co, en calidad de representante legal de **ALLIANZ SEGUROS S.A NIT 860.026.182-5**, ubicada en la Cra 13 A No 29-24 en Bogotá DC, Correo: notificacionesjudiciales@allianz.co, a quien se le reconoce personería amplia y suficiente para actuar.



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001 Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia

www.camarapereira.com

Conciliador: Paula Fernanda Acevedo Londoño
Código: 42119042

**Centro de Arbitraje,
Conciliación**
y Amigable Composición



Las partes manifiestan que aceptan de común acuerdo el nombramiento de la conciliadora **PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 42.119.042** y portadora de la tarjeta profesional **No. 122.188** del Consejo Superior de la Judicatura, avalada como conciliadora por el Ministerio de Justicia y del Derecho e inscrita ante este Centro, en cumplimiento a lo ordenado en el Ley 2220 de 2022.

Atendiendo que la parte convocante y convocada no llegaron a un acuerdo en la audiencia, se declara fallida la misma y se expide la constancia que surte los efectos del requisito de procedibilidad de conformidad con lo dispuesto por la Ley 2220 de 2022.

Leída y aprobada, se firma en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024),

DRA. PAULA FERNANDA ACEVEDO LONDOÑO
CONCILIADORA - Código conciliador: 42119042

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Certificado SC 1822-1

Tel: 3403030 ext. 3000 - 3001

Nit. 891.400.669-6
Cra. 8 #23-09 Piso 3 - Pereira, Colombia



www.camarapereira.com

Armenia Q., febrero 13 del 2018

Doctor

JORGE WILDER GIL OSPINA.

Juez Tercero Administrativa del Circuito
Manizales C.

Proceso: Reparación Directa.

Demandante: Bertilda Rosa Valencia y Otros.

Demandado: la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional Coldentrans s.a.

Vinculado en garantía: Cooperativa Quindiana de
Transportadores Ltda.

Radicado: 170013333003-2014-00566.

Ref: ESCRITO DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Jorge Luis Cadavid Romero, persona mayor, natural y vecino de este municipio de Armenia Q., con cédula de ciudadanía No. 7.535.429 de Armenia Q., y tarjeta profesional de Abogado No 96.400 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien para el presente caso actúo en nombre y representación de la llamada en garantía, en calidad de tercero solidario y civilmente responsable, por la **presunta e inexistente solidaridad**, aparentemente, desprendida, por haber contratado y despachado una carga en el vehículo de placas TTG 200 de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y vinculada a COLDENTRANS S.A., quienes ejercen de forma integral, la guarda en la actividad por **explotarlo** económicamente y **usufructuarse** del resultado general del referido automotor, guarda en la actividad, que jamás se descarga en la empresa con la cual se haya efectuado un contrato de transporte y mucho menos, apoyado en una norma que siendo cierta, su ámbito

de aplicación solo abarca la violación a las normas de transporte y jamás a las normas de tránsito, al señor Juez Tercero Administrativo del circuito de Manizales; por el presente escrito, presento y sustento el escrito de alegatos de conclusión, con el objetivo de probar, nuestra ilegal vinculación y lograr del despacho, un fallo favorable a los intereses de mi representada.

Es claro su señoría, y así está probado dentro del expediente, que tanto el propietario del automotor y su empresa afiliadora, como lo registra el mismo, en sus explicaciones, que es COLDENTRANS S.A, son las personas jurídica y natural, que por norma, profesan, adquieren y ostentan, la figura legal denominada **guarda en la actividad**, por ser estos, los que explotan económicamente y se usufructúan del resultado general del automotor, con el cual se causó el daño; los que contrataron laboralmente al conductor involucrado, los que ordenan el mantenimiento preventivo y correctivo de su vehículo, los que contratan con diferentes generadores de carga el transporte de mercancías; y pretenden, apoyados en una norma, que siendo cierta, su ámbito de aplicación solo abarca siempre y cuando, exista la violación a las normas de transporte y jamás a las normas de tránsito y mucho menos amparado en el documento denominado **manifiesto de carga**, el cual precisamente, es para legalizar e identificar el producto transportado desde su origen hasta su destino final, mediante la ejecución de un contrato de transporte de índole comercial y no civil; interpretación por demás extensiva y objetiva, no compartible ni aceptable, de parte del libelista, quien pretende con la misma, tergiversar y exagerar a su señoría y hacerle ver o creer algo inexistente; pues reclamar la solidaridad de mi representada, sin que se cumplan con los elementos exigidos, para que se considere a mi apoderada como solidaria, en el presente caso, requiere de probarse otros elementos que brillan por su ausencia en la ocurrencia del hecho, resaltando en principio, que no fue la carga

la causante del hecho que originó el debate jurídico en discusión.

Aceptando que mi representada e injustamente vinculada, ejerce de forma legal, de acuerdo a su resolución de habilitación, la actividad del transporte desde el punto de vista de la **contratación de vehículos para el transporte carga, la cual se realiza en cumplimiento de lo enmarcado en el decreto 173 del 5 de febrero del año 2001**, es decir bajo el marco del cumplimiento de las **normas de transporte de carga**; y su respectivo despacho, utilizando para dicho acto, la contratación comercial para el transporte de las mercancías, de vehículos no afiliados y afiliados a otras empresas; donde es claro, que la responsabilidad se limita a esa actividad conforme lo señala el Código de Comercio, salvo el caso de ser propietario o poseer, del bien siniestrado y causante del hecho, **bajo su potestad, la administración y explotación económica del vehículo despachado**, figura que en el caso recurrido, le corresponde de forma específica, exclusiva, privilegiada y por mandato legal, al guardián de la actividad, es decir a su propietario registrado para la época de los hechos y a su empresa afiliadora y explotadora económica del mismo, para dicho momento, pues frente a mi representada judicial, somos un mero contratante comercial del servicio del transporte de mercancías, bajo el marco legal de las **normas del transporte**, lo que determina que la única forma de pretender nuestra solidaridad en el caso en comento, **sería que la carga transportada fuera la causante del hecho, es decir, que ésta se hubiera desprendido del planchón del tráiler y hubiera caído sobre la humanidad del occiso**, ya que frente a la violación a las normas de tránsito, son los **únicos guardianes de la actividad**, y por consiguiente los insuperables responsables de las consecuencias de los hechos ocurridos con el automotor involucrado; en este caso el propietario y la empresa afiliadora, para considerarlos como solidarios, en el evento de probarse, que el hecho, ocurrió por la violación de una norma de tránsito; en procura de que la justicia y la equidad, se impongan sobre las razones subjetivas y los criterios equivocados, irracionales, desproporcionados e infundados que consideró el libelista, para justificar su pretensión; ya que

la simple orden de despacho o manifiesto de carga, no genera para la empresa expedidora, la calidad de Guadiana del vehículo, ni su explotadora económica, ni su usufructuaria, ni su administradora, ni su poseedora; más cuando se trató de un contrato comercial de transporte de mercancías, por el cual, se les canceló el respectivo flete, de forma directa a su propietario y en beneficio a la empresa afiliadora.

Es de destacar, que en materia de responsabilidad civil extracontractual, se reclama la **solidaridad** que a su despacho se invocó, la que como es de su conocimiento es de tipo Legal, es decir hay que probarla, y el reclamante, no ha probado con hechos o elementos eficientes y eficaces, que justifique de forma legal su pretensión; resaltando dichos elementos probatorios, brillaron por su ausencia en el escrito de denuncia del pleito y durante la etapa probatoria; en consecuencia, no es posible tener a mi defendida, como un actor pasivo o activo de ninguna índole, por carencia absoluta de capacidad para ser parte y tener que responder por hechos de terceros, ocasionados con bienes de propiedad y administración exclusiva de dichos terceros.

Es de reiterar, que en materia de accidentes de tránsito como el que nos ocupa, el origen jurídico de la culpa, nace en el Código Nacional de Tránsito y no de las normas de transporte, norma que regula la materia en forma especial, por lo tanto de aplicación prevalente frente a las de otros Códigos, conforme lo señala el numeral 10 del art. 5° de la Ley 57 de 1887, visible en el art. 10 del C.C. Col. Obra de JORGE ORTEGA TORRES, Ed. TEMIS, 1986, y el art. 235 del Código nacional de Tránsito señala que la **"las sanciones sólo podrán imponerse al que sea responsable de la infracción por culpa"**, distinguiendo entre violación a la norma de tránsito, con la de transporte.

Sea la oportunidad, para exponerle al despacho, que en dicha exposición, nace la fuente de la culpa y la responsabilidad, en armonía desde luego, con las normas del C.C., arts 2341 y sig., en concordancia con las normas del código de comercio, que tratan el capítulo el contrato de transporte de carga; la que finalmente frente a terceros, estará íntimamente ligada al concepto de **GUARDA**, tal y como acertadamente lo señala La

Jurisprudencia y la Doctrina, y es a través de este camino, como finalmente se establece la justicia en este especial caso, frente a la responsabilidad de la persona natural y jurídica, que se pruebe son propietarios y explotadores económicos del automotor involucrado; ya que así lo señala la Jurisprudencia y la Doctrina más atendida, que al punto es acorde, y en tal sentido el Doctor JAVIER TAMAYO JARAMILLO, en su obra de "LA RESPONSABILIDAD CIVIL" Ed. TEMIS, 1986, segunda Ed. Tomo I vol. 2, pág. 84, la sintetiza magistralmente de la siguiente manera, solicitando del despacho total comprensión y aplicación en favor de mi defendida.

"106. LA GUARDA DE LA ACTIVIDAD SE PRESUME EN EL DUEÑO DE LA EXPLOTACIÓN DONDE ESTÁ SIENDO UTILIZADA LA COSA QUE PRODUJO EL DAÑO". "Acontece a menudo que el dueño de una cosa la afilia o la entrega para su utilización a una empresa de mayor envergadura, que constituye en sí misma una actividad peligrosa. En estos casos la presunción de responsabilidad pesa contra quien tenga el poder de dirección y control de la cosa afiliada, poder que puede estar en cabeza del dueño o del explotador de la empresa, según, las facultades sean o no compartidas. Por tanto, creemos que en ese caso se presumen guardianes, tanto el dueño de la cosa como el de la empresa donde se encuentra la cosa vinculada, el ejemplo clásico lo constituyen las empresas de transporte de carga, debidamente habilitadas y que afilian vehículos para su administración y explotación económica, donde el dueño del automotor lo afilia a una empresa que, **es la explotadora y solidaria en su calidad de guardiana en socio con el propietario**; lo lógico es que se presuma al propietario del vehículo y al propietario de la unidad empresarial que lo explota, como guardianes de la actividad peligrosa, y por consiguiente responsables de los daños que la cosa ocasione; para el caso, su señoría, mi apoderada, no ostenta ninguna de las calidades determinadas, ya que lo único que realizó, fue un contrato comercial de transporte de mercancías, sin que con el mismo se le adjudicara a la contratante, la facultad de administración del vehículo contratado; y para prueba, basta con revisar, el pago que recibió el reclamante a título de flete.

Recuérdese que en Colombia la responsabilidad no surge porque uno sea guardián de una cosa, sino por ser guardián de una actividad peligrosa. Como la afiliación, es con administración, responderán de forma solidaria el dueño del vehículo y la empresa, en este caso, coldetrans s.a., porque ambos controlan la utilización, administración y explotación económica del automotor, la cual jamás, fue delegada a la injustamente reclamada.

Lo que no es cierto, como lo pretende hacer ver el libelista, es que por contratar comercialmente, los servicios de un vehículo de transporte de carga, explotado económicamente por la empresa y su propietario, que además canceló su flete, a sus propietarios, la empresa contratante, se considere guardiana y solidaria de los daños o perjuicios, que ocasiono el vehículo involucrado, pues ésta, solo es responsable de que se cumpla con todos los requisitos legales que exige su operación y que la carga llegue sana y salva a su destino final, y su responsabilidad se deriva, de llegar a ocurrir, que los daños o perjuicios que se lleguen a ocasionar a terceros, se ocasionen con la carga transportada; por lo que es un intento maquiavélico y monstruoso, el pretendido por el libelista y la empresa vinculadora y explotadora; es como si quien contrata un taxi para que le realice una carea, resultara responsable por un siniestro que le ocurra al conductor, por la violación de una norma de tránsito; en la cual para nada este participó, para vincularlo en solidaridad, se requerirá entonces, demostrar, que el reclamado en solidaridad, ejecutó actuaciones directas que determinaron la ocurrencia del hecho.

Es importante exaltar, que si aceptamos que el vehículo involucrado, sí fue despachado comercialmente con carga por mi apoderada, **su GUARDA, con todo esto, no corresponde a nuestra Cooperativa,** por múltiples razones, entre otras porque los transportadores de carga de nuestro país, operan de dicha forma, es decir son permanentemente, contratados para transportar carga, sin que dicha actuación, determine para la empresa contratante, una obligación más que la de garantizar el cuidado y vigilancia, para que el producto llegue a su destino final en perfectas condiciones, bajo el marco legal

del decreto 173, distinto a las consecuencias solidarias, que se generan para el propietario y la empresa explotadora, cuando lo que ocurre es un daño o perjuicio ocasionado con el vehículo de su exclusiva propiedad y administración, en el cual para nada se involucró la carga transportada y despachada por otra empresa.

No sobra recordarle al despacho, que el señor, propietario, su conductor del vehículo involucrado y la empresa afiliadora del mismo, no tienen relación ni vínculo alguno con esta Cooperativa; resaltando que a ellos es a quienes en derecho, les corresponde la dirección y control del vehículo como únicos GUARDIAN solidarios.

En tal sentido nuestra Corte Suprema de Justicia y la más importante Doctrina repetidamente han fijado caminos claros para pacificar el país, cuando de estas decisiones se trate dice la Corte que "es común acudir a la noción de "guardián de la actividad", refiriéndose con tal expresión a quienes en ese ámbito tengan un **poder efectivo de uso, control o aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza dicha actividad**".

"En síntesis, el concepto de "guardián" de la actividad será entonces responsable la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno, control, explotación y beneficio directo, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho, no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende que, en términos de principios y para llevar a la práctica el régimen de responsabilidad del que se viene hablando, tienen esa condición."

Es de sugerir, que ni siquiera tenemos que darnos a la tarea de **demostrar**, como si le toca al propietario y a la empresa coldetrans,, que la guarda se ha transferido a otra persona, pues desde luego, nunca nos ha correspondido, por todas las razones expuestas y probadas, dada la calidad de mera contratante comercial para un transporte de mercancía,

conforme los usos y costumbres que caracterizan este tipo de acarreo desde tiempos inmemoriales, lo que no ha cambiado sustancialmente, por los que considero su señoría, que ha de prosperar la petición de exoneración de todo tipo de responsabilidad en favor de mi prohijada.

No es aceptable ni posible considerar la **EXISTENCIA DE SOLIDARIDAD:** " por cuanto, entre la Cooperativa y el propietario, el conductor y la empresa afiliadora, no existió ningún tipo de relación, que pueda derivar en solidaridad civil, los daños o perjuicios que ocasionó el vehículo involucrado, que se no encuentra bajo nuestra responsabilidad, su cuidado y administración; es más, si **tal calidad se acreditara**, al despacho por parte del libelista, igual **no hay relación alguna de subordinación o dependencia**, ya que los vehículos están bajo control y explotación económica directa de la empresa vinculadora en este caso de la llamante, y de su propietario, señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO; **sin intervención de la vinculada**, no solamente, por **mandato legal conforme al estatuto que en forma especial regula la materia**, sino porque "la verdad verdadera, es que en el presente caso nos encontramos ante unos demandados que no son ni asociado ni conductor de la cooperativa, sino que han tenido un contrato comercial de transporte de mercancía con la cooperativa, lo que indica, que nuestra responsabilidad se encuentra determinada en el decreto 173 del 5 de febrero del año 2001, de forma exclusiva a garantizar que la mercancía llegue a su destino final en las mismas condiciones en que fue despachada, y que con la misma, no se causen daños o perjuicios a bienes de terceros a las personas; y en el presente caso, nos encontramos frente a la violación de unas normas de tránsito, lo cual originó le ejecución del siniestro, en donde se involucró de forma directa y puntual, el cabezote del tracto camión de placas TTG 200 **y no la mercancía que se transportaba en el TRAILER**, el cual igualmente no se vio involucrado de ninguna manera en la ocurrencia del suceso; es decir, que el objeto sobre el cual debemos obligación legal de cuidado, vigilancia y control, es sobre la mercancía transportada y esta, no se vio involucrada de ninguna forma en el hecho ni fue la causante del deceso del occiso; actos que por sí solos

hablan de que bajo argumento alguno, existe la pretendida y maquiavélica solidaridad exigida al despacho.

Lo expuesto, no puede ser de otra manera, por cuanto, ni los propietarios ni sus vehículos despachados, se encuentran bajo el **cuidado o administración de mi representada**, por lo tanto, no cabe hablar de solidaridad frente a la verdad real, como queda dicho, más aun, **la Doctrina moderna no acepta que se obligue solidariamente a la empresa que no ostenta la calidad de guardián en la actividad, por no contar con la vinculación del vehículo despachado, bajo un contrato comercial de transporte de mercancía, por el simple hecho de la emisión del documento legal que se debe de portar con todo tipo de producto despachado en vehículos de transporte de carga; como lo es el manifiesto de carga**, expresándolo así, la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, aplicable por analogía al caso que nos ocupa, ya que donde existe la misma razón, ha de aplicarse la misma disposición, habida cuenta de tratarse de establecer responsabilidades por hechos cometidos por vehículos de propiedad de terceros afiliados a otras empresas de transporte de carga por carretera.

Dicho de otra manera, si en la responsabilidad contractual adquirida por el propietario y un tercero, no se reconoce la **solidaridad** o responsabilidad civil, tampoco ha de reconocerse en la **extracontractual** adquirida por el mismo propietario y una empresa que lo único que realizó, fue despacharlo con una mercancía, desde un origen a un destino, la cual llegó en perfectas condiciones y no generó perjuicio a daño alguno y mucho menos, fue la causante del fallecimiento del occiso.

Distinto es el caso, de vehículos **vinculados a empresas transportadoras de carga por carretera, que se encuentran bajo su administración, explotación económica, control y relación de dependencia**, como en el presente caso, ya que el vehículo de placas TTG 200, posee vinculación de administración integral con coldetrans s.a., la cual es la directa llamada a responder por los daños y perjuicios que se ocasionen con dicho automotor de forma directa o a través de las respectivas pólizas con que cuente; o cuando éstas, las transportadoras, **han participado**

de manera directa en el hecho por ser propietarias o arrendatarias del equipo, por ejemplo, caso en el que si existe la reclamada solidaridad; lo que ratifica, que el libelista, de forma subjetiva y maquiavélica, pretende descargar una responsabilidad inexistente en la llamada en garantía, la cual no se puede considerar un sujeto procesal ni activo ni pasivo, por no haber tenido ninguna injerencia en la ocurrencia del hecho que determinó la pérdida de la vida de una persona.

Al no existir dependencia o subordinación en el ejercicio de la actividad desarrollada por el conductor y mucho menos con el propietario, frente a la transportadora, no existe igualmente responsabilidad que conduzca a establecer la reclamada y mal pretendida solidaridad.

La responsabilidad que conduce a la **solidaridad por actividades peligrosas**, se encuentra íntimamente ligada al concepto de **"guardián de la actividad"**, que **exige por parte del mismo, un poder efectivo de uso, control o aprovechamiento** respecto del artefacto mediante el cual se realiza dicha actividad y con el cual se haya causado el daño o perjuicio (cfr, casación civil de 26 de mayo de 1989)

Es de anotar o resaltar que frente al mismo punto, la jurisprudencia señala: "En síntesis, el concepto de **"guardián de la actividad"** será entonces responsable la **persona jurídica, física o moral** que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un **poder efectivo e independiente de dirección, gobierno, explotación o control**, en este caso, lo ostentaba EL PROPIETARIO Y COLDETRNAS S.A., y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende que, en términos de principios y para llevar a la práctica el régimen de responsabilidad del que se viene hablando, tienen esa condición" (extractos del Tomo XXI -No 248- Rev. Juris. y doctrina- agosto de 1992.)

Es claro para el despacho, que existe una total AUSENCIA DE CULPA, de parte de mi defendida, a la cual el libelista de manera interpretativa y subjetiva, determinó ignorar por

completo, ya que la falta de obligación de la injustamente llamada en garantía, al mantenimiento preventivo y correctivo y de conservación del vehículo vinculado, que le corresponde a la empresa COLDETRANS S.A., no se le puede descargar con simples manifestaciones; la cual corresponde por mandato de la Ley, a su integralidad administrativa y al propietario.

De otro lado, la falta **absoluta de control y gobierno**, la falta de **goce** total del vehículo, en cabeza de la injustamente llamada en garantía, pues su **explotación económica es exclusiva de COLDETRANS S.A. y del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, por su condición de propietario**, la cual es desconocida para nuestra Cooperativa, trátase o no de actividad peligrosa, la que no se discute, como producto de él modo de contratación mediante vinculación con administración, que implica el **uso, goce, disposición y administración integral** del automotor por parte de dicha empresa, tal como lo señala la LEY Colombiana, aplicable por excelencia al caso que nos entretiene; lo que indica, que por un accidente ocurrido bajo el incumplimiento del marco legal de las normas de tránsito, no se puede sancionar a nadie diferente a estos, y **mucho menos a quien le obliga el cumplimiento normativo contemplado para las normas de transporte**; pues reitero, que no fue la carga transportada y despachada por la llamada en garantía, la causante del deceso del occiso y mucho menos la causante del siniestro o lo que es lo mismo la causante de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la ocurrencia del hecho.

Imposible desde el punto de vista legal, descargarle a mi defendida, una responsabilidad, por el HECHO DE UN TERCERO; en razón a que el conductor involucrado, no tiene ningún vínculo con mi representada, la carga que transportaba no fue la causante del hecho y sus consecuencias, del que pueda derivarse la responsabilidad civil así reclamada, y no puede ser de otra manera, por las razones tan repetidas como son que la propiedad, administración, explotación económica, vigilancia, dirección y control del vehículo DE PLACAS TTG 200 VINCULADO a COLDETRANS S.A. y con el cual se realizó el hecho, le corresponde exclusivamente a DICHA EMPRESA EN SOLIDARIDAD CON EL PROPIETARIO DEL MISMO, señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO Y

ADEMÁS POR NO EXISTIR NINGUN VINCULO O RELACIÓN DE LA LLAMADA EN GARANTÍA CON LOS DEMANDADOS;

Con las pruebas aportadas al expediente, el despacho cuenta con la claridad y objetividad para determinar, sin temor a equivocación alguna, que no EXISTE UNA RESPONSABILIDAD, en cabeza de mi apoderada, pues frente a la verdad real, se nos reclamen responsabilidades y solidaridades, que no nos corresponden, frente a los mejores criterios de justicia y equidad y del estudio juicioso, que le realice a la norma, tendientes a establecer la diferencia que existe de manera especial, entre las empresas transportadoras de carga por carretera que operan mediante la VINCULACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS, como lo es COLDETRANS S.A., significa lo anterior, que estos automotores están bajo la directa administración de la empresa y su propietario y no de la empresa que haya contratado sus servicios de transporte de mercancía, cuando dicha mercancía, no es la causante del hecho o siniestro, que por lo tanto, no se lucra de su actividad explotadora, ni da instrucciones u órdenes o cualquier acto que signifique gobierno, pues esos atributos, corresponden como queda dicho, y de manera exclusiva a la empresa en este caso a COLDETRANS S.A, y a su propietario en solidaridad con su conductor.

Dicho en otras palabras, no existe dependencia o subordinación de ninguna índole entre el vehículo despachado con la carga, si está vinculado a otra empresa, ni con su propietario y mucho menos con su conductor y la llamada en garantía, ya que aquellos, desarrollan su actividad independiente, tal como lo autoriza la ley Colombiana, sin dejar de lado, que quien aparece como propietario, nunca ha tenido relación alguna de vinculación de vehículos de su propiedad, con mi defendida; lo mismo que el conductor involucrado, jamás ha sido contratado laboralmente por la llamada en garantía, por lo que se solicita su señoría, que en aras de una recta justicia, se ordene la exoneración de todo tipo de responsabilidad a mi apoderada.

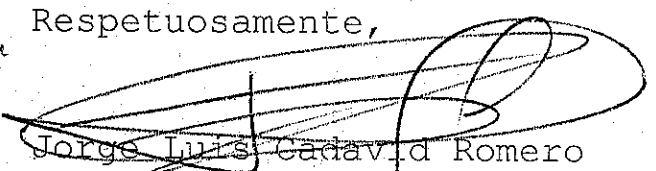
No sobra reiterar su señoría, que frente a la ley, que de manera especial regula el transporte de carga por carretera,

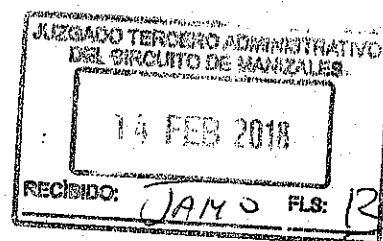
en armonía con la Doctrina y la Jurisprudencia Patria más reciente, contrastada con la verdad real que se ha de probar, no le asiste responsabilidad a las empresas que se encuentren dentro de estos precisos marcos conceptuales, salvo el evento de que el hecho suceda con sus vehículos propios, arrendados o tomados en administración por cualquier medio legal.

Por último, vale resaltar la información registrada en el manifiesto de carga, para probar, que este documento por sí solo, no es soporte o prueba eficiente y eficaz, para que el despacho, acepte y decida en contra de mi apoderada; y por el contrario probar, que se trata de un documento de tipo legal, que se debe de portar durante todo el recorrido que realice un vehículo de carga, despachado por una empresa; **y que no cumplir con dicho requisito, es sancionado pero por violación de normas de transporte** no por violaciones a la norma de tránsito; pues todo obedece a una relación comercial y contractual de transporte de mercancía, para lo cual existe un acuerdo de voluntades contractuales y un precio a título de flete, cancelado por mi apoderada.

Con este objetivo y legal escrito de alegatos de conclusión, y por la claridad y verdad real, solicito al despacho que al momento de emitir un fallo, sea de tipo favorable a los intereses de mi apoderada, en aplicación objetiva de los principios de justicia, derecho y equidad.

Respetuosamente,


Jorge Luis Cadavid Romero
c.c. nro 7.535.429 de Armenia Q.
t.p. 96.400 del c.s.j.





JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

S.430

RADICACIÓN: 17001-33-33-004-2014-00566-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: BERTILDA ROSA VALENCIA Y OTROS
DEMANDADO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A - JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO
LLAMADOS EN GARANTIA: ALLIANZ SEGUROS S.A - COOPERATIVA QUINDIANA DE TRASPORTADORES LTDA.

El Despacho profiere sentencia dentro del proceso de la referencia.

La actuación ha cumplido con todas las ritualidades procesales previstas en la ley y no se observa motivo alguno que pueda dar lugar a la nulidad de lo actuado, por lo cual se profiere decisión que finalice la instancia.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

1.1. PRETENSIONES

Solicita la parte demandante, a través de apoderado judicial, que por medio de sentencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

1. Se **DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE LA DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y EN FUERO DE ATRACCIÓN LA EMPRESA COLDETRANS COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A – JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, por la muerte violenta del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, en hechos ocurridos el día 12 de Junio de 2013, cuando se desplazaba en calidad de conductor del vehículo Motocicleta de Placas XFG83A y colisionara con el Vehículo Tracto camión de Placas TTG-200 de propiedad del señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, en la vía Cauya – La Pintada, Kilómetro 31 + 750 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas).
2. Por concepto de indemnización de perjuicios, la parte actora se permitió manifestar lo siguiente:
 - 2.1. Por concepto de **PERJUICIOS MORALES** ocasionados como consecuencia directa de los momentos de angustia, sufrimiento e intenso dolor que padeció el grupo familiar por el in suceso donde perdió la vida el señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, unas sumas equivalentes a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - a. Para **OMAIRA GUERRERO LARGO** en su condición de Compañera Permanente del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.

- b. Para **ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - c. Para **BERTILDA ROSA VALENCIA**, en su condición de Madre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - d. Para **ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Hermano del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - e. Para **FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Hermano del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - f. Para **OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
 - g. Para **UBER GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
- 2.2. Por concepto de **PERJUICIOS MATERIALES O PATRIMONIALES**, debidos a los demandantes: **OMAIRA GUERRERO LARGO (Compañera Permanente del Fallecido)** y a los señores **ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, BERTILDA ROSA VALENCIA (Padres del Fallecido)**, quienes obran en nombre propio y en condición de Compañera Permanente y Padres del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (Fallecido)**, quienes sufrieron el daño en forma directa reclaman perjuicios materiales en calidad de lucro cesante (Art. 1614 C.C.), consistentes en la privación de una ayuda económica que periódicamente recibían y recibirían de su Compañero Permanente e Hijo, el señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, quien laboraba como Administrador de la Asociación de Mineros la montaña del Municipio de Quinchía- Risaralda, actividad por la cual percibía unos ingresos mensuales de Un Millón Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente (\$1.500.000.00), con los cuales aportaba para la manutención de su núcleo familiar.
- Consideró el apoderado de la parte actora que estos perjuicios deben estimarse teniendo en cuenta los siguientes factores: Supervivencia de la víctima, ingresos presentes y futuros de la víctima, destinación de ingresos, supervivencia de sus padres y compañera permanente, falta de productividad del fallecido, lucro cesante, por los menos a los intereses con corrección monetaria de la indemnización causada desde la fecha de su muerte (12 de junio de 2013), hasta que se produzca su efectivo cumplimiento. Liquidación que deberá hacerse teniendo en cuenta el factor por renta, aceptado por la Jurisprudencia y la Doctrina para la indemnización futura, los cuales consideró superiores a CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000).
- 3. Que se le dé cumplimiento al fallo en los términos del Artículo 192, 193 y 195 del Código de lo contencioso Administrativo.
 - 4. Las demandadas están obligadas a pagar a mis mandantes sobre las sumas de dinero que el fallo determine en favor de cada uno de ellos, intereses moratorios, con fundamento en la Sentencia Constitucional No. C – 188 de Marzo 29 de 1999.

1.2 HECHOS

Fueron descritos por el apoderado judicial de la parte actora, los que a continuación se resumen:

El día 12 de Junio del 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia, conducía la motocicleta con placas XFG83A con la debida protección, hacia el municipio de Quinchía (Risaralda), con el fin de cumplir con su actividad laboral.

Siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana, de la fecha mencionada, en la vía Cauya – La Pintada Kilómetro 31 + 950 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas), al momento que disponía salir de una curva cerrada por el carril de subida con doble línea, en la que se prohíbe adelantar, fue atropellado de manera intempestiva por el vehículo tracto camión de placas TTG – 200, que invadió el carril contrario por donde se desplazaba el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Producto del accidente el señor Israel Gutiérrez Valencia, falleció en el lugar de los hechos.

El sitio donde ocurrieron los hechos no contaba con señalización alguna, con el fin de advertir que metros más adelante, se encontraba un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional, hecho por el cual ambos carriles no tenían disponibilidad para el tránsito.

En el informe pericial de Necropsia del 12 de junio de 2013, se informa que la manera de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia fue “violenta – accidente de tránsito”, con causa básica de la muerte; “Trauma contundente”.

1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO

La parte actora invocó como fundamentos de derecho, las siguientes disposiciones de rango constitucional y legal.

Artículo 90 de la constitución política de Colombia; Artículos 104 y 140 del Código de lo Contencioso Administrativo.

Adujo que en el caso *sub examine*, se alega la existencia de una falla en el servicio por parte de la Nación- Ministerio de Defensa Policía Nacional, consistente en la omisión en el momento de la instalación del puesto de control.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado indica que para determinar si efectivamente se incurrió en una falla del servicio, y en consecuencia proceder a declarar la responsabilidad del Estado, por la ocurrencia de daños en los cuales la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones, debe realizarse por parte del operador jurídico el análisis entre el contenido obligacional y el grado de cumplimiento u observancia de dichas obligaciones, por parte de la entidad pública a quien se le imputa la falla.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la teoría de causalidad adecuada, en caso de falla en el servicio por omisión, para concluir que los miembros de la Policía Nacional, no cumplieron con los mandatos del manual de patrullaje de la Policía Nacional y su omisión fue determinante en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Expresó que el propietario del vehículo tracto camión, la compañía Colombiana de transportes COLDETRANS S.A y Empresa usufructuaria del vehículo; son igualmente responsables de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Argumentó que existen fundamentos serios, que permiten determinar que en los hechos que dieron origen de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, no hubo ningún tipo de responsabilidad de la víctima.

2- CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO

Juan Augusto Ríos Osorio contestó la demanda a través de apoderado (fls. 132 a 138, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos, que otros no le constan y que los demás no son hechos. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, las siguientes excepciones:

- **“Hecho de un tercero”**. Por cuanto fue la atención temeraria de la Policía Nacional, lo que produjo el accidente y con él las lamentables consecuencias. En tal sentido esta última entidad obro con culpa al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función.
- **“Concurso de la víctima del daño”**. Expresó que el señor Israel Gutiérrez Valencia obró con imprudencia al conducir excediendo los límites de velocidad, hecho que no permitió detener su motocicleta evitando así el impacto con el camión de placas TTG 200.
- **“Inexistencia de los daños alegados por los demandantes”**. El apoderado judicial de la parte demandada manifestó que todas las afirmaciones que se hagan, deben tener soporte correspondiente. De no ser así se estaría patrocinando un enriquecimiento sin justa causa.
- **“Inexistencia de prueba de la responsabilidad de los demandados”**. Se manifiesta que en la demanda se relata de manera contundente el evento que da lugar a la reclamación, pero no acreditan en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado con el perjuicio sufrido por los demandantes

2.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL.

La nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, contestó la demanda a través de apoderado (fls. 190 a 195, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos y que otros no lo son. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, además, las siguientes excepciones:

- **“Culpa exclusiva y determinante de la víctima”**. El señor Israel Gutiérrez Valencia conducía a una velocidad no permitida, pues la posición de su cuerpo lo confirma, ya que este fue encontrado a 4,50 mts, lo que fuerza concluir que el impacto con el tracto camión lo devolvió a esa distancia y por lo tanto el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo sacó de su carril.

Finalmente el apoderado de la parte demandada manifiesta que en el presente caso, se configuro un rompimiento del nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido por la administración.

- **“Rompimiento del nexo causal”**. El apoderado de la parte demandada señala que fue la víctima quien al tomar la curva a considerable velocidad, terminó ocupando el carril contrario por donde circulaba el tracto camión; además, hace mención que para aducirse responsabilidad administrativa, y se logre la indemnización pretendida, deben probarse entre otros presupuestos la relación de causalidad entre el daño y el hecho, aspecto que para el *sub-examine* no es claro.

2.3 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A

La Compañía Colombiana de Transportes S.A, contestó la demanda a través de apoderado (fls. 202 a 211, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos y que

otros no le constan. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, además, las siguientes excepciones:

- **“Hecho de un tercero”**. Como quiera que las causas que originaron el daño alegado en el libelo y sus consecuencias, fueron atribuidas a la Policía Nacional, al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función, pues ocuparon el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dieron la orden de continuar al conductor de camión de propiedad, ocupando con ello el otro carril y sobre una curva cerrada.
- **“Concurso de la víctima del daño”**. Como quiera que al observar el material fotográfico allegado al proceso, se dilucida, que el señor Israel Gutiérrez Valencia, obró con imprudencia, al conducir su vehículo excediendo los límites de velocidad, hecho que no le permitió conservar su carril y detener su motocicleta, evitando así el impacto con el camión mencionado.
- **“Inexistencia de los daños alegados por los demandantes”**. Mientras no se pruebe el daño y su cuantía, no podrá accederse a las pretensiones de la demanda.
- **“Inexistencia de prueba de la responsabilidad de los demandados”**. Teniendo en cuenta que la parte actora no acredita en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado y el daño alegado en el libelo.

3. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A ALLIANZ SEGUROS S.A POR PARTE DE JULIAN AUGUSTO RÍOS OSORIO

A través de providencia del 25 de febrero de 2016, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por el señor Juan Augusto Ríos Osorio a Allianz Seguros S.A (fls. 233,vto C.1)

3.1 PRONUNCIAMIENTO DE ALLIANZ SEGUROS S.A

Allianz Seguros S.A., intervino a través de apoderado y, sobre los hechos de la demanda, expuso que no le consta ninguno de ellos. Respecto de las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas. Folio 282 cuaderno 1A.

Propuso las siguientes excepciones

- **“No se encuentra probado que el vehículo de placas TTG-200, fue el causante del accidente acaecido”**. En la medida que no se demuestre que fue la conducta desplegada por el conductor del vehículo de placas TTG-200, la causa única del accidente acaecido, no podrá proferirse condena en contra de la misma.
- **“Presencia de causas excluyentes”**. La Policía Nacional no tomó las mínimas precauciones para la instalación del retén en la carretera donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia. Lo anterior, por cuanto, al hacer dicha instalación, ocuparon el carril de bajada, deteniendo inicialmente varios vehículos, para luego sin precauciones y de forma imprudente, dar órdenes a varios conductores para continuar. Entre estos vehículos se encuentra el camión TTG-200, el cual ocupó el otro carril y sobre una curva cerrada.
- **“Hecho de un tercero”** Hizo consistir este hecho exceptivo en el hecho de que el accidente donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia fue por su propia culpa. Ello, por cuanto de manera intempestiva y temeraria venia conduciendo su motocicleta a una velocidad excesiva no permitida.
- **“Diligencia y cuidado”**. Del análisis de la prueba documental aportada por el demandante, se advierte que los conductores de los vehículos producto del accidente de

tránsito mencionado, se encontraban en perfectas condiciones para la conducción de los mismos.

– **“Ausencia de responsabilidad del codemandado Juan Augusto Ríos Osorio, debido al rompimiento causal como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima”** en caso que el Despacho considere que en el presente caso sí quedó demostrada la responsabilidad del conductor del vehículo de placas TTG-200. Existen causales de exoneración de responsabilidad del señor Israel Gutiérrez Valencia, en virtud de los cuales el presunto responsable se libera de responsabilidad cuando logra demostrar la ruptura del nexo causal entre el hecho generador de responsabilidad y el perjuicio sufrido. Así pues, insiste, que la causa del accidente donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia., fue producto de su imprudencia e inobservancia de las normas de tránsito.

– **“Excepción liberativa del demandado Juan Augusto Ríos Osorio, por presencia de una causa extraña”**. El comportamiento imprudente y contrario a las normas por parte del conductor de la motocicleta, constituye una causa extraña.

– **“Compensación de culpas entre las partes”** En el caso *sub examine*, opera la compensación por culpas entre las partes. Ello, por cuanto, es indiscutible que el daño se produjo por el propio obrar del conductor de la motocicleta.

– **“Ausencia de elementos generadores de responsabilidad civil extracontractual”** Como quiera que el señor Julián González Valencia, no fue el causante del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez, por lo tanto, no hay lugar a pagar los perjuicios reclamados en la presente acción.

– **“Los perjuicios extrapatrimoniales reclamados por los demandados son inexistentes y/o se encuentran ampliamente sobreestimados”** Los perjuicios reclamados por los demandantes, no pueden ser reconocidos en una suma mayor a la establecida como límite por la jurisprudencia unificada por el Consejo de Estado.

– **“Reducción de la indemnización. El amparo de responsabilidad civil extracontractual por muerte o lesiones a una personas, solo opera en exceso del seguro obligatorio de tránsito”** Como quiera que el vehículo de tracto camión placas TTG- 200, y la motocicleta placas XFG- 83A, debían de tener expedido su seguro obligatorio de accidentes, seguro obligatorio de amparo los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalario, e indemnización por muerte o incapacidad generada por accidente de tránsito. En caso que la aseguradora se vea obligada a pagar suma alguna de dinero por los perjuicios que sufrieron los demandantes por el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez, solo pagará el exceso que no fue cubierto por el seguro de daños corporales causadas a las personas en accidente de tránsito.

– **“prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro”** Teniendo en cuenta la fecha del accidente en el que falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia, y la fecha en que fue vinculada Allianz Seguros S.A , queda claro que transcurrieron más de dos años, es decir del término de la prescripción ordinaria de las acciones que derivan el contrato de seguro.

– **“Falta de configuración actual del siniestro”** Hasta el momento no se cumplió con el requisito establecido del artículo 1077 del Código de Comercio, en cuanto se debe demostrar la existencia del siniestro y la cuantía del mismo.

4. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LA COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTE LTDA POR PARTE DE COLDETRANS S.A

A través de providencia del 28 de julio de 2016, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por COLDETRANS S.A a la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA (fls. 304, C.1A)

4.1 PRONUNCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTE LTDA

La Cooperativa Quindiana de Transportes LTDA., intervino a través de apoderado y, sobre los hechos de la demanda, expuso que no le constan. Respecto de las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas.

Propuso las siguientes excepciones

- **“Inexistencia de solidaridad”.** Por cuanto entre la Cooperativa y la llamante en garantía, no existe ningún tipo de relación o contrato, que pueda derivar en solidaridad civil por los daños o perjuicios que ocasionen los vehículos que se encuentran bajo su cuidado y administración.
- **“Excepción de mérito ausencia de culpa”** La falta de obligación de la llamada en garantía, al mantenimiento preventivo y correctivo y de conservación del vehículo a la empresa COLDETRANS S.A, la cual corresponde íntegramente al propietario del vehículo.
- **“hecho de un tercero”** El conductor del vehículo no tiene ningún vínculo con su representada.
- **“Inexistencia de responsabilidad”** Como quiera que no existe dependencia o subordinación entre el vehículo despachado con la carga ni con su propietario y, mucho menos con su conductor y la llamada en garantía.

5. TRASLADO DE EXCEPCIONES

La parte demandante no se manifestó respecto a las excepciones propuestas por los demandados.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

- **Parte Demandante.** En sus alegatos de conclusión el apoderado judicial de la parte demandante se ratificó en los hechos y pretensiones de la demanda.

Señaló que se configuró una falla del servicio en cabeza de las entidades demandadas. Ello, por la falta de cuidado e inobservancia de los reglamentos al instalar un puesto de control, sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función. Esto es así, por cuanto, ocuparon el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dieron la orden de continuar al conductor del tracto camión ocupando el carril en contravía y sobre una curva cerrada, en la cual el conductor de la motocicleta, el señor Israel Gutiérrez no tuvo la oportunidad de proteger su vida (fls. 414 a 432, C.1B)

- **Parte demandada**

- **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE “COLDETRANS S.A”** El apoderado judicial de la Compañía Colombiana de Transporte **“COLDETRANS S.A”**, insistió en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Manifestó que fue la acción temeraria de la Policía Nacional, lo que dio lugar a que se produjera el accidente. Citó diferentes testimonios recaudados en la audiencia de pruebas, para indicar que el señor Israel Gutiérrez Valencia, obró con imprudencia al conducir su vehículo excediendo el límite de velocidad (fls. 381 a 384, C.1A).

- **“NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL”** El apoderado de la Policía Nacional insistió en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Argumentó que en el caso *sub examine*, se configuró una culpa exclusiva de la víctima. Ello, por cuanto, en el croquis levantado con ocasión al accidente de tránsito donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia, se observa al punto de impacto, donde el motociclista pegó contra el tracto del camión, invadiendo con esto el carril de este último.

De todo el análisis realizado en sus alegatos de conclusión concluye, que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo saco del carril, abandonando el suyo, para después chocar contra el vehículo tracto camión.

– **Llamada en garantía Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA.** El apoderado judicial de la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA se ratificó en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de las demanda.

Aseveró que si en la responsabilidad contractual adquirida por el propietario y un tercero, no se reconoce la solidaridad o responsabilidad civil, tampoco debe reconocerse en la extracontractual, adquirida por el mismo propietario y una empresa que lo único que realizó, fue despacharlo con una mercancía, desde un origen a un destino.(fls. 309 a 402, C.1A).

– **Llamada en garantía Allianz Seguros S.A.** El apoderado judicial **de Allianz Seguros S.A.**, se ratificó en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Aseguró que la Policía Nacional no tomó las mínimas precauciones para la instalación del retén, pues tal como se desprende de las pruebas obrantes en el plenario, lo policías al instalar dicho carril ocuparon el carril de bajada deteniendo varios vehículos para su registro, pero sin señal alguna para los demás automotores que se venían desplazando por esa vía.

El retén no fue instalado en una recta como debía ser, según las normas de tránsito, sino que se instaló en una semicurva, lo que también dio lugar a que se produjera el accidente (fls. 403 a 413, C.1B).

7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Representante del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico gravita en torno a establecer si las entidades demandadas, son administrativamente responsables por el fallecimiento en accidente de tránsito del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, en instantes en que este conducía su motocicleta sobre el carril derecho de la vía, y fue impactado de forma súbita por un tracto camión que regresaba a su carril reglamentario, luego de esquivar un retén policial que modificó su tránsito habitual.

Para efectos de resolver el interrogante planteado, el despacho identificará el régimen jurídico de responsabilidad aplicable, para luego efectuar el análisis de los elementos que integran esta modalidad de responsabilidad estatal, a la luz de la prueba recaudada en la actuación procesal.

2.1 TESIS DEL DESPACHO

La tesis que sostendrá el despacho es que la imputación jurídica por el accidente de tránsito en que perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, se atribuye únicamente a la Policía Nacional, que de forma anti técnica y aumentando el riesgo propio

de la conducción de vehículos automotores, instaló un retén ocupando de tal manera la vía pública, que obligó a quienes transitaban por la misma, a ocupar el carril contrario de forma peligrosa, tal como quedó materializado en el accidente objeto de la Litis.

2.2. ASPECTOS GENERALES EN CUANTO AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”¹ de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”².

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo, argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012³ y de 23 de agosto de 2012⁴.

En cuanto a la imputación, exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica⁵, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala Plena de la Sección Tercera: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional).

Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica⁶.

¹ En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, sentencia C- 832 de 2001.

² RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public français”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BÉNOIT, F. “Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

³ Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente: 21515. MP: Hernán Andrade Rincón.

⁴ Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente: 23492. MP: Hernán Andrade Rincón.

⁵ “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927.

⁶ El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones.

Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”⁷.

Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no ⁸.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible.

Primero si hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección⁹ frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible.

En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano.

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de la acción como de omisión de un comportamiento, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

Dicha formulación no debe suponer, se repite, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a una responsabilidad objetiva global de la Administración.

⁷ MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

⁸ JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala Plena de la Sección Tercera: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (...) No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente: 14170.

⁹ Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. CASAL H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31.

3. DEL CASO CONCRETO

Con fundamento en el **acervo probatorio** obrante en el expediente, el Juzgado encuentra probado:

- Registro civil de nacimiento de Israel Gutiérrez Valencia. Folio 53 del cuaderno principal.
- Registro civil de defunción de Israel Gutiérrez Valencia, con registro del 12 de junio de 2013. Folio 54 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Omaira Largo Guerrero. Folio 55 del cuaderno principal.
- Registro de matrimonio realizado entre Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia. Folio 56 del cuaderno principal.
- Registro de nacimiento de Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia. Folio 57 y 58 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia. Folio 59 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Uber Gutiérrez Valencia. Folio 60 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Otoniel de Jesús Gutiérrez Valencia. Folio 61 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Fernando Gutiérrez Valencia. Folio 62 del cuaderno principal.
- Certificación de la Asociación de Mineros La Montaña, en la cual se indica que el fallecido Israel Gutiérrez Valencia, laboraba en esa asociación con un salario de \$1.500.000 mensuales. Folio 63 cuaderno principal.
- Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro Asociación de Mineros La Montaña. Folio 64 y 65 cuaderno principal.
- Declaración extra juicio con fines procesales rendida por Omaira Guerrero Largo, en la que indica que convivió en unión marital de hecho con el fallecido Israel Gutiérrez Valencia, por espacio de 14 años. Folio 66 cuaderno principal.
- Declaración extra juicio con fines procesales rendida por José Didier Chiquito Trejos, Nancy calvo Trejos y Luz Damary Uchima Guevara. Folio 67 y 68 cuaderno principal.
- Copia de informe de accidente de tránsito del 12 de junio de 2013, en donde se reporta el accidente ocurrido entre una motocicleta y un tracto camión. Folio 72 y 74 cuaderno principal.
- Copia de la inspección técnica al cadáver de Israel Gutiérrez Valencia. Folio 76 al 79 del expediente.
- Informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde fallecido el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 80 al 85 cuaderno principal.
- Copia del libro de guardia - cuaderno de minuta de policía – realizado por los agentes que adelantaron el puesto de control en el sector aledaño al lugar en donde perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 166 y 167 cuaderno principal.
- Copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde él TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito con choque entre moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.
- Informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal.
- Actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064. Primer respondiente Jon Jairo Orozco Flórez. Testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.
- Copias del expediente adelantado en la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la muerte en accidente de tránsito del señor Israel Gutiérrez Valencia. Folios 2 al 211 del cuaderno de pruebas comunes.
- Testimonios de:

John Jaime Orozco Flórez: Intendente de la Policía Nacional.

Adrián Esteban Rendón Rincón: Policía de carreteras desde hace 17 años.

Julián González Valencia: Conductor del tracto camión que colisionó con la moto. Veintidós (22) años de experiencia como conductor.

Luz Damary Uchima Guevara: No fue testigo presencial de los hechos.

Roberto Elías Lemas Castro: Trabajador del sector minero, y representante del Área De Reserva Especial Minera de Quinchia. Asociado de la asociación de mineros La Montaña.

Nulber Londoño Velazco. Minero, testigo de la actividad minera desempeñada por el fallecido con La Asociación Minera la Montaña.

3.1 EN CUANTO AL DAÑO ANTIJURÍDICO

Se reitera que éste, comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable: i) bien porque es contrario a la Constitución Política o, en general, a cualquier norma de derecho positivo, o ii) porque sea irrazonable, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

El precedente de la Corte Constitucional sobre el tema señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”¹⁰.

Asimismo, se afirma que “(...) esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”¹¹

Por otra parte, la Corte también ha considerado que el daño antijurídico se encuadra en los *“principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”*.

Ahora bien, ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la noción de daño antijurídico es un concepto constante, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que un *“Estado Social de Derecho solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”*¹².

Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

En este orden de ideas, *“el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo*

¹⁰ Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002.

¹¹ Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1º de agosto 1996, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 29 de octubre de 2002. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.

¹² Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigírsele al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp.9550, C.P.: Daniel Suárez Hernández.

*evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil*¹³.

Así las cosas, el daño se convierte en el primer elemento de la responsabilidad, es la causa de la reparación, se trata de un requisito indispensable para declarar la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, pese a la existencia del daño, es posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal, *“es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado (...), el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre*”¹⁴.

Una vez el juez logra verificar la existencia del daño, le corresponde determinar la naturaleza del mismo, esto es, analizar si es posible calificarlo como **antijurídico o injusto**, puesto que a la luz del artículo 90 de la C.P. el Estado responderá patrimonialmente **sólo por los daños antijurídicos que le sean imputables**, lo que significa que no habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado cuando el juez concluya que el demandante tenía el deber de soportar el daño sufrido.

Realizada la valoración probatoria, el despacho considera, tal y como se señaló en el acápite de hechos probados, que se encuentra acreditada la lesión del bien jurídico vida del ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el 12 de junio de 2013, en la vía Cauya – La Pintada Kilometro 31-950 vereda La Sierra del Municipio de Riosucio Caldas, en inmediaciones de un retén policial realizado por la especialidad de carreteras.

En este orden, se considera que ni la víctima directa ni las indirectas, estaban llamados a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, daños sobre su derecho constitucional a la vida, que es incuestionable en un Estado Social de Derecho, desde la perspectiva no sólo formal, sino también material de la antijuridicidad.

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente **juicio de imputación**, que permita determinar si dichos daños pueden ser atribuidos fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

Con base en lo anterior, de las pruebas obrantes en el proceso se concluye que el resultado dañoso surgió como consecuencia de la desviación inapropiada y peligrosa que del tránsito normal sobre la vía, realizaron miembros de la Policía Nacional, cuando instalaron un retén sin tener en cuenta las condiciones de seguridad que afectaban el normal funcionamiento del servicio.

Sobre la instalación anti técnica del retén, se concluye del material probatorio obrante en el plenario lo siguiente:

De folio 73 al 74 del cuaderno principal, obra informe policial de accidentes de tránsito que muestra que el tracto camión quedó ubicado al momento del accidente, regresando a su carril reglamentario, y que la víctima fatal, quedó sobre el carril en donde debía regresar el camión, esto como producto del impacto frontal acaecido.

Ahora bien, como análisis del hecho, resalta el despacho lo siguiente: en el numeral 13 del informe, correspondiente a observaciones, el miembro de la Policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien atendió el hecho dejó por escrito:

¹³ Hinestrosa, Fernando. *Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa*. Citado por Henao, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.

¹⁴ Henao, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 38.

“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL – SETRA – Decal Unir “Sic.

A esta situación se suma el testimonio rendido a instancia del presente juicio de responsabilidad por el mismo testigo Rendón Rincón, en el que indicó que hacía parte de la policía de carreteras desde hace 17 años, que al momento del hecho se encontraba en la alcaldía de Riosucio Caldas en compañía de otro policía. Que realizó el informe del accidente de tránsito, indicando que era una vía en doble sentido, por lo que no permitía el adelantamiento de vehículos; que no realizó hipótesis sobre las posibles causas del accidente, porque sus superiores le habían indicado en capacitaciones y de manera verbal, que no lo hiciera, en la medida en que para estos casos, se debía adelantar una investigación a fondo sobre el accidente.

Exteriorizó que como observación acerca del accidente, plasmó en su informe que los testigos le indicaban que antes del lugar del accidente había un puesto de control de la Policía, y que cuando él llegó al sitio, el mencionado puesto de control ya no estaba.

Ahora bien, considera el despacho que el hecho comprobado de que se hubiera movido del lugar de los hechos el puesto de control que tenía levantado la Policía de Carreteras, *por el motivo que se hubiere hecho*, resulta esencial para el esclarecimiento del proceso, dado que indefectiblemente el puesto policial incidió en el cambio de rumbo que sobre la vía realizó el tracto camión, y sin la existencia de este puesto, el conductor no habría invadido el carril contrario, con las consecuencias que hoy nos traen al presente análisis.

De otro lado, también reposa como prueba dentro del expediente, informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde falleció el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, folio 80 al 85 cuaderno principal, de donde el despacho extrae las siguientes conclusiones probatorias:

- a) Que la curva por donde subió el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, era cerrada, de 90 grados, sin que pudiera observar que por el carril que normativamente le correspondía, se desplazaba un tracto camión en sentido contrario. Vehículo pesado con el que impacto de frente sin que pudiera tener ninguna reacción.
- b) Que el tracto camión que causó la muerte del ciudadano, venía entrado a su carril reglamentario, para tomar la curva cerrada hacia la izquierda, y que el fallecido venía tomando la misma curva pero hacia la derecha - sentidos contrapuestos -. Asimismo, que el impacto en contra del vehículo pesado se dio de frente y por su lado izquierdo, tal como se demuestra con la imagen de la fotografía No.7, en primer plano.
- c) Que verificando la fotografía No. 8, tomada desde la parte de atrás del vehículo pesado, en un plano abierto, se puede observar claramente que este trata de ingresar de nuevo a su carril, obviamente y analizadas las pruebas en su conjunto, luego de esquivar el control policial que obstruía el tráfico habitual del sector.

Asimismo, reposa como prueba en el plenario, folios 87 al 89, copia de documento emanado de la Policía Nacional, acerca del control de delitos y contravenciones, en donde se indica en relación a la forma en que se deben adelantar los puestos de control por parte del personal uniformado de esa institución, que se deben realizar según los parámetros establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en la Resolución No. 0911 del 2010 – Manual de patrullaje Urbano-.

Al respecto, el documento sobre control de delitos y contravenciones destaca que:

“3. INSTALAR Y UBICAR EL PUESTO DE CONTROL: Ubicar el personal y el Kit de puesto de control en el sitio establecido según orden de servicios, teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular, o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo el personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio. Informar al CAD o radio

operador, el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.”

También reposa copia del libro de guardia - cuaderno de minuta de policía – realizado por los agentes que adelantaron el puesto de control en el sector aledaño al lugar en donde perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 166 y 167 cuaderno principal y 38 y 39 del cuaderno de pruebas comunes No. 4. De esta prueba en contraste con la testimonial rendida por Adrián Esteban Rendón Rincón, se extraen las siguientes conclusiones:

- a) Que en dirección al puesto de control, a las 7:30 de la mañana, se desplazaron seis (6) uniformados de la Policía Nacional a saber: Sl. Orozco Flórez, Sl. Rendón Rincón, Sl. González López, PT. Fernández Rivera, PT. Acevedo Pulgarín y PT. Mejía Zuluaga.
- b) Que dos (2) de los seis (6) uniformados se desplazaron hacia el Municipio de Riosucio, Sl. Rendón Rincón y PT. PT. Mejía Zuluaga; es decir que en el puesto de control quedaron cuatro (4) uniformados de la Policía.

De otro lado, reposa como prueba en el expediente, copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde el TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito por choque entre moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.

Por otra parte, reposa como prueba en el plenario, informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal y la actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064; primer respondiente John Jairo Orozco Flórez y testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.

Ahora bien, con respecto a los testimonios rendidos en el presente asunto, el despacho destaca los siguientes elementos:

Testigo John Jaime Orozco Flórez: Intendente de la Policía Nacional. Dijo al despacho que se encontraba de servicio en el puesto de registro y control, cuando un tracto camión se metió en contra vía en sentido Anserma Riosucio e impactó con un motociclista. Indicó que no recuerda cuantos policías hacían parte del puesto de control y que recordaba que tenían detenido un tracto camión que llevaba una retro excavadora.

Asimismo, expuso que el retén policial estaba ubicado más o menos a media cuadra de donde sucedió el accidente de tránsito.

Manifestó que para adelantar el retén policial, el vehículo que pasaba el puesto de control tenía que invadir el carril contrario.

Expuso que en ese momento, él era el encargado del registro y control y que no recordaba el número de policías que se debían emplear en una operación de registro y control. Dijo desconocer la norma técnica policial, para el planeamiento del servicio de carreteras, a pesar de haber trabajado en ese servicio especializado, por espacio de 15 años.

Se destaca por el despacho que el testigo, reusando contestar las preguntas del apoderado de la parte demandante, expuso que no recordaba si aplicaba el instructivo para la correcta realización de puestos de control de la Policía de Carreteras.

Asimismo, indicó que no dispuso de policías que controlaran el tráfico antes ni después del puesto de registro, argumentado que todos los policías se encontraban dentro del área de registro; que no sabía ni recordaba cuantos metros medía el puesto de registro y control, aun cuando él mismo lo había instalado.

Expuso que no tenían ningún policía ubicado con paletas o señales de pare o siga, para controlar los vehículos que seguían transitando por el sector.

Manifestó que ningún policía le ordenó al conductor del camión que se accidentó, que se detuviera. En el mismo sentido, indicó no saber a qué velocidad venía el conductor de la motocicleta y que al mismo tiempo, el accidente fue responsabilidad del conductor del tracto camión, en la medida en que invadió la vía, tanto que el punto de impacto estaba ubicado en el carril de la motocicleta.

Continuó su relato, manifestando que el puesto de control policial detiene selectivamente a los vehículos que transitan. Indicó que el puesto de control estaba ocupando parte del carril bajando, razón por la cual el tracto camión que causó el accidente no cabía y debía esperar que algún policía le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha. Con este mismo planteamiento, el intendente insistió en que ningún policía, dio vía ni detuvo al tracto camión accidentado.

Indicó que los conos de señalización, le mostraban al conductor del tracto camión que mermara la velocidad. Expuso que no tenía personal, ni paletas para poner al principio y al final del puesto de control. Reiteró que no tenían personal señalizando en ambos extremos.

De manera trascendental para las resultas del presente asunto, expuso que teniendo en cuenta las características del sitio del accidente, hubiese sido procedente ubicar personal al principio y al final del puesto de control para indicar a los conductores que no continuaran o que lo hicieran con mucha precaución.

Al final de su testimonio, reiteró que no se cumplieron con los requerimientos de un puesto de control policial, porque no se encontraban en esa actividad, sino simplemente en un área de registro y control móvil.

Testigo Julián González Valencia: Conductor del tracto camión que colisionó con la moto. Veintidós (22) años de experiencia como conductor. Indicó que al momento de los hechos estaba en el sector del accidente un retén de la policía de carreteras. Que a un lado del retén, tenían una cama baja que portaba una retro excavadora encima. Que delante de él venía un camioncito, al cual la Policía le hizo señal de pare. El camión pequeño paró, y como él quedó en la vía, prosiguió su marcha. Testificó que cuando ya está regresando a su carril, al finalizar los conos de señalización que había ubicados en el retén, sintió el golpe de la moto que aprecio rápido y le pego a la parte frontal de la mula. Por último destacó que el retén de la Policía estaba muy pegado a la curva, lo que impedía el adelantamiento.

Expuso que cuando llegó al retén policial, había cuatro (4) vehículos siendo requisados por los uniformados. Concluyó que el retén estaba mal ubicado, esto por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Para esta autoridad judicial el análisis de las condiciones tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito quedan develados según las pruebas arrimadas al plenario, en donde se describen detalladamente dos elementos: 1. El lugar del accidente presentaba doble línea continua¹⁵, es decir, presentaba prohibición para el adelantamiento de vehículos, y 2. El carril para el tránsito normal de vehículos estaba ocupado por varios camiones que estaban siendo requisados por integrantes de la Policía Nacional.

En este sentido, tenemos probado que el sector en donde se presentó el accidente de tránsito, en efecto se vio modificado en sus condiciones normales de movilidad, por la intervención de una autoridad de tránsito, en este caso, de la Policía de Carreteras, que modificó las condiciones normales de conducción por la vía.

¹⁵ ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

En intersecciones

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

3.2 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE PARA LOS EVENTOS EN QUE SE PRESENTA UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE ESTÁ INMERSA LA INTERRUPCIÓN DEL PASO NORMAL SOBRE LA VÍA

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron en aquella las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la Administración.

Al respecto el Consejo de Estado ha reiterado que cuando se presentan accidentes de tránsito causados por falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de una vía que se encuentre obstruida, obstaculizada o en la que se le realicen cambios transitorios, debe responder por los daños que se deriven de estos hechos, siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controló o vigiló el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente.

*“(…) Se tiene que el accidente donde resultó lesionado el señor Eduardo Andrés Guzmán se produjo en la carrera sexta con calle séptima entre las 5:30 a.m. y 6:00 a.m. y que aquel obedeció a la existencia de unos escombros ubicados en la vía cerca de un separador que carecían de señalización, por lo que se procederá analizar si los mismos fueron dejados por alguna obra realizada por las entidades demandadas, caso en el cual se estudiara su responsabilidad. (...) En el caso sub lite, se tiene que EMPOCALDAS S. A. E. S. P realizó obras de mantenimiento a la red de acueducto y alcantarillado del sector de los Alpes en el Municipio de La Dorada – Caldas, las que ocasionaron escombros que no fueron recogidos, ni señalizados por la entidad, **por lo que hubo un incumplimiento a sus deberes legales que le acarrea responsabilidad patrimonial.** (...) Por tanto, correspondía al Municipio de La Dorada – Caldas verificar y controlar que las obras realizadas por EMPOCALDAS S. A. E. S. P no afectaran la circulación de los vehículos, que estuvieran señalizadas y que una vez las mismas terminaron no hubieran obstáculos que impidieran el libre tránsito; como ello no ocurrió, le asiste también responsabilidad al municipio de La Dorada de Caldas, quien junto con la empresa Empocaldas S. A. E. S. P serán condenados solidariamente a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes. (...)”*

*“(…) El Consejo de Estado, en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la **vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios,** ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controló o vigiló la ejecución de las obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente. (...) no dan lugar a la menor duda en el sentido de que los municipios tienen legal y reglamentariamente atribuida la función de velar por la conservación y el sostenimiento de las vías públicas destinadas a la circulación de personas, vehículos o cosas, en particular, tratándose de los elementos que hacen parte de las redes de acueducto y alcantarillado ubicados en dichas vías. (...)”*

*“¹⁶**Negrillas del despacho.***

En este sentido, si la Policía Nacional, no controló de manera adecuada el tránsito de automotores, ante la realización del retén que efectuó, debe responder por los daños causados a las víctimas acontecimiento antijurídico.

3.3. LA IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO EN EL CASO CONCRETO

A efecto de establecer este elemento constitutivo de la responsabilidad demandada, el despacho encuentra procedente referir los hechos probados en relación con la muerte acaecida al ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA.**

¹⁶ Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera sub sección B, Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 17001-23-31-000-2000-00188-01(31002)

3.3.1. EL ACCIDENTE

Está debidamente acreditado que el ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, murió como consecuencia de las numerosas lesiones que padeció a consecuencia del accidente ocurrido en la vía Cauya – La Pintada Kilómetro 31 + 950 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas) el 12 de junio de 2013, cuando impactó de frente en contra de un tracto camión que invadió su carril de conducción. Registro civil de defunción. Folio 54 del cuaderno principal.

En la vía en la que se produjo el accidente, la Policía Nacional realizaba un retén o puesto de control que obligaba a los vehículos que transitaban, a invadir el carril contrario. Pruebas testimoniales. Informe de accidente de tránsito.

3.3.2. EL RETÉN POLICIAL

En relación con la realización del retén policial se demostró lo siguiente:

De las pruebas obrantes en el proceso se concluye que el resultado dañoso surgió como consecuencia de la desviación inapropiada y peligrosa que del tránsito normal sobre la vía, realizaron miembros de la Policía Nacional, cuando instalaron un retén sin tener en cuenta las condiciones de seguridad que afectaban el normal funcionamiento del servicio.

Sobre La instalación anti técnica del retén, se concluye del material probatorio obrante en el plenario lo siguiente:

De folio 73 al 74 del cuaderno principal, obra informe policial de accidentes de tránsito que muestra que el tracto camión quedó ubicado al momento del accidente, regresando a su carril reglamentario, y que la víctima fatal, quedó sobre el carril en donde debía regresar el camión, esto como producto del impacto frontal acaecido.

Numeral 13 del informe, correspondiente a observaciones, el miembro de la Policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien atendió el hecho dejó por escrito:

“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL – SETRA – Decal Unir “Sic.

Testigo Adrián Esteban Rendón Rincón, quien exteriorizó en su informe que los testigos le indicaban que antes del lugar del accidente había un puesto de control de la Policía, y que cuando él llegó al sitio, el mencionado puesto de control ya no estaba.

Informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde falleció el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 80 al 85 cuaderno principal.

Copia de documento emanado de la Policía Nacional, acerca del control de delitos y contravenciones, en donde se indica en relación a la forma en que se deben adelantar los puestos de control por parte del personal uniformado de esa institución, que se deben realizar según los parámetros establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en la Resolución No. 0911 del 2010 – Manual de patrullaje Urbano-.

Al respecto, el documento sobre control de delitos y contravenciones destaca que:

“3. INSTALAR Y UBICAR EL PUESTO DE CONTROL: Ubicar el personal y el Kit de puesto de control en el sitio establecido según orden de servicios, teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular, o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo el personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio. Informar al CAD o radio operador, el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.” Folios 87 al 89.

Copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde él TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito por choque entre

moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.

Por otra parte, reposa como prueba en el plenario, informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal y la actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064; primer respondiente John Jairo Orozco Flórez y testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.

Ahora bien, con respecto a los testimonios rendidos en el presente asunto, el despacho destaca los siguientes elementos:

Testigo John Jaime Orozco Flórez: Intendente de la Policía Nacional. Dijo al despacho que se encontraba de servicio en el puesto de registro y control, que un tracto camión se metió en contra vía en sentido Anserma Riosucio e impacto con un motociclista. Indicó que no recuerda cuantos policías hacían parte del puesto de control y que recordaba que tenían detenido un tracto camión que llevaba una retro excavadora.

Asimismo, expuso que el retén policial estaba ubicado más o menos a media cuadra de donde sucedió el accidente de tránsito.

Manifestó que para adelantar el retén policial, el vehículo que pasaba el puesto de control tenía que invadir el carril contrario.

Expuso que en ese momento, él era el encargado del registro y control y que no recordaba el número de policías que se debían emplear en una operación de registro y control. Dijo desconocer la norma técnica policial, para el planeamiento del servicio de carreteras, a pesar de haber trabajado en ese servicio especializado, por espacio de 15 años.

Se destaca por el despacho que el testigo, reusando contestar las preguntas del apoderado de la parte demandante, expuso que no recordaba si aplicaba el instructivo para la correcta realización de puestos de control de la Policía de Carreteras.

Asimismo, indicó que no dispuso de policías que controlaran el tráfico antes ni después del puesto de registro, argumentado que todos los policías se encontraban dentro del área de registro; que no sabía ni recordaba cuantos metros medía el puesto de registro y control que él mismo había establecido. Expuso que no tenían ningún policía ubicado con paletas o señales de pare o siga, para controlar los vehículos que seguían transitando por el sector.

Expuso que ningún policía le ordenó al conductor del camión que se accidentó, que se detuviera. En el mismo sentido, manifestó no saber a qué velocidad venía el conductor de la motocicleta y que el accidente fue responsabilidad del conductor del tracto camión, en la medida en que invadió el carril de la moto, tanto que el punto de impacto estaba ubicado en el carril de la moto.

Continuó su relato, manifestando que el puesto de control policial detiene selectivamente a los vehículos que transitan. Indicó que el puesto de control estaba ocupando parte del carril bajando, razón por lo cual el tracto camión que causó el accidente no cabía y debía esperar que algún policía le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha. Con este mismo planteamiento, el intendente, insistió en que ningún policía, dio vía ni detuvo al tracto camión accidentado.

Indicó que los conos de señalización, le indicaban al conductor del tracto camión que mermara la velocidad. Expuso que no tenía personal, ni paletas para poner al principio y al final del puesto de control. Reitero que no tenían personal señalizando en ambos extremos.

De manera trascendental para las resultas del presente asunto, expuso que teniendo en cuenta las características del sitio del accidente, hubiese sido procedente ubicar personal al principio y al final del puesto de control, para indicar a los conductores que no continuaran o que lo hicieran con mucha precaución.

Al final de su testimonio, reiteró que no cumplieron con los requerimientos de un puesto de control policial, porque no se encontraban en esa actividad, sino simplemente en un área de registro y control móvil.

Con relación al anterior testimonio el despacho concluye lo siguiente. En primer término que la argumentación del comandante del operativo policial, tiene su baluarte en indicar que no se encontraba haciendo un puesto de control, pero para las resultas del proceso lo trascendental es que la presencia de los policías en la vía alteró las condiciones de conducción normales y seguras en que se puede utilizar, y en este sentido el servicio de Policía debió prever el suceso que al final desencadenó la pérdida de una vida; mucho más si tenemos en cuenta que el operativo era adelantado por la especialidad de Carreteras, con agentes de muchos años de experiencia.

Ahora bien, el testigo de la Policía, comandante del operativo policial, intenta mostrar que fue la imprudencia del conductor del tracto camión la que lo llevó a invadir el carril contrario a su marcha normal y a impactar con el motociclista fallecido, dado que nadie le dijo que se detuviera ni que continuara su marcha.

Sobre esta afirmación, el despacho considera que el planteamiento resulta ilógico y contrario, opuesto a cualquier tipo de solución plausible sobre el momento en que se presentó el accidente por lo siguiente:

Está probado que: a) Los policiales ocupaban un carril de la vía, b) Que tenían detenidos varios vehículos, es decir, que obstaculizaron el normal funcionamiento de la vía, c) Que para la ejecución del retén, su comandante no dispuso de ninguna unidad policial a la entrada o salida y d) que el tracto camión que colisionó con la motocicleta, estaba en marcha al momento del impacto y de superar el retén.

En esas condiciones, el testimonio del Intendente John Jaime Orozco Flórez es contradictorio, porque intenta demostrar que en el contexto que ha sido comprobado, el conductor del camión debió asumir una conducta de total inacción. Así, en criterio del intendente de la Policía y según el análisis del despacho, las posibilidades que tenía el conductor del tracto camión al encontrarse con el retén policial, fueron las siguientes: a) Que se detuviera, pero el testigo indica que nadie le dio esa orden; b) Que continuara su marcha, aun cuando el testigo indica que nadie le dio esa orden; o c) Que se mantuviera inactivo, situación imposible dada la marcha legal que sobre la carretera desarrollaba.

Ahora bien, para confrontar lo anterior, se analiza el testimonio del conductor del tracto camión:

Testigo Julián González Valencia: Conductor del tracto camión que colisionó con la moto y con veintidós (22) años de experiencia como conductor. Indicó que al momento de los hechos estaba en el sector del accidente un retén de la policía de carreteras. Que a un lado del retén, tenían una cama baja que portaba una retro excavadora encima. Que delante de él venía un camioncito, al cual la Policía la hizo señal de pare, frente a lo cual, este automotor paró y como él quedó en la vía, él prosiguió con su marcha.

Testificó que cuando ya está regresando a su carril, al finalizar los conos de señalización que había ubicados en el retén, sintió el golpe de la moto que apreció rápido y le pego a la parte frontal de la mula. Por último destacó que el retén de la Policía estaba muy pegado a la curva, lo que impedía el adelantamiento.

Expuso que cuando llegó al retén de policía, había cuatro (4) vehículos siendo requisados por los uniformados. Concluyó que el retén estaba mal ubicado, esto por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Para esta autoridad judicial el análisis de las condiciones tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito quedan develados según las pruebas arrimadas al plenario, en donde se describen detalladamente dos elementos: 1. El lugar del accidente presentaba doble línea continua¹⁷, es decir, presentaba prohibición para el adelantamiento de vehículos, y 2. El carril para el tránsito normal de vehículos estaba ocupado por varios camiones que estaban siendo requisados por integrantes de la Policía Nacional.

En este sentido, tenemos probado que el sector en donde se presentó el accidente de tránsito, en efecto se vio modificado en sus condiciones normales de movilidad, por la intervención de una autoridad de tránsito, en este caso, de la Policía de Carreteras, que modificó las condiciones normales de conducción por la vía.

3.4. LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LA POLICIA NACIONAL

Mediante la valoración de los medios de prueba, el Despacho deduce que la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, es imputable a la Policía Nacional porque a través de sus agentes, realizó un retén policial, que modificó las condiciones normales de tránsito en la vía, sin minimizar los riesgos que esta acción finalmente desencadenó.

Asimismo, el despacho considera que el daño no es imputable ni a Juan Augusto Ríos Osorio, ni a COLDETRANS S.A, dado que no se demostró que incumplieran reglamentos o regulaciones en relación con el sistema vial colombiano que hubiesen tenido incidencia – jurídica – en la materialización del accidente de tránsito. En el mismo sentido, las entidades Cooperativa Quindiana de Transporte y Aseguradora ALLIANZ, no se les atribuirá imputación alguna, en la medida en que por parte del despacho no se encontró responsabilidad de quienes las llamaron en garantía. Sobre este particular se profundizara en el respectivo acápite de exenciones de esta providencia.

3.5. LA FALLA DEL SERVICIO.

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigente a la fecha en que ocurrió el accidente, establece que, en los municipios, las autoridades encargadas de expedir las normas y adoptar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, son el alcalde y los secretarios de tránsito municipal (arts. 3º, 6º y 236).

El mismo estatuto establece restricciones a la circulación de peatones, animales y vehículos por las vías públicas y privadas abiertas al público, “para garantía de la seguridad y comodidad de sus habitantes” (art. 1º), de las cuales se destacan las contenidas en el artículo 138, que dispone la reducción de velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, entre otros, en los lugares de concentración de personas y cuando transiten cerca de las aceras; el artículo 148, que dispone que el máximo de velocidad en zonas urbanas es de 60 km y el 156, que regula las obligaciones que están a cargo de los motociclistas.

Asimismo, resulta pertinente insistir en que de conformidad con los testimonios antes relacionados, para el momento del accidente, la referida carretera no contaba con señalización alguna de peligro y/o precaución. Por tanto, concluye el despacho que en el caso concreto dicha omisión del deber de efectuar la señalización mínima de la zona constituye una evidente falla del servicio.

Ahora bien, la Policía de Carreteras tenía el deber de efectuar la señalización correspondiente, de conformidad con la obligación impuesta a ella de asegurar la

¹⁷ ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

En intersecciones

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

seguridad de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara.

Cabe resaltar en este punto, que la obligación impuesta por el principio de señalización ni siquiera admite cumplimiento parcial, comoquiera que su finalidad, consistente en garantizar la circulación por las vías públicas en condiciones de seguridad, libertad y confianza, sólo se previene con eficiencia si la existencia de peligros y obstáculos sobre la vía, se encuentra debidamente señalizada, de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos al respecto.

En ese sentido, el Consejo de Estado, respecto del “principio de señalización”, se ha manifestado en los siguientes términos:

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1 inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidades de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 19701. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

‘El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas.

‘La resolución No. 5246 de 1985 proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte - hoy Ministerio de Transporte - “por la cual se adopta como reglamento oficial el Manual sobre Dispositivo para control de Tránsito en calles y carreteras”, estableció en su primer considerando: “que la señalización de las calles y carreteras es un aspecto de gran importancia para la seguridad vial del país...”. Lo cual significa o comporta que la adecuada y debida señalización tiene una importancia mayúscula para el desempeño de las actividades de control de tránsito automotor. No se trata simplemente de una competencia facultativa o discrecional en cuanto a su ejercicio, por parte de las autoridades de tránsito,

son potestades de imperativo desarrollo, en la medida en que la disposición de dichas señales es un elemento insustituible de la seguridad vial del país. La resolución No. 8408 de 1985, establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en las calles y carreteras¹. La pluralidad misma de señales temporales, ordenada por esta resolución, en los sitios de peligro en las vías públicas, revela el interés del legislador, y de la propia entidad administrativa, por la seguridad de los usuarios de los medios de transporte terrestre.”¹⁸

3.6 CONCLUSIONES PROBATORIAS

En primer término el despacho considera que la imputación en el presente asunto recae en cabeza de la autoridad pública que realizó un retén con alteración del funcionamiento normal de la vía, sin que se tomaran las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos que una acción de este tipo conlleva. Por esta razón en el acápite de solución de las excepciones propuestas, se exonerará de responsabilidad a La Compañía Colombiana De Transporte “COLDETRANS” S.A y a Juan Augusto Ríos Osorio, dejando sin piso jurídico el llamamiento en garantía realizado en contra de La Cooperativa Quindiana De Transportadores Ltda y ALLIANZ SEGUROS S.A

Asimismo, se concluye que el causante material del accidente fue el tracto camión que impactó directamente a la motocicleta, pero que este impacto se dio cuando aquel estaba regresando a su carril reglamentario, luego de que fuera obligado a asumir esta acción, por un retén de la Policía de Carretas que no previó las consecuencias de su ubicación.

De otro lado no se logró demostrar dentro del expediente, que el conductor de la motocicleta – fallecido – hubiese violado reglamentos o normas de seguridad para la conducción de este tipo de vehículos, con incidencia factual en la materialización del daño.

4. SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS

4.1 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA POLICIA

Acerca de la excepción de **“Culpa exclusiva y determinante de la víctima”**, el despacho considera que no está llamada a prosperar, en la medida en que no fue probada por ningún medio por parte de la Policía Nacional. La parte demandada, simplemente se movió entre conjeturas y generalizaciones del posible comportamiento de la víctima, para fundamentar su defensa, dejando de lado las pruebas que debían sustentar este medio exceptivo.

La culpa exclusiva y determinante de la víctima debió quedar probada de manera tal, que rompiera de golpe la imputación en contra de la Policía, de manera que sin la actuación de la víctima directa, el daño no hubiese tenido ocurrencia.

Acerca de la excepción de **“Rompimiento del nexo causal”**, el despacho considera que no está llamada a prosperar, dado que en efecto se logró demostrar con las pruebas arrojadas al plenario, que la instalación insegura de un retén de la Policía, desencadenó que el tracto camión que resultó también implicado en el presente asunto, tomara el carril contrario (sin que nadie lo detuviera) y que envistiera de frente al ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, cuando aquel transitaba por al lado reglamentario de la vía, sin que la Policía Nacional tomara las medidas necesarias para prevenirlo ante la invasión de carril que se venía presentando en el sector de la tragedia.

De nuevo resalta el despacho que a través de generalizaciones y suposiciones, la parte demandada pretenda mostrar que el exceso de velocidad y la pérdida de control de la moto, sumadas a la invasión de carril del tracto camión, todas sin prueba en el

¹⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de octubre 4 de 2007. Exp: 16.058 y 21.112 acumulados. CP. Enrique Gil Botero.

expediente, pudieran romper en nexo de causalidad comprobado entre la actividad policial y el daño sufrido por las víctimas.

4.2 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO

4.1.1 Acerca de la excepción de “*Hecho de un tercero*”, considera el despacho que está llamada a prosperar, dado que del material probatorio recaudado, se puede observar que el hecho dañoso – accidente de tránsito – que ocasionó la muerte del ciudadano, se presentó únicamente¹⁹, como consecuencia de la deficiente e insegura realización de un retén por parte de la Policía Nacional, que obligó a que el conductor del tracto camión que impactó en contra de la motocicleta, invadiera el carril contrario, ante la imposibilidad de continuar la marcha en el carril obstruido. Es decir, el despacho considera que la imputación jurídica del hecho, recae única y exclusivamente en la Policía Nacional, librando de responsabilidad a Juan Augusto Ríos Osorio. Con fundamento en lo descrito por el inciso tercero artículo 282 del Código General del Proceso, el juzgado se releva del análisis de las demás excepciones propuestas.

4.3 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR COLDETRANS S.A

4.3.1 Acerca de la excepción de “*Hecho de un tercero*”, el despacho considera que está llamada a prosperar, pues tal cómo se ha venido argumentando, la imputación jurídica del daño recae únicamente en la Policía Nacional, que alteró las condiciones normales de funcionamiento de una vía pública para la realización de un retén, sin contar con las medidas de precaución que evitaran el fatal accidente en el que perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Es decir y frente a lo anterior, el despacho considera que **COLDETRANS S.A**, queda libre de responsabilidad – conforme al criterio de imputación que se ha venido desarrollando – por los hechos que generan el presente juicio de responsabilidad. Con fundamento en lo descrito por el inciso tercero artículo 282 del Código General del Proceso, el juzgado se releva del análisis de las demás excepciones propuestas.

5. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

Conforme a lo descrito en la demanda, se reclaman para Omaira Guerrero Largo, como compañera permanente del fallecido, y para Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia como padres, perjuicios materiales en calidad de lucro cesante (Art. 1614 C.C.)

Al respecto examina el despacho que se debe hacer una análisis previo, para verificar la obligación alimentaria que tenía el fallecido para con sus padres, en la medida en que de las pruebas arrojadas, se ha podido verificar que aquel tenía un hogar constituido con la señora Guerrero Largo, y en tal medida, deben constatarse los elementos de la obligación alimentaria para acceder a su reconocimiento.

Al respecto ha expresado en sentencia de unificación del Consejo de Estado²⁰:

[E]l fundamento de la obligación alimentaria contenida en la legislación civil es doble: por un lado, la necesidad de quien los reclama y, por el otro, la capacidad de quien los debe. Esto significa que legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos. (...) cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos. (...) la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en

¹⁹ Se hace referencia al acaecimiento jurídico del hecho, sin hacer referencia al accidente desde el punto de vista fáctico, en el que claramente estuvieron vinculados, el mismo fallecido, el conductor del tracto camión y el retén realizado por agentes de la Policía Nacional.

²⁰ Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sala plena consejero ponente: danilo rojas betancourth san antonio, tolima, seis (6) abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005) actor: dario de jesus santamaría lora y otros demandado: nación-ministerio de defensa, ejército nacional referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación

ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres. (...) Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento –la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo[E]l fundamento de la obligación alimentaria contenida en la legislación civil es doble: por un lado, la necesidad de quien los reclama y, por el otro, la capacidad de quien los debe. Esto significa que legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos. (...) cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos. (...) la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres. (...) Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento –la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar.

Ahora bien, le corresponde al despacho verificar si en efecto, existía una relación alimentaria entre el fallecido y sus padres, en la medida en que este tenía un hogar constituido y por separado con Omaira Guerrero Largo quien fuera su compañera permanente.

Lo anterior, quedó acreditado en el plenario con las pruebas testimoniales que se relacionan a continuación.

Reposa como prueba testimonial, la declaración de Luz Damary Uchima Guevara, sobre la que el despacho no encuentra tacha alguna, dadas las características de espontaneidad y solvencia con que fue rendida. Sobre el testimonio tenemos que la declarante no fue testigo presencial de los hechos que rodearon el accidente de tránsito, pero sí de las relaciones de pareja entre Omaira Guerrero Largo y el señor Israel Gutiérrez Valencia; con lo que se ratificó la declaración extra juicio que rindió ante notario público. La testigo también declaró acerca de los perjuicios morales sufridos por la familia del fallecido.

La señora Uchima Guevara, manifestó que el fallecido sostenía a sus padres, por conocimiento directo de los actos que sufragaba en favor de estos. Indicó que el fallecido era muy responsable con aquellos.

Ahora bien, también reposa el testimonio de José Didier Chiquito Trejos, quien tampoco fue testigo presencial de los hechos, pero indicó que conoció las relaciones de pareja entre Omaira Guerrero Largo con el señor Israel Gutiérrez Valencia, ratificando la declaración extra juicio que rindió ante notario público.

Este testigo también declaró sobre los perjuicios morales sufridos por la familia del fallecido. Este testigo manifestó que el fallecido sostenía a sus padres, por conocimiento directo de los actos que sufragaba el fallecido a favor de sus padres.

En la misma dirección fue rendido el testimonio por parte de Roberto Elías Lemas Castro y Nulber Londoño Velazco, quienes expusieron que el fallecido velaba por el sostenimiento de sus padres y de su señora esposa.

Analizados los testimonios anteriores, el despacho da por probado que el fallecido tenía unión marital de hecho con la señora Omaira Guerrero Largo, sin que se pueda acreditar con certeza que habiendo formado una nueva unidad familiar, mantuviera una obligación alimentaria con sus progenitores.

Es decir, considera el despacho que la obligación alimentaria del fallecido con sus padres no está plenamente probada, mucho más cuando tenía un vínculo marital de hecho con la señora Guerrero Largo. En este sentido, considera el despacho que la relación alimentaria entre los padres y el fallecido no quedó debidamente demostrada, en la medida en que además de las testimoniales, no se probó de forma conclusiva que el fallecido velara integralmente por el sostenimiento del hogar conformado por los señores Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia.

5.1 PERJUICIOS MATERIALES

Dilucidado lo anterior, se solicitó en el escrito de la demanda pagar a favor de Omaira Guerrero Largo, los perjuicios materiales que se le irrogaron con motivo de la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia.

Reposa como prueba a folio 63 del cuaderno principal, certificación emitida por la Asociación de Mineros la Montaña, en donde el representante legal de la entidad, manifiesta que el señor Israel Gutiérrez Valencia laboraba con esa asociación en calidad de administrador, con una asignación mensual de \$1.500.000

Asimismo, los testigos Luz Damary Uchima Guevara, José Didier Chiquito Trejos y Nulber Londoño Velazco, también manifestaron a viva voz frente al despacho, que el fallecido devengaba como minero la suma de \$1.500.000.

Ahora bien, el testigo Roberto Elías Lemas Castro, indicó en el mismo sentido que el fallecido ganaba \$1.500.000 mensuales. El testigo hacía y hace parte de la junta directiva de la asociación, y expuso que observaba cuando se les pagaba a los mineros más o menos en el promedio descrito.

Este testigo también indicó que el fallecido, pagaba seguridad social por su trabajo en la asociación de mineros, sin expresar sobre que monto cotizaba al sistema. Aseveró que de toda esta información contable, existen registros en la asociación de mineros, en la medida en que se declara renta y se llevan los respectivos informes de registros y gastos.

Sobre la asignación mensual que devengaba el fallecido, el despacho extrae las siguientes conclusiones probatorias.

En primer término que no existe certeza acerca del valor que el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, recibía como consecuencia de sus actividades económicas en la

Asociación de Mineros la Montaña, dado que el mismo Roberto Elías Lemas Castro, quien hace parte de la asociación, expresó que el fallecido pagaba seguridad social, sin indicar sobre qué monto y qué en promedio un minero que trabajara para la asociación ganaba el valor de \$1.500.000.

A lo anterior se suma que este testigo, también dijo que de todas estas actividades existen los respectivos registros contables, pero esta prueba nunca fue allegada al plenario

Es decir, frente a lo anterior, tenemos que el valor de \$1.500.000 que presuntamente recibía como salario el fallecido, no pasa de ser una afirmación sin fundamentos contables a la que este despacho judicial le resta credibilidad, no solo porque tres de los testigos no tenían relación directa con este pago, sino porque quien la podía tener, es decir el testigo Roberto Elías Lemas Castro, refirió que esta información reposaba en documentación contable que no aportó al proceso.

Por lo a anterior, la liquidación sobre perjuicios materiales, partirá de la suma de un (1) salario mínimo legal vigente, conforme a los siguientes parámetros.

Hechos: 12/06/2013
Fecha sentencia: 09/12/2019
Fecha nacimiento: 07/11/1974

Para el cálculo de la indemnización se tomará el valor del salario mínimo al momento de los hechos actualizado a la fecha así.

VALOR SALARIO 2013 (\$589.500)	
VALOR A INDEXAR	\$ 589.500
INDICE FINAL (diciembre de 2019)	\$103,43
INDICE INICIAL (junio de 2013)	\$ 79,39
VALOR INDEXADO	\$768.005,85

Teniendo en cuenta que el valor obtenido resulta inferior al salario mínimo determinado para el año 2019, se procederá a continuar con la presente liquidación con el valor del salario mínimo actual

SALARIO MÍNIMO 2019	\$ 828.116
Mas 25 % correspondiente prestaciones sociales	\$ 1.035.145
Menos 25% Manutención Fallecido	\$ 776.358,75

Lucro cesante

La liquidación comprenderá dos períodos, el debido o consolidado que abarca el transcurrido desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la presente providencia y el futuro o anticipado que corresponde al interregno comprendido entre el día siguiente de la fecha de la presente providencia y hasta la fecha de probabilidad de vida, con base en las siguientes formulas:

Indemnización Debida o consolidada:

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

- S = Es la suma resultante del período a indemnizar.
- Ra = Es la renta o ingreso mensual
- i= Interés puro o técnico: 0.004867

- n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la sentencia, esto es 77,93 meses

$$S = \$ 776.358,75 \frac{(1+0,004867)^{77,93} - 1}{0,004867}$$

$$S = \$ 73.360.263,03$$

Indemnización futura:

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de probabilidad de vida (edad del señor Israel Gutiérrez Valencia), a la fecha de ocurrencia de los hechos la víctima tenía 38 años, por lo que se esperaban 42,7 de años de vida probable²¹.

Para efectos de la liquidación se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado 77,93 meses, para un total de meses a indemnizar de 434,47 meses.

Donde:

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n}$$

- S = Es la indemnización a obtener.
- Ra = Es la renta o ingreso mensual
- i= Interés puro o técnico: 0.004867
- n= Desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de probabilidad de vida, esto es 367,83 meses.

$$S = \$ 776.358,75 \frac{(1+0,004867)^{434,47} - 1}{0,004867 (1.004867)^{434,47}}$$

$$S= \$140.028.646,14$$

TOTALES	
Indemnización Debida	\$ 73.360.263,03
Indemnización Futura	\$ 140.028.646,14
TOTAL	\$ 213.388.909,17

Bajo ese paradigma, se condenará a la Policía Nacional, a reparar el perjuicio material causado, para lo cual, se liquidará la indemnización a favor de la señora **Omaira Guerrero Largo** equivalente a **\$213.388.909,17**

5.2 PERJUICIOS MORALES

Revisadas las pretensiones de la demanda, los registros civiles y las demás pruebas que obran en el expediente, el juzgado tiene por demostrado el perjuicio moral en cabeza de los demandantes, con ocasión de la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia.

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales en la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales para la compañera permanente, los padres y hermanos de la víctima directa del daño.

²¹ Resolución Número 1555 De 2010; (vigente para la fecha de los hechos)

En lo que concierne a la indemnización de perjuicios, se tiene que el grupo familiar del fallecido Israel Gutiérrez Valencia, está compuesto por su compañera permanente, sus padres y hermanos: OMAIRA GUERRERO LARGO compañera permanente, ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, padre, BERTILDA ROSA VALENCIA, madre, ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA, hermano, FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA, en hermano, OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA, hermano y UBER GUTIERREZ VALENCIA, hermano.

Lo anterior quedó corroborado, conforme se observa en los registros civiles obrantes en folios 53 al 62 del cuaderno principal. La relación marital de hecho existente entre OMAIRA GUERRERO LARGO y el occiso, se comprobó debidamente conforme a los testimonios rendidos en el proceso y conforme declaraciones extra procesales que fueron allegadas como prueba al expediente. Folios 66 al 68 del cuaderno 1 y testimonios de Luz Damary Uchima Guevara, José Didier Chiquito Trejos, Roberto Elías Lemas Castro y Nulber Londoño Velazco.

Lo anterior permite inferir²² que los demandantes padecieron perjuicios morales, por la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco, el Despacho deduce²³ que estos hechos les produjeron gran tristeza y congoja.

En relación con la suma máxima con que debe indemnizarse por el padecimiento de un perjuicio moral demostrado, el Consejo de Estado²⁴ unificó criterio respecto de la reparación de los perjuicios inmateriales, de la siguiente manera:

“... 2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 SMLMV).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

(...)

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva....”

²² Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

²³ Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

²⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Acta del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014).

En el caso *sub examine*, el Despacho encuentra debidamente acreditado que el señor Israel Gutiérrez Valencia falleció el día 12 de Junio de 2013, tal como consta en el registro civil de defunción visible a folio 54 del cuaderno principal.

Con base en la presunción de daño moral que ha reconocido el Consejo de Estado, el Despacho reconocerá a este grupo familiar los perjuicios morales reclamados, de la siguiente manera.

DEMANDANTES	PARENTESCO	MONTO A RECONOCER
Omaira Guerrero Largo, Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia	Compañera y Padres del fallecido – Nivel 1	100 S.M.L.M.V. para cada uno.

DEMANDANTES	PARENTESCO	MONTO A RECONOCER
Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia, Fernando Gutiérrez Valencia, Otoniel de Jesús Gutiérrez Valencia y Uber Gutiérrez Valencia.	Hermanos – Nivel 2	50 S.M.L.M.V. para cada uno.

6. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Ahora bien, teniendo en cuenta que se negaran las pretensiones de la demanda en contra de COLDETRANS S.A y de Juan Augusto Ríos Osorio, se rechaza la prosperidad de los llamamientos en garantía que se realizaron en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A y la Cooperativa Quindiana De Transporte LTDA, por simple sustracción de materia.

7. COSTAS

Conforme con lo indicado en el artículo 188 del C.P.A.C.A., salvo en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CPC hoy CGP. Significa que la condena en costas equivale a un criterio objetivo donde no es necesario examinar si hubo o no culpa. Así las cosas, en el presente evento se ventila un asunto de interés particular, de tal manera que habrá lugar a condena en **costas**, en consecuencia, por Secretaría se liquidarán las costas por expensas, y como **agencias en derecho** dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor de las pretensiones de la demanda a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, por la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el día 12 de Junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS, las excepciones de “Culpa exclusiva y determinante de la víctima” y “Rompimiento del nexo causal”, propuestas por **LA POLICIA NACIONAL**, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de “culpa de un tercero”, en este caso de la **POLICÍA NACIONAL**, propuesta por **Transportes COLDETRANS S.A** y por **Juan**

Augusto Ríos Osorio, por lo que se niegan las pretensiones de la demanda en contra de estos dos demandados.

CUARTO: NEGAR el llamamiento en garantía realizado en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A y la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA, conforme a lo descrito en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, **CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL** por concepto de **perjuicios materiales** sufridos con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así: para OMAIRA GUERRERO LARGO (compañera permanente), la suma de \$213.388.909,17.

SEXTO: NEGAR el reconocimiento de perjuicios materiales reclamado por ARSOMAN GUTIÉRREZ NAVARRETE y BERTILDA ROSA VALENCIA, en su calidad de padres del fallecido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, **CONDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL** por concepto de **perjuicios morales** sufridos, con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así:

Para OMAIRA GUERRERO LARGO en su condición de Compañera Permanente del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, en su condición de Padre del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para BERTILDA ROSA VALENCIA, en su condición de Madre del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para ÁLVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para UBER GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: CONDENAR EN COSTAS a LA POLICIA NACIONAL, en consecuencia por la secretaría del despacho, se liquidaran las costas por expensas y como **agencias en derecho**, dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor de la condena al momento de la ejecutoria de la sentencia.

DÉCIMO: DISPONER que se efectúen las comunicaciones del caso para el cabal cumplimiento de la sentencia (inciso final, Art. 192 del C.P.A.C.A.). **Anótese** en el Sistema Informático de Justicia XXI y; **procédase** al archivo del mismo, previa liquidación y devolución de remanentes de gastos del proceso, si los hubiere.

DÉCIMO PRIMERO: PREVENIR a las entidades demandadas acerca del contenido de los artículos 187 inciso 4, 194 y 195 del C.P.A.C.A.

DÉCIMO SEGUNDO: DISPONER que se **notifique** la sentencia en los términos del artículo 203 del C.P.A.C.A.

DÉCIMO TERCERO: Expídanse a costa de la parte interesada, las copias auténticas que sean solicitadas, con observancia de los parámetros legales establecidos en el artículo 114 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. G. T.', with a stylized, cursive script.

JUAN GUILLERMO ÁNGEL TREJOS
JUEZ



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
-Sala Quinta de Decisión-

Magistrado Ponente: Augusto Ramón Chávez Marín

S.: 126

Asunto:	Sentencia de segunda instancia
Acción:	Reparación Directa
Radicación:	17001-33-33-004-2014-00566-02
Demandantes:	Omaira Guerrero Largo y otros
Demandados:	Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A. Juan Augusto Ríos Osorio
Llamados en Garantía:	Allianz Seguros S.A. Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

**Aprobado en Sala Ordinaria de Decisión, según consta en Acta nº
033 del 26 de agosto de 2022**

Manizales, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

ASUNTO

De conformidad con lo previsto por los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)¹, corresponde a esta Sala de Decisión desatar el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso de reparación directa promovido por la señora Omaira Guerrero Largo y otros contra la entidad recurrente, la Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A.² y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, y en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

¹ En adelante, CPACA.

² En adelante, COLDETRANS.

LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control interpuesto el 20 de octubre de 2014 (fls. 13 a 47, 96 y 97, C.1), la parte demandante solicitó lo siguiente:

Pretensiones

1. Que se declare administrativamente responsable a la parte accionada por los perjuicios causados a la parte demandante como consecuencia de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se desplazaba como conductor de la motocicleta de placas XFG83A y colisionó con el tractocamión de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 750, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio.
2. Que en consecuencia de la anterior declaración se condene a la parte demandada al pago de los siguientes perjuicios a favor de cada uno de los demandantes, en la siguiente proporción:

DEMANDANTE	CALIDAD EN QUE CONCURRE	PERJUICIOS MORALES (s.m.l.m.v.)	PERJUICIOS MATERIALES (Lucro Cesante)
Omaira Guerrero Largo	Compañera permanente	100	\$140'000.000
Arsoman Gutiérrez Navarrete	Padre	100	
Bertilda Rosa Valencia	Madre	100	
Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia	Hermano		
Fernando Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Otoniel Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Uber Gutiérrez Valencia	Hermano	100	

3. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA.

4. Que se ordene el pago de intereses moratorios sobre las sumas de dinero a que resulte condenada la parte accionada.

Hechos

La parte accionante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes supuestos de hecho (fls. 18 a 29, C.1), que en resumen indica la Sala y que se permite ordenar cronológicamente para darle mayor entendimiento al relato efectuado:

1. El 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placas XFG83A, marca Auteco Discovery, modelo 2009, color negro-azul, portando todos los elementos de seguridad necesarios, con dirección al Municipio de Quinchía (Risaralda), con el fin de cumplir su actividad laboral.
2. Siendo aproximadamente las 10:30 a.m., en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio, cuando el señor Israel Gutiérrez Valencia se disponía a salir de una curva cerrada por su carril de subida con doble línea, en la que se prohíbe adelantar, fue atropellado de manera intempestiva por un vehículo tractocamión que invadió el carril.
3. El vehículo tractocamión que se vio implicado es de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, siendo COLDETRANS la empresa usufructuaria, y era conducido por el señor Julián González Valencia.
4. El señor Israel Gutiérrez Valencia sufrió graves lesiones en su humanidad, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.
5. En el sitio donde ocurrieron los hechos no existía ningún tipo de señalización que advirtiera que metros más adelante se encontraba un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional.
6. Después de la colisión, los miembros de la Policía Nacional que se encontraban cerca a 50 metros más adelante improvisando un retén, procedieron a ubicar dos conos para cerrar la vía y proteger la escena del crimen.
7. Al momento del accidente, el puesto de control sólo contaba con tres (3) agentes y cuatro (4) conos que se desplazaron a la parte superior e

inferior para cerrar la vía y levantar el cadáver del señor Israel Gutiérrez Valencia.

8. Según el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº 1295533, realizado por el agente de tránsito Adrián Esteban Rendón Rincón, la vía en la que ocurrió el accidente es una curva pendiente, en doble sentido, con una calzada y dos carriles, en asfalto, en buen estado y en condiciones secas.
9. El citado agente de tránsito no describió ninguna hipótesis para el accidente, como le era debido, pero sí consignó en observaciones que había un puesto de control de la Policía Nacional aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
10. De acuerdo con el Informe Pericial de Necropsia nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia murió de manera violenta a causa de un trauma contundente que le generó un trauma craneoencefálico severo, fractura de base del cráneo e hipertensión endocraneana severa.
11. Con ocasión de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia se abrió investigación preliminar en la Fiscalía Segunda Seccional del Municipio de Riosucio, la cual se encuentra en etapa de indagación.
12. El señor Israel Gutiérrez Valencia nació el 7 de noviembre de 1974 en Quinchía (Risaralda); lo que significa que tenía 37 años de edad para el 12 de junio de 2013.
13. Antes de su muerte, el señor Israel Gutiérrez Valencia gozaba de un perfecto estado de salud, tanto física como psíquica.
14. Al momento de su fallecimiento, el señor Israel Gutiérrez Valencia llevaba más de 14 años conviviendo permanentemente con la señora Omaira Guerrero Largo, con quien no procreó hijos.
15. Los señores Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1971 en Irra. De dicha unión procrearon, además del señor Israel Gutiérrez Valencia, a los siguientes hijos: Álvaro Antonio, Otoniel, Fernando y Uber Gutiérrez Valencia.
16. El señor Israel Gutiérrez Valencia trabajaba como administrador de la Asociación de Mineros La Montaña del Municipio de Quinchía (Risaralda), devengando unos ingresos mensuales de \$1'500.000, con

los cuales, una vez descontaba sus gastos personales, aportaba el 50% para la manutención de su núcleo familiar y el restante 50% para sus padres, ya que son de escasos recursos.

17. El núcleo familiar del señor Israel Gutiérrez Valencia, compuesto por su compañera permanente, padres y hermanos, se vieron profundamente afectados por su partida, dado los fuertes vínculos afectivos entre la víctima y su familia.

Fundamentos de derecho

Como fundamentos de derecho la parte actora invocó el contenido de las siguientes disposiciones: Constitución Política: artículos 2, 6 y 90; y CPACA: artículos 104 y 140.

Sostuvo que la Policía Nacional omitió e inobservó reglamentos al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, pues ocupó el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dio la orden de continuar al conductor del tractocamión, ocupando el carril en contravía y sobre una curva cerrada, en la que el señor Israel Gutiérrez Valencia no tuvo ninguna oportunidad para proteger su vida.

Manifestó que de acuerdo con la Resolución nº 0911 del 1º de febrero de 2010, contentiva del Manual de Patrullaje de la Policía Nacional, código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, existe el siguiente procedimiento para instalar puestos de control, el cual exige un mínimo de unidades dependiendo de si la zona es urbana o rural, teniendo en todo caso presente la correcta ubicación para no perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o los peatones.

Indicó que en la especificación técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF.195-A4 de la Policía Nacional, se encuentran las descripciones de los elementos que deben emplearse para los puestos de control, dentro de los cuales se destacan los conos, las paletas y las vallas.

Refirió que la víctima del accidente no tuvo ninguna culpa en los hechos que ocasionaron su muerte.

Consideró que la omisión de la Policía Nacional respecto del Manual de Patrullaje, fue determinante en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia; siendo igualmente responsables tanto el propietario del vehículo tractocamión como la compañía COLDETRANS usufructuaria del mismo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Actuando dentro del término legal conferido para tal efecto y obrando debidamente representadas, la parte demandada contestó la demanda de la manera que se indica a continuación.

Juan Augusto Ríos Osorio (fls. 132 a 138, C.1) y COLDETRANS (fls. 202 a 208, ibidem)

Se opusieron a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes excepciones: ***“HECHO DE UN TERCERO”***, en tanto el accidente y, por ende, sus consecuencias, fue provocado por la Policía Nacional al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función, ocupando el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dando la orden de continuar al conductor del camión, ocupando el otro carril sobre una curva cerrada; ***“CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”***, en la medida en que el señor Israel Gutiérrez Valencia obró con imprudencia al conducir su motocicleta excediendo los límites de velocidad, lo cual le impidió conservar su carril y detener su vehículo para evitar el impacto; ***“INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”***, ya que las afirmaciones de la parte demandante al respecto no tienen soporte en el expediente; ***“INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS”***, en la medida en que la parte demandante se limitó a relatar someramente el evento pero no acreditó en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado y el perjuicio sufrido por los actores; e ***“(…) INNOMINADA”***, respecto de cualquier hecho que se acredite en el proceso y que constituyan una excepción.

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 190 a 195, C.1)

Manifestó su oposición a las súplicas de la parte actora, aduciendo que fue el señor Israel Gutiérrez Valencia quien invadió el carril por el cual debía circular el tractocamión, toda vez que el punto de impacto fue en la persiana de dicho vehículo, justo al lado izquierdo del radiador.

Indicó que el retén policial se encontraba a más de 70 metros de la curva donde perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Señaló que aunque el puesto de control no se realizó en los términos que indicó la parte actora, lo cierto es que aquél fue autorizado por el Grupo Unidad de Intervención y Reacción (UNIR) de la Policía Nacional.

Afirmó que la velocidad a la cual viajaba el señor Israel Gutiérrez Valencia fue un elemento preponderante en la ocurrencia del hecho.

Consideró que no existe fundamento para la imputación del daño a la entidad, ya que se presentó una culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Formuló como medios exceptivos los que denominó: ***“LA CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA”***, teniendo en cuenta que, de un lado, conforme al punto de impacto, la víctima invadió el carril contrario, tal como se desprende del croquis levantado con ocasión del accidente de tránsito, y de otro, la posición de la víctima sugiere que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo sacó incluso de su carril; y ***“ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL”***, como quiera que fue la víctima, quien al tomar la curva a considerable velocidad, terminó ocupando el carril contrario por donde circulaba el tractocamión, impactándolo en la persiana parte izquierda.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

El señor Juan Augusto Ríos Osorio llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 140 y 141, C.1).

Con auto del 25 de febrero de 2016 (fl. 233, C.1), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió el llamamiento en garantía.

DENUNCIA DEL PLEITO

COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., toda vez que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1).

A través de auto del 28 de julio de 2016 (fl. 304, C.1A), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió la solicitud hecha como un llamamiento en garantía.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

Actuando dentro del término conferido y obrando debidamente representadas, las llamadas en garantía contestaron tanto la demanda como los llamamientos en garantía de la manera que se indica a continuación:

Allianz Seguros S.A. (fls. 282 a 303, C.1A)

Se opuso a las pretensiones de la demanda, y coadyuvó la oposición que de las mismas hicieron COLDETRANS y el señor Juan Augusto Ríos Osorio en las respectivas contestaciones de la demanda, tendiente a desvirtuar los hechos de la demanda y a demostrar la ausencia de responsabilidad de tales demandados.

Propuso los siguientes medios exceptivos: ***“NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO QUE EL VEHICULO (sic) DE PLACAS TTG – 200, FUE EL CAUSANTE DEL ACCIDENTE ACAECIDO”***, pues los vehículos involucrados desarrollaban la misma actividad peligrosa y, por lo tanto, debe acreditarse cuál de los dos tuvo la influencia causal decisiva en la producción del hecho dañoso; carga que corresponde a la parte actora y que no se cumplió en este caso; ***“(…) PRESENCIA DE CAUSAS EXCLUYENTES DE CULPABILIDAD A FAVOR DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO”***, en la medida en que en la demanda se da a entender que la causante del siniestro fue la Policía Nacional y no el demandado, ya que fue imprudente y negligente no sólo en la instalación del retén sino en dar la vía a conductores en el otro carril y en una curva demasiado cerrada; ***“HECHO DE UN TERCERO”***, por cuanto el accidente se debió a la Policía Nacional; ***“CULPA DE LA VICTIMA (sic) Y SU EXPOSICION (sic) IMPRUDENTE AL RIESGO”***, ya que el señor Israel Gutiérrez Valencia iba conduciendo su motocicleta a una velocidad excesiva no permitida, lo que dio lugar a que no conservara su carril y no pudiera detener su vehículo a fin de evitar la colisión con el camión; ***“DILIGENCIA Y CUIDADO”***, pues el conductor del camión se encontraba en perfectas condiciones físicas para conducir, al paso que el vehículo mismo estaba en buen estado para ser utilizado en la actividad peligrosa; ***“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, DEBIDO AL ROMPIMIENTO CAUSAL COMO CONSECUENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (sic)”***, tal como se extrae de las pruebas allegadas al expediente y que evidencian que el señor Israel Gutiérrez Valencia fue quien inobservó las normas de tránsito; ***“(…) LIBERATIVA DEL DEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, POR PRESENCIA DE UNA CAUSA EXTRAÑA”***, cual fue el comportamiento imprudente y contrario a las normas por parte del conductor de la motocicleta; ***“COMPENSACION (sic) DE CULPAS ENTRE LAS PARTES”***,

teniéndose en cuenta la concurrencia de causas que confluyeron en el hecho dañoso; ***“AUSENCIA DE ELEMENTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”***, dado que el conductor del tractocamión no infringió norma alguna para la conducción de vehículos; ***“LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES SON INEXISTENTES Y/O SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE SOBREESTIMADOS”***, conforme se desprende al compararse con la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia; ***“REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA, SOLO OPERA EN EXCESO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE TRÁNSITO (SOAT)”***, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1032 de 1991, que autoriza a imputar las indemnizaciones por el SOAT al mayor valor que le corresponde pagar al responsable; y ***“CARGA DE LA PRUEBA”***, atendiendo lo previsto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)³.

En punto al llamamiento en garantía, la aseguradora propuso las siguientes excepciones: ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”***, en los términos del artículo 1.081 y 1.131 del Código de Comercio; ***“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”*** por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena; ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”***, según lo pactado en la póliza de vehículos; y ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”***, teniendo en cuenta que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda.

Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. (fls. 319 a 338, C.1A)

Sostuvo que no le constan los hechos de la demanda y que de llegar a ser ciertos, ello por sí solo no generaría la pretendida solidaridad y responsabilidad civil de la llamada en garantía, pues debe probarse que fue la carga que transportaba el tractocamión la causante del daño y de sus consecuencias.

Manifestó que la simple orden de despacho de la mercancía no genera para la cooperativa la calidad de guardiana del vehículo ni su explotadora económica, su usufructuaria, su administradora o su poseedora.

Formuló los siguientes medios exceptivos: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***, por cuanto entre la cooperativa y la llamante en garantía

³ En adelante, CGP.

no existe ni ha existido ningún tipo de relación o contrato que pueda derivar en solidaridad civil por los daños o perjuicios que ocasionen los vehículos que se encuentran bajo su cuidado y administración, ni tampoco respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del vehículo) o el señor Julián González Valencia (conductor); “(...) **AUSENCIA DE CULPA**”, fundada en la falta de obligación de la cooperativa de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación del tractocamión implicado, la cual corresponde en su integridad a su propietario; “**HECHO DE UN TERCERO**”, en la medida en que el conductor involucrado no tiene ningún vínculo con la cooperativa; al paso que la carga transportada no fue la causante del hecho y sus consecuencias; e “**INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD**”, ya que no existe dependencia o subordinación de ninguna índole entre el vehículo despachado con la carga, su propietario y su conductor con la llamada en garantía.

LA SENTENCIA APELADA

El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dictó sentencia en el asunto de la referencia (fls. 439 a 454, C.1B), a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la imputación jurídica por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia se atribuye únicamente a la Policía Nacional, pues ésta, de forma antitécnica y aumentando el riesgo propio de la conducción de vehículos automotores, instaló un retén ocupando de tal manera la vía pública que obligó a quienes transitaban por la misma a ocupar el carril contrario de forma peligrosa.

En efecto, indicó que si el puesto de control no hubiera existido, el tractocamión no hubiera cambiado de rumbo sobre la vía e invadido el carril contrario, con las consecuencias ya conocidas.

Adujo que la curva por la cual transitaba el señor Israel Gutiérrez Valencia era cerrada, de 90 grados, sin que le permitiera observar que por el carril que normativamente le correspondía se desplazaba un tractocamión en sentido contrario, impactando de frente contra éste sin poder tener ninguna reacción para evitarlo.

Refirió que conforme al Manual de Patrullaje Urbano de la Policía Nacional (Resolución nº 0911 de 2010), los puestos de control deben ubicarse sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatones.

Hizo alusión a lo manifestado por los testigos que rindieron declaración en el proceso, los cuales dieron cuenta de lo siguiente: que para adelantar el retén policial los vehículos debían invadir el carril contrario; que los policiales no hicieron uso de señales de pare o siga para controlar los automotores que transitaban por el sector; que ningún policía dio vía o detuvo al tractocamión accidentado; que no había personal señalizando en ambos extremos del puesto de control; que el retén estaba mal ubicado por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Señaló que el daño no es imputable al señor Juan Augusto Ríos Osorio ni a COLDETRANS, dado que no se demostró que éstos incumplieran reglamentos o regulaciones en relación con el sistema vial y que hubiesen incidido jurídicamente en la materialización del accidente de tránsito.

Adujo que la policía de carreteras tenía el deber de efectuar la señalización sobre peligro y/o precaución, de conformidad con la obligación impuesta de asegurar la seguridad de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara.

Acotó que aunque el tractocamión fue quien materialmente causó el accidente, lo cierto es que el impacto se produjo cuando aquél estaba regresando a su carril reglamentario, luego de que fuera obligado a asumir esta acción por un retén de la policía de carreteras que no previó las consecuencias de su ubicación.

Indicó que no se demostró en el expediente que el conductor de la motocicleta hubiese violado reglamentos o normas de seguridad para la conducción de este tipo de vehículos, con incidencia factual en la materialización del daño.

A título pues de indemnización, el Juez de primera instancia reconoció perjuicios morales a favor de los demandantes, por haberse acreditado no sólo que el señor Israel Gutiérrez Valencia tenía una unión marital de hecho con la señora Omaira Guerrero Largo, sino que existían vínculos consanguíneos con los demandantes, que permiten inferir que la muerte de la víctima les generó gran tristeza y congoja. La liquidación de tales perjuicios se realizó adoptando los límites señalados en sentencia de unificación del Consejo de Estado.

De otra parte, reconoció perjuicios materiales únicamente a favor de la compañera permanente de la víctima, liquidados sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 25% por prestaciones

sociales, en tanto consideró que no existía prueba certera de que el señor Israel Gutiérrez Valencia devengara \$1'500.000 por su actividad en la Asociación Mineros La Montaña.

Finalmente condenó en costas acudiendo a un criterio objetivo.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada por la Juez *a quo* y actuando dentro del término legal, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fls. 456 a 460, C.1B), de la siguiente manera.

Manifestó que el conductor del tractocamión fue quien invadió el carril contrario por el que se desplazaba la víctima. Añadió que si bien sobre la vía se encontraba un puesto de control, éste no puede considerarse responsable de la infracción de tránsito que cometiera el referido conductor, pues actuó de forma imprudente al adelantar en una vía que no le era permitido y además esquivó el retén desobedeciendo y haciendo caso omiso a la señal de precaución y de cierre que representaba el cono.

Indicó que la Policía Nacional no obligó al conductor del tractocamión a invadir el carril contrario; quien además tenía conocimiento que al estar en una vía con señal de doble línea, le era prohibido adelantar por el carril contrario, y máxime estando a tan pocos metros de una curva y movilizándose en un vehículo de gran tamaño.

Expuso que la colisión era un acto más predecible para el conductor del tractocamión, por lo que le era exigible a éste que detuviera su marcha y esperara que los vehículos que estaban siendo registrados continuaran o que un miembro de la Policía Nacional lo autorizara a seguir.

Cuestionó que sólo se responsabilice a la Policía Nacional de lo ocurrido, desconociendo que fue el conductor del tractocamión el que infringió la norma nacional de tránsito.

Solicitó entonces revocar la providencia recurrida, ya que la causa directa del accidente de tránsito no fue la ubicación del puesto de control sino la imprudencia del conductor del tractocamión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Parte demandante (fls. 10 a 18, C.5)

Inicialmente hizo referencia a las razones por las cuales considera que se encuentran acreditados los perjuicios morales y materiales reclamados en la demanda.

A continuación, sostuvo que del material probatorio allegado se desprende la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, pues ubicó un retén sin señalización alguna, cerca de una curva, lo que ocasionó que el señor Israel Gutiérrez Valencia fuera atropellado por el tractocamión.

Expuso que el propietario del vehículo y la empresa usufructuaria del mismo son igualmente responsables.

Allianz Seguros S.A. (fl. 20, C.5)

Manifestó que toda la responsabilidad recae en la Policía Nacional, por cuanto no tomó las más elementales y mínimas precauciones para la instalación del retén.

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 22 a 25, C.5)

Reiteró, en esencia, los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Guardaron silencio.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Reparto. Para conocer del recurso de alzada, el expediente fue repartido a este Tribunal el 6 de marzo de 2020, y allegado el 15 de julio del mismo año al Despacho del Magistrado Ponente de esta providencia (fl. 1, C.5).

Admisión y alegatos. Por auto del 15 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado para alegatos en caso de no existir solicitud de pruebas por practicar en segunda instancia (fl. 1, C.5). Dentro del término otorgado, la parte demandante, Allianz Seguros S.A. y la Policía

Nacional alegaron de conclusión (fls. 10 a 18, 20 y 22 a 25, ibidem). COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

Paso a Despacho para sentencia. El 9 de septiembre de 2020 el proceso ingresó a Despacho para sentencia (fl. 26, C.5), la que se dicta en seguida, atendiendo el orden de ingreso del respectivo proceso para tales efectos.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, en los estrictos términos en que aquél fue formulado.

Problema jurídico

La cuestión que debe resolverse en el *sub examine* se centra en resolver las siguientes preguntas:

- *¿La muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia le es jurídicamente imputable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y/o al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS S.A.?*
- *En caso de que se configure responsabilidad por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A., ¿Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. están obligadas a reembolsar el valor de una eventual condena?*

Para despejar los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes aspectos: **i)** elementos generales de responsabilidad del Estado; **ii)** régimen de responsabilidad aplicable; **iii)** hechos probados; **iv)** acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad en el caso concreto; **v)** sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios; y **vi)** responsabilidad de los llamados en garantía.

1. Elementos generales de la responsabilidad

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la

omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al actual artículo 140 del CPACA que consagra el medio de control de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La responsabilidad del Estado puede surgir en virtud de diversos títulos de imputación tales como la falla del servicio, el daño especial, o la denominada teoría del riesgo, los cuales obedecen a diversas situaciones en las que el Estado, a través de sus autoridades, está llamado a responder por la producción de un daño antijurídico.

Atendiendo el título de imputación aplicable en cada caso, se constatará la existencia de los siguientes elementos que estructuran la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones; aspectos éstos que conviene dilucidar a manera de exordio.

La jurisprudencia y la doctrina, a partir de las sucesivas reformas constitucionales y legales que se han dado en Colombia, han señalado que para deducir la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones, deben reunirse tres condiciones:

Como primer elemento de la responsabilidad pública, el *daño o perjuicio* por el cual se reclama la indemnización debe tener la característica de ser resarcible, indemnizable, teniendo en cuenta que no todos lo son; algunos perjuicios no son resarcibles por parte de quien los ocasiona, como sucede cuando la persona que los padece está obligada a asumir las consecuencias en virtud del mandato legal o constitucional, impuesto en función del interés general, cuando éste prima sobre el interés individual.

El *hecho de la administración* se concreta en una actuación u omisión de los agentes del Estado, cuando obran u omiten obrar en ejercicio de sus funciones públicas, es decir, en representación de la administración, salvo cuando se configura lo que en la doctrina y jurisprudencia se conoce como la *falta personal del agente*, caso en el cual, responde el empleado total o parcialmente por los perjuicios derivados del hecho.

Finalmente entre la acción u omisión y el perjuicio debe mediar una *relación de causalidad*, lo cual impone al actor el deber de demostrar que el perjuicio provino exactamente de las actuaciones u omisiones de la administración, con un nexo de causa a efecto, el que se rompe, como también lo ha dicho la

jurisprudencia, cuando se prueba una causa extraña a la administración en la producción del daño, como la culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

Por regla general, corresponde a la parte demandante la comprobación plena de los hechos de su demanda, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)⁴, es decir, de los tres elementos que permiten deducir la responsabilidad.

2. Régimen de responsabilidad aplicable

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la Administración; ello no obstante la aplicación del aforismo jurídico “*venite ad factum, iura novit curia*” (dame los hechos, el Juez dará el Derecho), que significa que en materia de acciones de reparación directa se permite al Juez de la causa acudir al régimen de responsabilidad que más se ajuste a los hechos que dan origen al proceso, sin que se esté limitado a lo expuesto por el actor o los sujetos procesales⁵.

Las imputaciones jurídicas de la demanda realizadas contra la parte demandada aluden a la omisión en la que supuestamente incurrió la Policía Nacional al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, ocupando parte de uno de los carriles de la vía, provocando que el conductor del tractocamión propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado a COLDETRANS S.A., ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Conforme a las condiciones descritas en la *causa petendi*, considera este Tribunal que el asunto debe definirse con fundamento en el régimen de responsabilidad por falla en el servicio, criterio de imputación que procede frente a supuestos en los cuales se analiza la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó

⁴ En adelante, CGP.

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 14 de agosto de 2008. Radicación número: 47001-23-31-000-1995-03986-01(16413).

cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada⁶.

Debe precisarse que no obstante que en este caso se presentó colisión de dos vehículos que en principio daría lugar a que su estudio se hiciera a través del régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, ya que se trata de una actividad peligrosa, lo cierto es que la atribución del daño a la parte demandada no se hace en desarrollo de la actividad riesgosa como tal, sino de una supuesta falla en la prestación del servicio que generó a su vez el accidente de tránsito en el que murió el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Para establecer entonces la imputabilidad al Estado y por atracción a particulares, se requiere demostrar, además del daño, la falla en el servicio y el nexo causal entre ambos.

3. Hechos acreditados

En aras de establecer si los elementos del régimen de responsabilidad aplicable en este asunto se encuentran configurados, procede esta Sala de Decisión a reseñar preliminarmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que dieron origen a esta demanda y que se encuentran acreditados en el expediente.

a) Identificación de la vía y características de la misma

Determinar con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los hechos que se imputan a la parte demandada exige establecer primeramente y con certeza la vía sobre la cual ocurrió el accidente que dio origen a esta demanda.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente⁷, se encuentra demostrado que la vía en la que sucedieron los hechos por los cuales se demanda, corresponde a la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950 metros, en el sector conocido como La Sierra, jurisdicción del Municipio de Riosucio.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 16 de agosto de 2007. Radicado número: 41001-23-31-000-1993-07585-01(30114).

⁷ Al respecto, se advierten las siguientes:

- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4).
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito n° C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3– del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).
- Libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1).
- Poligrama n° 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1).

Atendiendo lo indicado en la prueba documental⁸ y testimonial⁹ recaudada en el proceso, se acreditó que la vía referida era de una calzada, con dos carriles, doble sentido vial, pendiente, curva y luego recta, en asfalto en buen estado, en condición seca, sin iluminación artificial, con buena iluminación y sin demarcación horizontal que permitiera adelantar vehículos.

b) Instalación de un puesto de control en la vía por parte de la policía de carreteras

De conformidad con el Oficio nº 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), expedido por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los conceptos de área de prevención, puesto de control y retén difieren en lo siguiente:

***Área de prevención:** Punto sobre la malla vial nacional donde se ubica una patrulla de la policía de tránsito y transporte encargada de transmitir a la ciudadanía recomendaciones y mensajes educativos, buscando influir positivamente sobre la conducta de los usuarios de las vías, a través de los programas y campañas desarrollados por la Dirección de Tránsito y Transportes (instructivo 073 PLANE-DITRA del 25 de Junio del 2008 “CONCEPTUALIZACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE CARRETERAS”, teniendo en cuenta el mismo como un documento doctrinal que unifica los criterios de las actividades del servicio policial de Tránsito y Transporte, en el marco de la aplicación de los procesos misionales).*

***Puesto de control:** Actividad del servicio de Policía que tiene como objetivo realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delincuenciales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.*

***Retén:** De acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de tránsito (Ley 769 de 2002) en su artículo 2, define: “Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”.*

⁸ De las características de la vía dieron cuenta los siguientes documentos:

- Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).

⁹ Sobre el particular, pueden consultarse las declaraciones de los señores Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem) y Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Aun cuando en la investigación penal adelantada se observa que la Policía Nacional discutió que no había establecido un puesto de control sino un área de prevención, lo cierto es que en el marco de la citada investigación se determinó que efectivamente la entidad accionada instaló un puesto de control en la vía donde acaecieron los hechos que más adelante se precisarán.

En efecto, según consta en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), a las 7:30 a.m. del 12 de junio de 2013, los policiales Orozco Flórez, Rendón Rincón, González López, Fernández Rivera, Acevedo Pulgarín y Mejía Zuluaga, salieron con todos los elementos para el servicio, con destino al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control.

La citada anotación guarda coherencia con la observación hecha en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), referente a que cerca del lugar de los hechos se encontraba un puesto de control de la Policía Nacional SETRA – DECAL UNIR 21.2 (fl. 35, C.4).

Adicional a lo anterior, con base en lo narrado por los uniformados que estuvieron en la zona para el día de los hechos, se concluye que las actividades que estaban efectuando correspondían a las de registro y control, esto es, a un puesto de control y no a un área de prevención.

c) Requisitos mínimos y procedimiento para la instalación de un puesto de control en una vía

Conforme al Oficio nº 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1º de octubre de 2013 (fl. 135, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, el cual fue anexado con dicha comunicación (fls. 136 a 139, C.4) y del que se extrae lo siguiente:

- El objetivo del puesto de control es realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delictuales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.
- El puesto de control debe tener previa orden de servicios; no puede exceder de 2 horas en un mismo lugar; debe estar conformado como mínimo por 8 unidades en la zona urbana y 10 unidades en la zona

rural; y tiene que ser ubicado en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.

- El puesto de control debe establecerse teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo al personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio.
- Debe informarse al CAD o radio operador el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.
- El ingreso de los vehículos al puesto de control debe hacerse de forma selectiva, dando la señal de pare, y teniendo en cuenta la cantidad que pueden atender los policías integrantes del puesto de control.
- Debe haber un policial asignado al manejo de la señal de pare o siga, otros policiales encargados de la verificación de personas y registro a vehículos, y un policial más para diligenciar las planillas.
- En el esquema de instalación de un puesto de control se observa que a 50 o 100 metros de la entrada al puesto de control debe haber policiales a cargo de la seguridad y de la apertura, así como otros encargados de la requisa y del tránsito.

Tal como se indicó en el Oficio n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los requisitos mínimos del puesto de control, son:

Personal mínimo: 0-1-7 Policiales.

Como mínimo el puesto de control estará conformado por ocho (08) unidades en la zona urbana o cabecera municipal y diez (10) unidades en la zona rural, debe ser rotativo (dos horas por lugar), ubicándolo en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.

- a) ***Seguridad:*** Unidades encargadas de la seguridad se ubican en los extremos del puesto de control y velan por la integridad física del personal que conforma el puesto de control, permaneciendo alerta para evitar ataques delincuenciales externos como hostigamientos.
- b) ***Persecución e Inmovilización:*** El conductor de la patrulla permanece al lado del vehículo para reaccionar ante una eventual fuga y manipula la tabla de seguridad con el fin de detener el vehículo en fuga.
- c) ***Control de Tránsito:*** El conductor de la motocicleta (Agente de Tránsito), aplica la normatividad y reacciona ante fuga de vehículo.

- d) **Regulación de Tránsito y Selección de Vehículos:** El palettero se ubica al inicio del puesto de control y hace las indicaciones al vehículo escogido para ingresar al puesto de control.
- e) **Inspección y Registro:** Unidades encargadas de requisar personas y registrar vehículos. Para tal fin deben iniciar con un saludo respetuoso, identificarse ante los ocupantes del vehículo, explicar la finalidad del servicio y solicitarles que se bajen del mismo para realizarles la requisa.
- f) **Seguridad Requisa y Registro:** Unidad encargada de la seguridad de quienes registran y requisan.
- g) **Control y Supervisión:** El señor Comandante del puesto de control se encarga de supervisar al personal en sus labores y de reportar a la central de radio las placas y documentos de las personas y vehículos objeto de la requisa y registros, para verificar antecedentes.

Ubicación: Los puestos de control deben ser ubicados en sitios que brinden seguridad y tranquilidad al personal y usuarios de la red vial nacional.

- d) Desarrollo del puesto de control instalado en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 32

Como se indicó anteriormente, el 12 de junio de 2013, seis (6) uniformados de la Policía Nacional se dirigieron al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control en la zona. De lo anterior se dejó constancia únicamente en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), esto es, no se expidió previamente orden de servicios para realizar tal actividad.

Pese a lo establecido en el procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta que se trataba de una zona rural, las unidades policiales asignadas no fueron las necesarias, esto es, 10 policías.

En relación con la ubicación del puesto de control, sólo consta en el expediente que el mismo se instaló en una recta, seguida de una curva pronunciada que se hallaba más o menos a media cuadra¹⁰ o a 50 metros¹¹.

Quedó demostrado igualmente en el proceso que el citado puesto de control se ubicó en parte del carril que conducía de Anserma a Riosucio, para lo cual se usaron como señales únicamente dos conos a lado y lado.

¹⁰ Tal como lo informó en su declaración el policía Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem).

¹¹ Según se consignó en el acápite de observaciones del Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), por referencia que le hicieron los testigos de los hechos al policía Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem).

Ninguno de los policías que integraban el puesto de control fue asignado a manejar señal de pare o siga, y tampoco a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieron en el sector.

e) Accidente de tránsito

Encontrándose en ejecución el puesto de control instalado por la Policía Nacional en los términos descritos anteriormente, el señor Julián González Valencia transitaba por la vía en dirección Anserma – Riosucio, conduciendo el tractocamión de placas TTG200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado con administración y guarda en la actividad a COLDETRANS S.A.

Se acreditó en el expediente que siendo aproximadamente las 10:30 a.m., esto es, excediendo el límite de las dos (2) horas permitidas para efectuar puesto de control en una zona, los policías que lo conformaban estaban registrando cuatro (4) vehículos al mismo tiempo: una cama baja o niñera que transportaba una retroexcavadora, dos vehículos que la escoltaban y un camión; superando la capacidad para realizar los registros, teniendo en cuenta el número de uniformados que estaban presentes.

En tanto no se le solicitó detenerse en el puesto de control por parte de la policía de carreteras, y dado que, como se indicó anteriormente, ningún policía fue designado para manejar señal de pare o siga y tampoco para conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que durara la retención en el puesto de control, el conductor del tractocamión continuó su ruta, para lo cual procedió a invadir el carril contrario, con el fin de superar el puesto de control donde estaban los cuatro (4) vehículos mencionados.

Realizando dicha maniobra, antes de llegar a la curva que se encontraba próxima, teniendo el cabezote del tractocamión casi de nuevo en su carril pero el tráiler del mismo todavía en el carril contrario, el conductor de dicho vehículo se encontró de frente con una motocicleta conducida por el señor Israel Gutiérrez Valencia, quien no tuvo oportunidad alguna de reaccionar a la colisión y falleció instantáneamente en el lugar.

De la manera en la cual se produjo el accidente de tránsito mencionado, dan cuenta los siguientes elementos probatorios:

- En el libro de minuta de guardia y registro de novedades se consignó a las 10:30 a.m. que finalizando el área de prevención instalada en el sector del kilómetro 31 + 800 metros de la vía Cauyá – La Pintada, un vehículo tipo tractocamión había colisionado con un motociclista, el

cual perdió la vida instantáneamente (fl. 38, C.4).

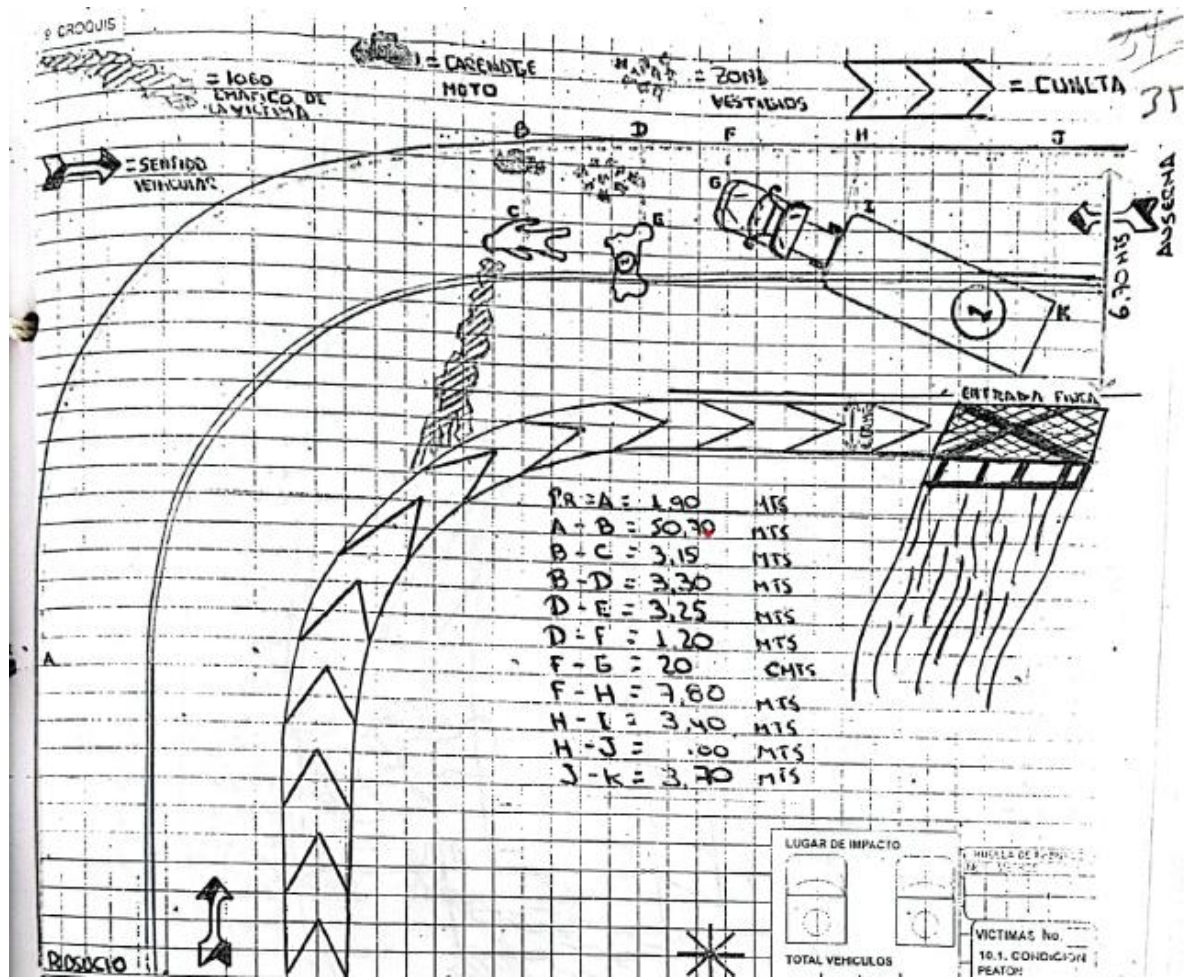
- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4), diligenciada por el patrullero Jhon Jaime Orozco Flórez, quien informó que: *“nos encontrabamos (sic) realizando area (sic) de prevención, en esos momentos senti (sic) un golpe al observar vimos un tractocamion (sic) color naranja el cual colisiono (sic) con un motociclista causandole (sic) la muerte instantaneamente (sic)”*.
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón (fls. 34 a 36, C.4).

Además de señalar las condiciones y características de la vía, ya indicadas en esta providencia, refirió que los vehículos implicados en la colisión fueron un tractocamión de placas TTG200 y una motocicleta de placas XFG83A, conducidos por el señor Julián González Valencia y el señor Israel Gutiérrez Valencia.

En observaciones, consignó que: *“habia (sic) un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL SETRA – DECAL UNIR 21.2”* (fl. 35, C.4).

No estableció las hipótesis del accidente de tránsito.

El croquis levantado por el policía de tránsito fue el siguiente:



- Informe Ejecutivo -FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4), rendido por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien respecto del accidente de tránsito, narró lo siguiente: “Siendo las 10:30 horas del día 12-06-2013 fuimos informados por el señor subintendente JHON JAIME OROZCO FLÓREZ vía celular, sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vereda la cierra (sic), ubicado en la vía que de Anserma conduce a Riosucio en el km 31+950 vereda la cierra (sic), inmediatamente me dirigí a dicho lugar para verificar la información, y fue entonces cuando llegué al Km. 31 +950 metros de la vía Cauya (sic) – La Pintada, en donde encontré una motocicleta estacionada al costado de la vía pregunte (sic) a las personas del sector quienes me confirmaron que esa motocicleta en la mitad de la vía la cual estaba en el piso, al lado había una persona sin vida y al frente un vehículo tracto camión el cual había colisionado con la motocicleta Se procedió a realizar los actos urgentes, (...) posteriormente le solicite (sic) al médico de turno la respectiva prueba de beodez, la cual arrojó resultado NEGATIVO, (...)” (fl. 3, C.4).
- Poligrama nº 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1), con el cual el Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Caldas informó al CAD-SETRA-DECAL-DITRA CIEVS – E-100 DECAL sobre el accidente de tránsito ocurrido a la 1:30 p.m. (sic) en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 +

950 metros, en el sector La Sierra del Municipio de Riosucio. En dicho documento se indicó quién conoció del caso y se formularon como hipótesis del accidente las de posible exceso de velocidad por parte de la moto, e invasión de carril por parte del tractocamión.

- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4), diligenciada por el servidor de policía judicial Andrés Javier Hurtado Marín, en relación con el cuerpo del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Indicó que al llegar al lugar evidenció la contaminación de los hechos, ya que el cuerpo sin vida del señor Israel Gutiérrez Valencia se encontraba cubierto con una manta blanca.

Anotó que el cabezote del tractocamión implicado en los hechos se encontraba en diagonal entrando en su carril y que el tráiler del mismo estaba en el carril de contravía.

Señaló que la moto estaba a lo ancho de la vía sobre la mitad de los dos carriles, y que el carenaje de la misma estaba suelto casi sobre la línea blanca del carril hacia Riosucio.

Consignó que entre acordonamiento había de a dos conos a lado y lado.

- Álbum fotográfico del accidente de tránsito, realizado por funcionario de policía judicial (fls. 25 a 30, C.4). Se indicó en el mismo que el tractocamión iba en sentido vial Quinchía – Riosucio, en contravía, entrando a una curva, quedando su cabezote con dirección a su carril de sentido vial; y que la motocicleta al parecer iba de Riosucio a Quinchía, saliendo de la misma curva.
- Informe Investigador de Campo –FPJ-11– del 3 de julio de 2013 (fls. 74 y 75, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas a los subintendentes Adrián Rendón Rincón y Carlos González López, por cuanto el primero realizó bosquejo de planimetría y topográfico, y el segundo se encontraba como segundo al mando en el área de registro y control.

Se indicó que en el lugar de los hechos se encontraba personal de la seccional de tránsito y transporte de Caldas, realizando un área de registro y control; que dicha área no fue dibujada en el bosquejo topográfico, habida cuenta que cuando llegó el funcionario encargado de ello, no había conos que referenciaran la existencia del área de

prevención; que los conos que utilizaron para el área de registro y control se usaron luego para acordonar y proteger la escena.

- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 9 de octubre de 2013 (fls. 110 a 115, C.4), en el cual se mencionó el resultado de la entrevista al señor Ángel Alberto Pulgarín Gil, testigo de los hechos, indicando que aquél era conductor de camión, que el día del accidente se encontraba en el sitio, ya que los uniformados que estaban haciendo el retén le hicieron señal de pare, por lo que se encontraba a un costado de la vía y observó un tractocamión que estaba adelantando y cuando se disponía a ingresar a su carril se sintió un golpe y luego el vehículo se detuvo, posterior a lo cual advirtió una persona tendida sobre la vía en frente del camión. Se refirió que el entrevistado manifestó que el accidente se pudo producir porque había varios vehículos detenidos y la mula tuvo que avanzar casi hasta la curva para ingresar de nuevo a su carril, mientras que la moto había podido esquivar al camión, ya que había espacio suficiente para cruzar por un lado de éste.
- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 20 de enero de 2014 (fls. 145 a 149, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas telefónicamente a los testigos del señor Julián González Valencia, esto es, a los señores Ricardo Madrid Galeano, Gustavo Cendales Vargas y Manuel Darío Posada Sánchez.

En relación con la primera entrevista, se indicó que el señor Ricardo Madrid Galeano manifestó que el día de los hechos se desplazaba como escolta de una cama baja y que fueron requeridos por un retén de la policía de carreteras. Se señaló que el entrevistado acotó que estando en el retén, fue parado igualmente un camión que se desplazaba por el lugar, y que luego apareció una tractomula que se vio obligada a tomar el carril izquierdo y casi sobre la curva, ya que el espacio en que se encontraba ubicado el puesto de control era muy corto. Se anotó que el entrevistado indicó que cuando la tractomula estaba retomando el carril derecho, apareció una motocicleta a alta velocidad, que impactó de frente con el tractocamión y murió de forma instantánea. Se consignó que el entrevistado refirió que sólo había cuatro (4) agentes de policía adelantando el puesto de control, lo cual era insuficiente, y que al ocurrir el accidente, éstos retiraron los conos que tenían apostados en la mitad de la vía para cerrarla en los extremos mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Por su parte, se anotó que el señor Gustavo Cendales Vargas manifestó que igualmente fue requerido por la policía de carreteras para un retén

a un lado de la vía, y que luego se hizo estacionar también a un camión más adelante de él y de su esquema de trabajo. Refirió que apareció una tractomula que bajó la velocidad y por lo estrecho de la vía se vio obligada a tomar el carril izquierdo para adelantar los carros estacionados. Se señaló que el entrevistado añadió que como uno de los conos de señalización estaba ubicado casi en el extremo de la curva, cuando la tractomula retomaba el carril derecho, apareció una motocicleta que transitaba en sentido contrario y por la velocidad que llevaba no alcanzó a frenar e impactó de frente con el camión, falleciendo en el lugar. Se indicó que el entrevistado refirió que en el retén sólo había cuatro (4) policías, que ninguno de ellos estaba controlando el tráfico de vehículos, y que luego del accidente, aquellos retiraron los conos de señalización del centro de la vía para cerrar el paso mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Respecto del señor Manuel Darío Posada Sánchez, se consignó que éste manifestó que ese día iba para Medellín y antes de llegar a Riosucio se encontró un puesto de control de la policía de carreteras, la cual lo hizo estacionar a un costado de la vía. Se indicó que el entrevistado afirmó que estando allí apareció un camión al que también hicieron estacionar delante de la cama baja en la que él se desplazaba; que luego apareció una tractomula que viajaba en el mismo sentido y que por la estrechez de la carretera, tuvo que salir de su carril y tomar el izquierdo para poder sobrepasar los vehículos que estaban estacionados. Se consignó que el entrevistado sostuvo que como el último cono de señalización estaba ubicado casi terminando en tramo recto, cuando la tractomula iba a retomar de nuevo su carril derecho, apareció una moto que subía muy rápido y no alcanzó a detenerse o maniobrar e impactó de frente con el camión. Se precisó que el entrevistado adujo que en el retén sólo había cuatro (4) policías, y que el tramo donde se ubicó era muy corto.

- Testimonio del Intendente de la Policía Nacional, señor Jhon Jaime Orozco Flórez¹², del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
 - El día de los hechos se encontraba desarrollando la labor de registro y control.
 - No recuerda cuántos policías se encontraban en el puesto de control, y aunque sólo tiene presente a un compañero, indicó que había más pero no sabe precisar cuántos.
 - Los policiales estaban dentro del área de registro y control, no estaban arriba o más abajo del puesto de control.

¹² Minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem.

- No utilizaron paletas para el pare y siga de los vehículos.
 - Tenían señalizado con conos a cada extremo del área de registro y control. No recuerda cuántos conos utilizó al principio y fin del puesto de control.
 - No tenían policial al inicio y al final del puesto de control, dando vía a los conductores o indicándoles que transitaran con precaución. Sin embargo, consideró procedente que hubiera un policial al inicio y al final dando vía a los conductores.
 - Momentos antes del accidente se hizo señal de pare a una cama baja que llevaba una retroexcavadora, para su correspondiente registro.
 - Efectuando la función de registro y control, observó que, como había otro vehículo que se estaba registrando, un tractocamión al cual no se le detuvo para registro, se fue en contravía por todo el puesto de control, en sentido Anserma – Riosucio. Cuando ya iba a finalizar el puesto de control, donde estaba el último cono de la señalización, esto es, cuando iba a entrar a su propio carril, ya estaba la curva y apareció un motociclista con el cual impactó, resultando muerto este último.
 - Para seguir por la vía, el tractocamión tenía que invadir el otro carril.
 - El camión que tenían dentro del área de registro no permitía que el tractocamión pudiera pasar por el carril que le correspondía, por lo que éste se metió en contravía y pasó todo el puesto de control en contravía.
 - El tractocamión violó una norma de tránsito al invadir el carril.
 - No sabe a qué velocidad iba el motociclista.
 - Con el puesto de control estaban ocupando parte del carril bajando, y como el tractocamión no cabía, debía esperar a que de pronto uno de los policiales le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha.
 - Ningún policía le dio vía al tractocamión y tampoco lo detuvo.
 - El accidente se produjo terminando la recta e iniciando la curva.
 - En la curva no se alcanzaba a ver si venía otro vehículo en sentido contrario.
- Testimonio del policía de carreteras, señor Adrián Esteban Rendón Rincón¹³, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Realizó el informe del accidente de tránsito.
 - Cuando llegó al lugar de los hechos, encontró carros a lado y lado

¹³ Minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem.

de la vía y estaba cerrado el acordonamiento con conos. Observó el tractocamión atravesado en la vía, la persona fallecida y la motocicleta.

- El tractocamión quedó en sentido Anserma – Riosucio. El cabezote quedó en el carril que le correspondía pero la parte del tráiler estaba en sentido contrario, invadiendo el carril de la motocicleta.
 - El accidente ocurrió entrando a una curva, en la que luego llega a una recta, y en la que normalmente montan el puesto de control.
 - En la curva, el tractocamión se estaba metiendo a su carril, y venía en sentido contrario.
 - El motociclista impactó contra el cabezote del tractocamión. No tiene presente en qué parte del cabezote se dio el impacto.
 - Cuando llegó al sitio no vio el puesto de control y puso en observaciones que según le informaron los testigos que estaban allí, existía un puesto de control aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
 - El puesto de control que le indicaron que había a 50 metros estaba en una recta.
 - No hizo hipótesis del accidente porque sus superiores (Seccional de Tránsito de Caldas) le dijeron que no la realizara, ya que el asunto tenía que ser investigado.
 - La orden de que no se dejaran hipótesis fue verbal, pero lo más seguro es que haya quedado consignada en acta.
 - El motociclista no tenía buena visibilidad en la curva. Lo más probable es que si un vehículo venía en contravía, hubiera colisión.
 - No identificó el punto exacto del impacto. No quedó precisado en el informe de accidente de tránsito.
 - Había dos conos pero ya por fuera, como atajando los vehículos para que no se metieran a la escena donde sucedieron los hechos.
- Testimonio del conductor del tractocamión implicado en el accidente, señor Julián González Valencia¹⁴, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Entre las 9 y 10 de la mañana, en sentido vial Anserma – Riosucio, iba en una tractomula con una carga de maíz desde Buenaventura para Supía. Llegando a un sector conocido como La Sierra, cerca de Riosucio, se encontró con un retén de la policía de carreteras, que a un lado tenía orillada una cama baja con una retroexcavadora encima y sus dos acompañantes (dos carros particulares).
 - El retén estaba antes de la curva pero muy pegado a ésta. Estaba a

¹⁴ Octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A.

unos 15 metros antes de la curva.

- Se dio cuenta que había un retén porque vio conos. No tenían paletas para dar vía de un lado a otro. Había 10 conos, 10 delineadores.
- Vio de 3 a 4 agentes de policía en ese retén, pero no recuerda bien porque han pasado varios años y además por el susto que pasó por lo sucedido.
- Cuando llegó a la parte donde estaba orillada la cama baja, había otro camión delante de él, y la policía le hizo señas de que parara, y el camión paró.
- Había 4 vehículos en el retén: la cama baja, los dos particulares que la acompañaban y el camión que estaba antes de él y que lo detuvieron.
- Teniendo en cuenta que quedó en la vía, ya que no le hicieron señal de pare a él sino sólo al camión que estaba adelante, el conductor del tractocamión decidió proseguir, por lo que pasó por un lado del retén, para lo cual hizo la maniobra de invadir el carril contrario. En el momento no consideró que fuera mejor esperar, porque la policía no lo había parado y entonces siguió.
- Ya pasando los últimos conos que estaban casi llegando a la curva, teniendo prácticamente metido el cabezote a su derecha, esto es, a su carril, el conductor sintió el golpe de la moto que apareció rápido y se pegó con la parte frontal derecha de la mula, en el bumper, en todo el capó, casi hacia el centro.
- No vio venir la motocicleta, sólo sintió el impacto.
- Se bajó a mirar qué le había pasado al motociclista y ya no había nada que hacer.
- Desde que advirtió la presencia del retén hasta que hubo el impacto, cree que había unos 10 metros.
- El retén no estaba bien ubicado porque no había sido instalado en toda la recta y no tenía paleteros para dar vía a lado y lado. Debió haber tenido visibilidad desde ambos lados.
- En dicha curva no se puede adelantar porque los policías estaban muy precisos con el retén pegado a la curva.
- Es una curva ciega, por lo que el conductor de la motocicleta no podía advertir que había un retén más adelante. Tampoco podía ver que el tractocamión venía.
- Hay testigos que dan cuenta de que la culpa del accidente no fue del conductor del tractocamión sino del retén mal ubicado, que estaba montado prácticamente cerca de la curva.

4. Acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad por falla en el servicio en el caso concreto

Los presupuestos que permiten endilgar responsabilidad bajo el título de imputación por falla en el servicio se concretan en el daño antijurídico sufrido por el interesado, la conducta anormal de la Administración, y finalmente, una relación de causalidad entre esta última y aquél, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio; aspectos cuya configuración en el *sub examine* se analizan a continuación.

4.1 El daño

En relación con la noción de daño, como primer requisito del proceso de determinación de la responsabilidad que le pueda caber a la entidad enjuiciada, la Sala observa que ese concepto se distingue del referido al perjuicio, entendido el primero como el hecho o situación objetiva verificable con los sentidos, que lesiona de manera definitiva un derecho o interés lícito o altera su goce pacífico; el segundo corresponde al menoscabo patrimonial subjetivo sufrido por la víctima del daño y como consecuencia directa de este, que comporta su faz indemnizable¹⁵.

Esa misma postura ha sido adoptada por el Consejo de Estado al señalar que *“(...) es necesario reiterar que el daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad, y una vez verificada su configuración, se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada, como quiera que aquél es requisito indispensable de la obligación de reparar. En ese orden de ideas, el daño, en su aspecto objetivo, debe ser entendido como la lesión de un derecho, interés o atributo de la persona, sin que exista la necesidad de relacionarlo con la actividad que lo causó, pues es una entidad fenoménica u ontológica que lejos de estar relacionado con el deber ser de las cosas, es un dato objetivo apreciable por los sentidos y, por consiguiente, una entidad natural. De allí que, la mera ocurrencia del daño y su nota de antijuricidad es el presupuesto indispensable que genera el deber de reparar. (...) La labor del juez, en principio, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, como violación a un interés legítimo, esto es, como fenómeno, como dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia, luego, aquél asume una posición axial frente al mismo, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado éste, comprobar la posibilidad de imputación o no, a la entidad demandada”*¹⁶.

¹⁵ Antaño la Corte Suprema de Justicia afirmó que *“(...) el daño, considerado en sí mismo, es la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su patrimonio, al tiempo que el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó”*. Sala de Negocios Generales, 13 de diciembre de 1943, M.P. Dr. Cardozo Gaitán.

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Exp. 20001-23-31-000-1998-03813-

Es preciso recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, no basta la demostración de la ocurrencia del daño puro y simple para exigir del Estado la obligación de repararlo, sino que se requiere que el mismo sea calificado como antijurídico¹⁷.

La antijuridicidad del daño representa, entonces, la ausencia del deber jurídico de soportarlo por parte de quien lo sufre. Ahora, el daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo se torna imprescindible que se acrediten los aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama, a saber: **i)** debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, como se indicó; **ii)** que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; **iii)** que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, de manera que no puede limitarse a una mera conjetura o alea.

En el caso que convoca la atención del Tribunal, según lo expuesto en la demanda y de conformidad con el material probatorio aportado al proceso, el daño alegado por la parte actora se concreta en el lamentable fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, en las condiciones y de la manera referida en el acápite correspondiente de los hechos probados.

El citado daño consta además en la siguiente prueba documental, corroborada por la prueba testimonial recaudada¹⁸:

- Informe Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013 (fls. 102 a 109, C.4), en el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el señor

01(18451). Ver también sentencia del 19 de octubre de 2011, de la misma Corporación y Sección, con ponencia de la Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

¹⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 05001-23-25-000-1992-3233-01(13233).

¹⁸ Sobre el particular, rindieron declaración los señores Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem), Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem), Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Luz Damary Uchima Guevara (noveno audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), José Didier Chiquito Trejos (décimo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Roberto Elías Lema Castro (minuto 00:01 a 17:02 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A) y Nulber Londoño Velasco (minuto 17:10 a 27:33 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Israel Gutiérrez Valencia sufrió “(...) un TRAUMA CRANEO-ENCEFALICO (sic) SEVERO que gener[ó] FRACTURA DE BASE DE CRANEO (sic), dicho traumatismo genera un CUADRO de HIPERTENSION (sic) ENDO-CRANEANA SEVERA y por consiguiente la muerte en el lugar de los hechos” (fl. 113, ibidem).

- Registro Civil de Defunción expedido por la Registraduría Municipal de Riosucio, en el consta que el 12 de junio de 2013 falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia (fl. 54, C.1).

Así pues, habiéndose constatado la existencia del daño invocado, pasa la Sala a abordar el análisis de la imputación a la parte demandada, en aras de establecer si aquél es atribuible o no a ésta.

4.2 La falla en el servicio

Se recuerda que, como se indicó al momento de señalar el título de imputación con el cual se debe analizar la responsabilidad de la parte demandada en este asunto, los accionantes aducen que la Policía Nacional omitió el reglamento previsto para instalar el puesto de control en la vía en la que ocurrió el accidente, y que al ocupar parte de uno de los carriles de la vía sin las medidas de seguridad requeridas, llevó a que el conductor del tractocamión ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Habida cuenta que la imputación realizada por la parte demandante alude a la omisión en el cumplimiento del procedimiento para la instalación de puestos de control, procede esta Sala de Decisión a establecer primeramente la existencia de un contenido obligacional a cargo de la entidad accionada en esta materia, para luego determinar, con base en las pruebas allegadas, si se configuró la falla invocada.

Tal como se indicó en el acápite de hechos probados, la Policía Nacional indicó que el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012. De lo anterior dan cuenta los Oficios n° 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1° de octubre de 2013 (fl. 135, C.4) y n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscritos por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas.

Al examinar dicho procedimiento, el Tribunal observa que el fundamento

legal del mismo, según se indicó en el respectivo documento, es el siguiente:

- Constitución Política: artículos 2, 29 y 218.
- Ley 909 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
- Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- Ley 872 de 2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios).
- Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).
- Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional).
- Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).
- Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).
- Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
- Ley 1275 de 2008 (sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).
- Ley 1453 de 2011 (que reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio, y dictó otras disposiciones en materia de seguridad).
- Resolución 0911 del 1º de febrero de 2010 (Manual de Patrullaje Urbano).
- Ley 0019 de 2012 (anti trámites).

Revisada cada una de las normas referidas, la Sala advierte que ninguna de ellas prevé de manera expresa y clara, la forma en la cual deben instalarse y ejecutarse puestos de control.

En efecto, el Código Nacional de Tránsito se limitó a definir el término “retén” como el *“Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”* (artículo 2); al paso que estableció facultades o competencias a cargo de la Policía Nacional, específicamente de sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras, para que en su calidad de autoridad de tránsito, vele por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público, con funciones de carácter regulatorio y sancionatorio, y acciones orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías (artículo 7). Adicionalmente, dispuso que la Policía Nacional debe reglamentar el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, así como de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras (parágrafo 2 del artículo 7).

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal adelantó la búsqueda

normativa y jurisprudencial respecto de los requisitos para instalar puestos de control, hallando que en concepto n° 20091340022421 del 20 de enero de 2009, expedido por el Ministerio de Transporte, se señaló que tal materia estaba regulada en la Resolución 9960 de 1992 (Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional); afirmación ésta que también fue hecha por el Consejo de Estado en providencias relativas al tema¹⁹.

No obstante lo anterior, al examinar la Resolución 9960 de 1992, esta Corporación advierte que la misma no contempló un procedimiento específico para la instalación de puestos de control, pero realizó las siguientes precisiones aplicables a la materia:

- Definió puesto de control como el *“Lugar estratégico donde se cumplen actividades de registro y control en cumplimiento de los planes operativos, y cuyas características principales son la seguridad y movilidad de sus unidades”* (artículo 90).
- Estableció que la policía vial tiene el objeto de vigilar, hacer cumplir las normas y disposiciones que rigen y regulan el tránsito y transporte automotor por las carreteras nacionales; que debe velar por las condiciones de seguridad de los vehículos en circulación, remover los obstáculos en las vías, suministrar información a los usuarios cuando la soliciten, controlar el tránsito de vehículos sin luces o señales que permitan evitar accidentes, auxiliar a los conductores, asumir el control y dirección del tránsito en vías obstruidas y atender los accidentes en carretera (numeral 5 del artículo 116).
- Indicó que uno de los medios con los que cuentan las autoridades de policía, capaces de prevenir la comisión de los delitos y las contravenciones previstas en la ley penal y en los códigos de policía, son los reglamentos, entendidos como una manifestación de voluntad administrativa en forma de regla general escrita, emitida por una autoridad que tenga poder reglamentario (artículo 124).

La Sala observa que la ausencia de una reglamentación general expresa en materia de requisitos para la instalación de puestos de control, en contraste con la facultad que tienen los organismos de tránsito para organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción

¹⁹ Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).

(artículos 2 y 6 del Código Nacional de Tránsito), conduce a esta Sala de Decisión a inferir que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas tenía competencia para establecer a través de manuales internos, las directrices para llevar a cabo las actividades propias de un puesto de control, tal como lo hizo en el procedimiento que obra en el expediente y que se mencionó en el acápite de hechos acreditados precisado en estas consideraciones.

Recuérdese que, según se ha planteado por la doctrina nacional²⁰, la actividad interna, intraorgánica o interorgánica de la Administración origina los denominados actos de administración, tales como instrucciones o circulares, que resultan obligatorios para el nivel interno de la entidad.

En ese sentido, a pesar del vacío normativo que sobre este tema parece existir, este Tribunal no puede pasar por alto que para la época de los hechos que dieron origen a esta demanda, existía la reglamentación interna que se acaba de mencionar, específicamente un manual, que establecía de qué manera debía adelantarse un puesto de control y, en ese sentido, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas debía sujetarse a aquél para el despliegue de sus operativos en carretera.

Esa es la interpretación que también hace el Consejo de Estado en las providencias referidas anteriormente²¹, en la medida en que reconoce que internamente la Policía Nacional y sus Seccionales de Tránsito manejan un manual de procedimiento para instalación de puestos de control, lo que guarda relación con la facultad legal que le asiste a tal entidad de instalar puestos de control para realizar operativos en las vías.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado en el acápite de hechos probados en relación con los requisitos mínimos para la instalación de un puesto de control, esta Sala de Decisión advierte de manera evidente que la Policía Nacional, en efecto, desatendió el procedimiento previsto, en tanto:

²⁰ En efecto, sobre el particular puede consultarse el libro *Los convenios de la Administración: Entre la gestión pública y la actividad contractual* (Bogotá, Editorial Temis, 2020), páginas 108 y 109, en el cual se analiza por su autor (Augusto Ramón Chávez Marín) la naturaleza de los actos originados en la actividad interorgánica.

²¹ Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).

- No expidió previamente orden de servicios para realizar el puesto de control.
- No se asignaron las unidades policiales requeridas para la mencionada actividad y atendiendo la zona rural de la que se trataba y que exigía un mínimo de 10 policías.
- Excedió el límite de dos (2) horas previsto para realizar puesto de control en una misma zona.
- El puesto de control no fue ubicado en un lugar apropiado, en tanto se instaló no sólo cerca de una curva pronunciada, sino además ocupando parte de uno de los carriles sin usar la señalización adecuada, sin contar con policías asignados a manejar la señal de pare o siga, y a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieran en el sector. Lo anterior, con el fin de evitar congestión vehicular, así como riesgo para los conductores o peatones.
- Los vehículos seleccionados para el registro y control no se limitaron a aquellos que pudieran atender dadas las circunstancias antes referidas, esto es, número de policiales a cargo, ubicación del puesto de control y ausencia de señalización correspondiente, sin generar o incrementar riesgos para quienes transitaran por el lugar.
- No se dispusieron policiales a cargo de la seguridad y de la apertura a 50 o 100 metros de la entrada a dicho retén, como se señala en el esquema de cómo debe instalarse un puesto de control.

Tal como ha tenido oportunidad de señalarlo el Consejo de Estado²², “(...) *el servicio policial debe prestarse con estricta aplicación al principio de planeación y, por tanto, los comandantes de la institución se encuentran obligados a planear y distribuir los servicios teniendo en cuenta las características del grupo a su mando, para prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentan contra la seguridad y bienestar de la comunidad, mantener y defender el orden público, garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, con ocasión de la prestación del servicio. (...)*”. Y nótese cómo en el presente asunto la entidad demandada no efectuó los planes de prevención necesarios para minimizar los riesgos derivados del acto propio del servicio que estaba desarrollando.

²² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín. Sentencia del 12 de diciembre de 2019. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445).

Todo lo anterior constituye una evidente falla en el servicio por parte de la Policía Nacional.

En relación con la responsabilidad del vehículo tipo tractocamión que se vio implicado en el accidente, el Tribunal advierte que el conductor del mismo incurrió en infracciones comprobadas al Código Nacional de Tránsito, pues realizó una maniobra de adelantamiento de vehículos no sólo en un tramo de la vía en donde existía línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, sino también cerca de una curva, siendo desfavorable por ello la visibilidad y ofreciendo peligro para quienes transitaran por el carril contrario. Lo anterior, en abierta contradicción con las prohibiciones previstas por el artículo 73 de la Ley 769 de 2002:

ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. *No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:*

(...)

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

En curvas o pendientes.

Cuando la visibilidad sea desfavorable.

(...)

En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.

La anterior prohibición está relacionada con la obligación que les asiste a los conductores de vehículos de transitar por sus respectivos carriles, y de adelantar sólo cuando no entorpezca el tránsito ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. Así se desprende del artículo 60 de la Ley 769 de 2002:

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. *Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.*

(...)

PARÁGRAFO 2o. *Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.*

El artículo 131²³ de la Ley 769 de 2002 contempla expresamente sanciones para el conductor y/o propietario de un automotor que incurra en las infracciones relativas a adelantar a otro vehículo en curva, así como la de conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

Aun cuando esta Corporación no desconoce que las circunstancias en las cuales se instaló el puesto de control por parte de la Policía Nacional incidieron de una u otra manera en la comisión de las infracciones antes referidas, lo cierto es que tampoco puede pasar por alto que el conductor del vehículo obró imprudentemente, pues decidió *motu proprio* continuar su trayecto invadiendo para ello el carril contrario, no sólo sin esperar alguna señal de los uniformados o que los vehículos que habían sido detenidos para registro y control avanzaran, sino también sin cerciorarse que contaba con espacio suficiente para nuevamente devolverse a su carril o que no venía otro vehículo, pese a que, según consta en su declaración, observó que el retén se encontraba muy cerca de la curva.

La existencia del puesto de control, con las escasas señales usadas y que incluso fueron advertidas por el mismo conductor del tractocamión al llegar al sector, exigía de parte de éste que tomara las precauciones del caso,

²³ “**ARTÍCULO 131. MULTAS.** Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

A.1. No transitar por la derecha de la vía.

A.9. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.

(...)

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

D.6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.7. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

realizando las maniobras necesarias para continuar por su ruta sin atentar contra su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.

4.3 Nexos de causalidad

El simple incumplimiento de las obligaciones referidas a cargo de la Policía Nacional y de los particulares accionados, no genera una responsabilidad automática por la ocurrencia de un accidente, pues es necesario establecer si la referida omisión fue la causa del hecho o si se configuró alguna causal que rompiera la imputación.

Para el caso concreto y con fundamento en las razones que se indicaron al momento de analizar la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, este Tribunal considera que el desconocimiento de los requisitos mínimos en la instalación y ejecución de un puesto de control en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, para el 12 de junio de 2013, constituye una causa eficiente en la producción del daño que se dice padecido por los demandantes, o si se quiere, contribuyó e incrementó las posibilidades de configuración del hecho dañino.

En efecto, de no haber existido el mencionado puesto de control de la manera en que se describió en esta providencia, el señor Israel Gutiérrez Valencia hubiera podido transitar por su carril sin la existencia del riesgo de que los vehículos que se desplazaban en sentido contrario pudieran invadir su carril por razón del obstáculo que la misma Policía Nacional generó en la vía.

Ahora, este Tribunal considera que en el deceso del señor Israel Gutiérrez Valencia también influyó como causa eficiente y determinante, la conducta imprudente del conductor del tractocamión, pues aun cuando las condiciones del puesto de control le permitieron invadir finalmente el carril izquierdo, lo cierto es que, contrario a lo manifestado por el Juez *a quo*, aquél no se vio **obligado** por ningún miembro de la Policía Nacional a continuar el trayecto de la manera en que lo hizo. Por lo contrario, fue su propia decisión, violatoria, como se vio, del Código Nacional de Tránsito, la que materializó el riesgo creado en la vía, que provocó la muerte del motociclista.

Atendiendo lo expuesto, la Sala considera que el hecho dañino no se produjo única y exclusivamente por la omisión de la Policía Nacional sino también por la conducta del conductor del tractocamión, pues de no ser así, se estaría haciendo apología al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte y, adicionalmente se partiría de una premisa falsa,

pues si bien las condiciones del puesto de control crearon un riesgo para quienes transitaban por el lugar, lo cierto es que el conductor de la tractomula contribuyó de manera cierta y eficaz a la materialización del mismo.

En ese sentido, para esta Corporación, el daño invocado por los demandantes fue consecuencia tanto de la omisión de la Policía Nacional, como de la conducta del conductor del tractocamión, en porcentajes de contribución causal del 50% cada uno.

El Tribunal precisa que la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, como quiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo.

5. Responsabilidad solidaria del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS

De conformidad con el certificado expedido el 3 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos (fl. 69, C.1), el tractocamión de placas TTG200 es propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y, en tal sentido, recae en él la obligación de reparar el daño que fuere causado con su vehículo a terceros.

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

En reciente sentencia del 5 de abril de 2021²⁴, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente respecto de la responsabilidad solidaria que se predica por parte del propietario del vehículo con el cual se genera un daño y de la empresa de transporte a la cual se encuentra afiliado éste:

En relación con esta temática tiene dicho la Corte que:

²⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1084-2021 del 5 de abril de 2021. Radicación número: 68001-31-03-003-2006-00125-01.

(...) por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, 'legítima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...' (cas. civ. sentencia número 021 de 1º de febrero de 1992) debe responder por los daños causados, dado que 'el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporta alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo' (CCXXXI, 2o volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01).

De allí que, en concordancia, el artículo 991 del Código de Comercio, modificado por el canon 9º del decreto 01 de 1990, consagre que «[c]uando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención del propietario.»

(...)

La posición de guardián de la actividad desarrollada con un rodante causante de daños en accidente de tránsito se predica de las empresas de transporte, entre otras personas, «no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.» (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627).

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el

50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

6. Sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios

En tanto la entidad recurrente no discutió el reconocimiento y liquidación que el Juez de primera instancia hizo respecto de los perjuicios solicitados por la parte actora, esta Sala de Decisión se abstendrá de analizar este aspecto.

7. Responsabilidad de los llamados en garantía

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso correspondiente. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena contra el llamante.

El artículo 225 del CPACA, regula la figura del llamamiento en garantía así:

ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. *Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.

a) Llamada en garantía por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio

En punto al llamamiento en garantía de la aseguradora Allianz Seguros S.A., se recuerda que éste se efectuó con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 142 a 144, C.1 y 246 a 281, C.1A).

En relación con el citado llamamiento en garantía, la aseguradora propuso los medios exceptivos que se resuelven a continuación:

▪ ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”.***

Allianz Seguros S.A. manifestó que en este caso se configuró la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro, por cuanto transcurrieron más de dos (2) años entre la fecha en que la víctima falleció y aquella en la cual fue vinculada al proceso la aseguradora.

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro se encuentra regulada en el artículo 1.081 del Código de Comercio, así:

ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.

Ahora bien, como lo ha señalado el Consejo de Estado²⁵ con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia²⁶, para el cómputo del término de prescripción precitado se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 1.131 del Código de Comercio, puesto que “<<(…) La demanda judicial o extrajudicial de la indemnización de la víctima al asegurado, la toma el citado precepto como hecho mínimo para la exigibilidad de la responsabilidad que pueda reclamar el asegurado frente al asegurador […] Luego si solo desde ese instante puede reclamarse la responsabilidad al asegurador por parte del asegurado, mal puede hacerse el cómputo de la prescripción desde época anterior.>>”.

El artículo 1.131 del Código de Comercio dispone:

ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO. *En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.*

Bajo ese entendimiento y teniendo en cuenta que el término de prescripción en este caso comenzaba a correr a partir de la fecha de notificación de la demanda al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, esto es, desde el 4 de julio de 2015, y vencía el 4 de julio de 2017, se concluye que la acción derivada de la póliza no había prescrito para cuando se le notificó a Allianz Seguros S.A. el llamamiento en garantía (20 de abril de 2016).

- **“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”.**

Allianz Seguros S.A. sostuvo que su eventual responsabilidad se encuentra limitada por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena.

El valor que tendría que asumir la aseguradora corresponde al 50% de la condena impuesta en primera instancia, que fue de \$213'388.909,17 por concepto de perjuicios materiales y de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales (\$414'058.000 a 2019), para

²⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Martín Bermúdez Muñoz. Sentencia del 3 de agosto de 2020. Radicación número: 76001-23-31-000-2006-02078-01(43650).

²⁶ Cita de cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de mayo de 1994, rad. 4106.

un total de: \$627'446.909,17.

Ahora, conforme a la póliza de seguro, el valor asegurado por concepto de responsabilidad civil extracontractual asciende a la suma de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

Sin perjuicio de que la suma que la aseguradora tiene que asumir es inferior al valor asegurado, lo cierto es que el medio exceptivo formulado es procedente, en la medida en que efectivamente existe un límite para dicho pago, y así se declarará en la parte resolutive de esta providencia.

▪ ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.***

Conforme se observa en lo pactado en la póliza de seguro, se acordó el pago de un deducible de \$1.100'000.000 del valor asegurado de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

En ese sentido, esta Corporación declarará probada la citada excepción, pues al afectarse parte del valor asegurado en la póliza, el asegurado deberá asumir el valor que corresponda por concepto de deducible.

▪ ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.***

Adujo la aseguradora que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda y, por ello, hasta tanto no se acredite la ocurrencia del siniestro, su cuantía y se haya declarado judicialmente responsable al llamante en garantía, el amparo o cobertura de la póliza no resulta aplicable.

Dado que en este proceso se demostró que efectivamente el vehículo tractocamión respecto del cual se constituyó la póliza de seguro, colisionó con la motocicleta en la que se desplazaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, produciendo la muerte inmediata de éste; y que además dicho impacto fue consecuencia en parte de la conducta imprudente del conductor del automotor implicado, esta Sala de Decisión considera que sí se configuró el siniestro y, por ende, se hará efectiva la garantía referida en la póliza, teniendo en cuenta en todo caso el límite de valor asegurado, así como el deducible que el asegurado habrá de asumir.

Por lo expuesto, la Sala declarará no probadas las excepciones de ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE***

SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”; mientras que tendrá por probadas las de “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.

b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1). Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, se concluye que en este caso se acreditó la existencia de responsabilidad extracontractual por parte de la Policía Nacional (en un 50%) y del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS (en un 50% de manera solidaria), en el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia. En ese orden de ideas, habrá de modificarse la providencia objeto de apelación, para declarar igualmente responsables del daño antijurídico al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, así como para precisar los porcentajes de participación de los mismos en el hecho dañino.

Adicionalmente, se condenará a Allianz Seguros S.A. a que reembolse el valor a que está obligado a pagar el señor Juan Augusto Ríos Osorio, llamante en garantía, con ocasión de este proceso.

De otra parte, se negará el llamamiento en garantía frente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Finalmente se precisa que, en tanto no fueron objeto de apelación, el Tribunal mantendrá la decisión adoptada por el Juez de primera instancia en relación con los perjuicios reconocidos y su monto.

Costas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, esta Sala de Decisión se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, como quiera que la demanda no fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, como lo exige la norma.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. MODIFÍCASE la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del proceso de reparación directa promovido por los señores Omaira Guerrero Largo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, COLDETRANS S.A. y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Lo anterior, en el siguiente sentido:

Segundo. MODIFÍCASE el ordinal primero de la providencia recurrida, el cual quedará así:

DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en un 50%, y de manera solidaria al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS en el 50% restante, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Tercero. ADICIÓNANSE los siguientes incisos al ordinal segundo del fallo apelado, así:

DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS, que denominaron: “HECHO DE UN TERCERO”, “CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”, “INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”, “INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS” e “(...) INNOMINADA”.

DECLÁRANSE no probados los siguientes medios exceptivos formulados por Allianz Seguros S.A.: “PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.

DECLÁRANSE probadas las excepciones propuestas por Allianz Seguros S.A. y que denominó: “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.

DECLÁRASE probado el siguiente medio exceptivo formulado por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.: “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD” y, en consecuencia, ABSUÉLVESE de responsabilidad a la citada llamada en garantía.

Cuarto. REVÓCASE el ordinal tercero de la providencia objeto de debate, con el cual se negaron las pretensiones de la demanda respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS.

Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

CONDÉNASE a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.

Sexto. MODIFÍCANSE los ordinales quinto y séptimo del fallo objeto de apelación, en el sentido de disponer que la condena por concepto de perjuicios, tanto materiales como morales, se predica en un 50% frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y en un 50% y de manera solidaria respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A.


Séptimo. En lo demás, **CONFÍRMASE** la providencia recurrida.

Octavo. ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente expuesto.

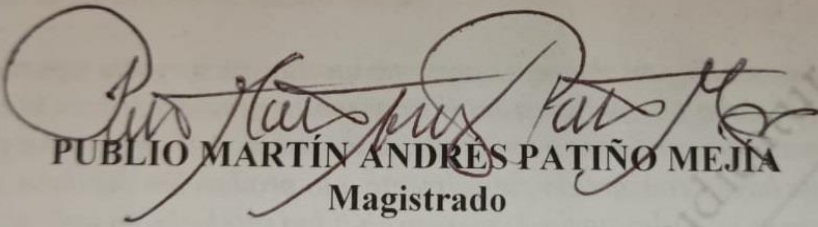
Noveno. NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA.

Décimo. Ejecutoriada esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen y **HÁGANSE** las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase



AUGUSTORAMÓN CHÁVEZ MARÍN
Magistrado


PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA
Magistrado


CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

No. 153

FECHA: 29/08/2022



HÉCTOR JAIME CASTRO CASTAÑEDA
SECRETARIO

CONSTANCIA SECRETARIAL. Manizales, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022).
A continuación, el suscrito Secretario del Despacho, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, procede a realizar la siguiente:

LIQUIDACIÓN DE COSTAS

CORREO Y NOTIFICACIÓN:
AGENCIAS EN DERECHO: \$35.669.445.00
TOTAL LIQUIDACIÓN COSTAS: \$35.669.445.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022) **A.S.784**

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: OTONIEL DE JESUS - GUTIERREZ VALENCIA
Demandado: NACIÓN MINDEFENSA POLICIA NACIONAL - COLDETRANS S.A. y OTRO
Radicación: 170013333004-2014-00566-00

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas en providencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

De conformidad con lo prescrito en el artículo 366 del Código General del Proceso, se imparte aprobación a la liquidación de costas efectuada en la fecha por la Secretaría del Despacho, por valor de \$35.669.445.00.

En firme este auto, hágase entrega de copias auténticas a los solicitantes, archívese el expediente, previo las anotaciones correspondientes en el programa de gestión Justicia XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MANIZALES
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
Estado electrónico No.036 del veinticinco (25) de
octubre de dos mil veintidós (2022).

Firmado Por:
Juan Guillermo Angel Trejos
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
003
Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b128da86ef4ce14a51ea74ecbfeca0a373a738aab4309dc60306804b2091f234**
Documento generado en 24/10/2022 10:56:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Las presentes copias de la sentencia de primera instancia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), de la sentencia de segunda instancia del veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) y del auto que aprueba la liquidación de costas de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022), son auténticas y corresponden a las originales del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA bajo radicado No.170013333004-2014-00566-00 instaurado por OTONIEL DE JESUS - GUTIERREZ VALENCIA en contra de NACIÓN MINDEFENSA POLICIA NACIONAL - COLDETRANS S.A. y OTRO.

La providencia quedó debidamente ejecutoriada el día uno (1) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Firmado Por:
Francisco Javier Osorio Herrera
Secretario Circuito
Juzgado Administrativo
003
Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **605879c055f61f1b5acb35d83f9e31d8b3b591087555630e0c9a673921da680c**

Documento generado en 11/11/2022 12:23:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
-Sala Quinta de Decisión-

Magistrado Ponente: Augusto Ramón Chávez Marín

S.: 126

Asunto:	Sentencia de segunda instancia
Acción:	Reparación Directa
Radicación:	17001-33-33-004-2014-00566-02
Demandantes:	Omaira Guerrero Largo y otros
Demandados:	Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A. Juan Augusto Ríos Osorio
Llamados en Garantía:	Allianz Seguros S.A. Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

**Aprobado en Sala Ordinaria de Decisión, según consta en Acta nº
033 del 26 de agosto de 2022**

Manizales, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

ASUNTO

De conformidad con lo previsto por los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)¹, corresponde a esta Sala de Decisión desatar el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso de reparación directa promovido por la señora Omaira Guerrero Largo y otros contra la entidad recurrente, la Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A.² y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, y en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

¹ En adelante, CPACA.

² En adelante, COLDETRANS.

LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control interpuesto el 20 de octubre de 2014 (fls. 13 a 47, 96 y 97, C.1), la parte demandante solicitó lo siguiente:

Pretensiones

1. Que se declare administrativamente responsable a la parte accionada por los perjuicios causados a la parte demandante como consecuencia de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se desplazaba como conductor de la motocicleta de placas XFG83A y colisionó con el tractocamión de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 750, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio.
2. Que en consecuencia de la anterior declaración se condene a la parte demandada al pago de los siguientes perjuicios a favor de cada uno de los demandantes, en la siguiente proporción:

DEMANDANTE	CALIDAD EN QUE CONCURRE	PERJUICIOS MORALES (s.m.l.m.v.)	PERJUICIOS MATERIALES (Lucro Cesante)
Omaira Guerrero Largo	Compañera permanente	100	\$140'000.000
Arsoman Gutiérrez Navarrete	Padre	100	
Bertilda Rosa Valencia	Madre	100	
Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia	Hermano		
Fernando Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Otoniel Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Uber Gutiérrez Valencia	Hermano	100	

3. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA.

4. Que se ordene el pago de intereses moratorios sobre las sumas de dinero a que resulte condenada la parte accionada.

Hechos

La parte accionante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes supuestos de hecho (fls. 18 a 29, C.1), que en resumen indica la Sala y que se permite ordenar cronológicamente para darle mayor entendimiento al relato efectuado:

1. El 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placas XFG83A, marca Auteco Discovery, modelo 2009, color negro-azul, portando todos los elementos de seguridad necesarios, con dirección al Municipio de Quinchía (Risaralda), con el fin de cumplir su actividad laboral.
2. Siendo aproximadamente las 10:30 a.m., en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio, cuando el señor Israel Gutiérrez Valencia se disponía a salir de una curva cerrada por su carril de subida con doble línea, en la que se prohíbe adelantar, fue atropellado de manera intempestiva por un vehículo tractocamión que invadió el carril.
3. El vehículo tractocamión que se vio implicado es de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, siendo COLDETRANS la empresa usufructuaria, y era conducido por el señor Julián González Valencia.
4. El señor Israel Gutiérrez Valencia sufrió graves lesiones en su humanidad, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.
5. En el sitio donde ocurrieron los hechos no existía ningún tipo de señalización que advirtiera que metros más adelante se encontraba un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional.
6. Después de la colisión, los miembros de la Policía Nacional que se encontraban cerca a 50 metros más adelante improvisando un retén, procedieron a ubicar dos conos para cerrar la vía y proteger la escena del crimen.
7. Al momento del accidente, el puesto de control sólo contaba con tres (3) agentes y cuatro (4) conos que se desplazaron a la parte superior e

inferior para cerrar la vía y levantar el cadáver del señor Israel Gutiérrez Valencia.

8. Según el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº 1295533, realizado por el agente de tránsito Adrián Esteban Rendón Rincón, la vía en la que ocurrió el accidente es una curva pendiente, en doble sentido, con una calzada y dos carriles, en asfalto, en buen estado y en condiciones secas.
9. El citado agente de tránsito no describió ninguna hipótesis para el accidente, como le era debido, pero sí consignó en observaciones que había un puesto de control de la Policía Nacional aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
10. De acuerdo con el Informe Pericial de Necropsia nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia murió de manera violenta a causa de un trauma contundente que le generó un trauma craneoencefálico severo, fractura de base del cráneo e hipertensión endocraneana severa.
11. Con ocasión de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia se abrió investigación preliminar en la Fiscalía Segunda Seccional del Municipio de Riosucio, la cual se encuentra en etapa de indagación.
12. El señor Israel Gutiérrez Valencia nació el 7 de noviembre de 1974 en Quinchía (Risaralda); lo que significa que tenía 37 años de edad para el 12 de junio de 2013.
13. Antes de su muerte, el señor Israel Gutiérrez Valencia gozaba de un perfecto estado de salud, tanto física como psíquica.
14. Al momento de su fallecimiento, el señor Israel Gutiérrez Valencia llevaba más de 14 años conviviendo permanentemente con la señora Omaira Guerrero Largo, con quien no procreó hijos.
15. Los señores Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1971 en Irra. De dicha unión procrearon, además del señor Israel Gutiérrez Valencia, a los siguientes hijos: Álvaro Antonio, Otoniel, Fernando y Uber Gutiérrez Valencia.
16. El señor Israel Gutiérrez Valencia trabajaba como administrador de la Asociación de Mineros La Montaña del Municipio de Quinchía (Risaralda), devengando unos ingresos mensuales de \$1'500.000, con

los cuales, una vez descontaba sus gastos personales, aportaba el 50% para la manutención de su núcleo familiar y el restante 50% para sus padres, ya que son de escasos recursos.

17. El núcleo familiar del señor Israel Gutiérrez Valencia, compuesto por su compañera permanente, padres y hermanos, se vieron profundamente afectados por su partida, dado los fuertes vínculos afectivos entre la víctima y su familia.

Fundamentos de derecho

Como fundamentos de derecho la parte actora invocó el contenido de las siguientes disposiciones: Constitución Política: artículos 2, 6 y 90; y CPACA: artículos 104 y 140.

Sostuvo que la Policía Nacional omitió e inobservó reglamentos al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, pues ocupó el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dio la orden de continuar al conductor del tractocamión, ocupando el carril en contravía y sobre una curva cerrada, en la que el señor Israel Gutiérrez Valencia no tuvo ninguna oportunidad para proteger su vida.

Manifestó que de acuerdo con la Resolución nº 0911 del 1º de febrero de 2010, contentiva del Manual de Patrullaje de la Policía Nacional, código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, existe el siguiente procedimiento para instalar puestos de control, el cual exige un mínimo de unidades dependiendo de si la zona es urbana o rural, teniendo en todo caso presente la correcta ubicación para no perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o los peatones.

Indicó que en la especificación técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF.195-A4 de la Policía Nacional, se encuentran las descripciones de los elementos que deben emplearse para los puestos de control, dentro de los cuales se destacan los conos, las paletas y las vallas.

Refirió que la víctima del accidente no tuvo ninguna culpa en los hechos que ocasionaron su muerte.

Consideró que la omisión de la Policía Nacional respecto del Manual de Patrullaje, fue determinante en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia; siendo igualmente responsables tanto el propietario del vehículo tractocamión como la compañía COLDETRANS usufructuaria del mismo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Actuando dentro del término legal conferido para tal efecto y obrando debidamente representadas, la parte demandada contestó la demanda de la manera que se indica a continuación.

Juan Augusto Ríos Osorio (fls. 132 a 138, C.1) y COLDETRANS (fls. 202 a 208, ibidem)

Se opusieron a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes excepciones: ***“HECHO DE UN TERCERO”***, en tanto el accidente y, por ende, sus consecuencias, fue provocado por la Policía Nacional al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función, ocupando el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dando la orden de continuar al conductor del camión, ocupando el otro carril sobre una curva cerrada; ***“CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”***, en la medida en que el señor Israel Gutiérrez Valencia obró con imprudencia al conducir su motocicleta excediendo los límites de velocidad, lo cual le impidió conservar su carril y detener su vehículo para evitar el impacto; ***“INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”***, ya que las afirmaciones de la parte demandante al respecto no tienen soporte en el expediente; ***“INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS”***, en la medida en que la parte demandante se limitó a relatar someramente el evento pero no acreditó en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado y el perjuicio sufrido por los actores; e ***“(…) INNOMINADA”***, respecto de cualquier hecho que se acredite en el proceso y que constituyan una excepción.

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 190 a 195, C.1)

Manifestó su oposición a las súplicas de la parte actora, aduciendo que fue el señor Israel Gutiérrez Valencia quien invadió el carril por el cual debía circular el tractocamión, toda vez que el punto de impacto fue en la persiana de dicho vehículo, justo al lado izquierdo del radiador.

Indicó que el retén policial se encontraba a más de 70 metros de la curva donde perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Señaló que aunque el puesto de control no se realizó en los términos que indicó la parte actora, lo cierto es que aquél fue autorizado por el Grupo Unidad de Intervención y Reacción (UNIR) de la Policía Nacional.

Afirmó que la velocidad a la cual viajaba el señor Israel Gutiérrez Valencia fue un elemento preponderante en la ocurrencia del hecho.

Consideró que no existe fundamento para la imputación del daño a la entidad, ya que se presentó una culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Formuló como medios exceptivos los que denominó: ***“LA CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA”***, teniendo en cuenta que, de un lado, conforme al punto de impacto, la víctima invadió el carril contrario, tal como se desprende del croquis levantado con ocasión del accidente de tránsito, y de otro, la posición de la víctima sugiere que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo sacó incluso de su carril; y ***“ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL”***, como quiera que fue la víctima, quien al tomar la curva a considerable velocidad, terminó ocupando el carril contrario por donde circulaba el tractocamión, impactándolo en la persiana parte izquierda.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

El señor Juan Augusto Ríos Osorio llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 140 y 141, C.1).

Con auto del 25 de febrero de 2016 (fl. 233, C.1), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió el llamamiento en garantía.

DENUNCIA DEL PLEITO

COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., toda vez que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1).

A través de auto del 28 de julio de 2016 (fl. 304, C.1A), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió la solicitud hecha como un llamamiento en garantía.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

Actuando dentro del término conferido y obrando debidamente representadas, las llamadas en garantía contestaron tanto la demanda como los llamamientos en garantía de la manera que se indica a continuación:

Allianz Seguros S.A. (fls. 282 a 303, C.1A)

Se opuso a las pretensiones de la demanda, y coadyuvó la oposición que de las mismas hicieron COLDETRANS y el señor Juan Augusto Ríos Osorio en las respectivas contestaciones de la demanda, tendiente a desvirtuar los hechos de la demanda y a demostrar la ausencia de responsabilidad de tales demandados.

Propuso los siguientes medios exceptivos: ***“NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO QUE EL VEHICULO (sic) DE PLACAS TTG – 200, FUE EL CAUSANTE DEL ACCIDENTE ACAECIDO”***, pues los vehículos involucrados desarrollaban la misma actividad peligrosa y, por lo tanto, debe acreditarse cuál de los dos tuvo la influencia causal decisiva en la producción del hecho dañoso; carga que corresponde a la parte actora y que no se cumplió en este caso; ***“(…) PRESENCIA DE CAUSAS EXCLUYENTES DE CULPABILIDAD A FAVOR DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO”***, en la medida en que en la demanda se da a entender que la causante del siniestro fue la Policía Nacional y no el demandado, ya que fue imprudente y negligente no sólo en la instalación del retén sino en dar la vía a conductores en el otro carril y en una curva demasiado cerrada; ***“HECHO DE UN TERCERO”***, por cuanto el accidente se debió a la Policía Nacional; ***“CULPA DE LA VICTIMA (sic) Y SU EXPOSICION (sic) IMPRUDENTE AL RIESGO”***, ya que el señor Israel Gutiérrez Valencia iba conduciendo su motocicleta a una velocidad excesiva no permitida, lo que dio lugar a que no conservara su carril y no pudiera detener su vehículo a fin de evitar la colisión con el camión; ***“DILIGENCIA Y CUIDADO”***, pues el conductor del camión se encontraba en perfectas condiciones físicas para conducir, al paso que el vehículo mismo estaba en buen estado para ser utilizado en la actividad peligrosa; ***“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, DEBIDO AL ROMPIMIENTO CAUSAL COMO CONSECUENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (sic)”***, tal como se extrae de las pruebas allegadas al expediente y que evidencian que el señor Israel Gutiérrez Valencia fue quien inobservó las normas de tránsito; ***“(…) LIBERATIVA DEL DEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, POR PRESENCIA DE UNA CAUSA EXTRAÑA”***, cual fue el comportamiento imprudente y contrario a las normas por parte del conductor de la motocicleta; ***“COMPENSACION (sic) DE CULPAS ENTRE LAS PARTES”***,

teniéndose en cuenta la concurrencia de causas que confluyeron en el hecho dañoso; ***“AUSENCIA DE ELEMENTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL”***, dado que el conductor del tractocamión no infringió norma alguna para la conducción de vehículos; ***“LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES SON INEXISTENTES Y/O SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE SOBREESTIMADOS”***, conforme se desprende al compararse con la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia; ***“REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA, SOLO OPERA EN EXCESO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE TRÁNSITO (SOAT)”***, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1032 de 1991, que autoriza a imputar las indemnizaciones por el SOAT al mayor valor que le corresponde pagar al responsable; y ***“CARGA DE LA PRUEBA”***, atendiendo lo previsto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)³.

En punto al llamamiento en garantía, la aseguradora propuso las siguientes excepciones: ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”***, en los términos del artículo 1.081 y 1.131 del Código de Comercio; ***“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”*** por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena; ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”***, según lo pactado en la póliza de vehículos; y ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”***, teniendo en cuenta que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda.

Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. (fls. 319 a 338, C.1A)

Sostuvo que no le constan los hechos de la demanda y que de llegar a ser ciertos, ello por sí solo no generaría la pretendida solidaridad y responsabilidad civil de la llamada en garantía, pues debe probarse que fue la carga que transportaba el tractocamión la causante del daño y de sus consecuencias.

Manifestó que la simple orden de despacho de la mercancía no genera para la cooperativa la calidad de guardiana del vehículo ni su explotadora económica, su usufructuaria, su administradora o su poseedora.

Formuló los siguientes medios exceptivos: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***, por cuanto entre la cooperativa y la llamante en garantía

³ En adelante, CGP.

no existe ni ha existido ningún tipo de relación o contrato que pueda derivar en solidaridad civil por los daños o perjuicios que ocasionen los vehículos que se encuentran bajo su cuidado y administración, ni tampoco respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del vehículo) o el señor Julián González Valencia (conductor); “(...) **AUSENCIA DE CULPA**”, fundada en la falta de obligación de la cooperativa de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación del tractocamión implicado, la cual corresponde en su integridad a su propietario; “**HECHO DE UN TERCERO**”, en la medida en que el conductor involucrado no tiene ningún vínculo con la cooperativa; al paso que la carga transportada no fue la causante del hecho y sus consecuencias; e “**INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD**”, ya que no existe dependencia o subordinación de ninguna índole entre el vehículo despachado con la carga, su propietario y su conductor con la llamada en garantía.

LA SENTENCIA APELADA

El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dictó sentencia en el asunto de la referencia (fls. 439 a 454, C.1B), a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la imputación jurídica por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia se atribuye únicamente a la Policía Nacional, pues ésta, de forma antitécnica y aumentando el riesgo propio de la conducción de vehículos automotores, instaló un retén ocupando de tal manera la vía pública que obligó a quienes transitaban por la misma a ocupar el carril contrario de forma peligrosa.

En efecto, indicó que si el puesto de control no hubiera existido, el tractocamión no hubiera cambiado de rumbo sobre la vía e invadido el carril contrario, con las consecuencias ya conocidas.

Adujo que la curva por la cual transitaba el señor Israel Gutiérrez Valencia era cerrada, de 90 grados, sin que le permitiera observar que por el carril que normativamente le correspondía se desplazaba un tractocamión en sentido contrario, impactando de frente contra éste sin poder tener ninguna reacción para evitarlo.

Refirió que conforme al Manual de Patrullaje Urbano de la Policía Nacional (Resolución nº 0911 de 2010), los puestos de control deben ubicarse sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatones.

Hizo alusión a lo manifestado por los testigos que rindieron declaración en el proceso, los cuales dieron cuenta de lo siguiente: que para adelantar el retén policial los vehículos debían invadir el carril contrario; que los policiales no hicieron uso de señales de pare o siga para controlar los automotores que transitaban por el sector; que ningún policía dio vía o detuvo al tractocamión accidentado; que no había personal señalizando en ambos extremos del puesto de control; que el retén estaba mal ubicado por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Señaló que el daño no es imputable al señor Juan Augusto Ríos Osorio ni a COLDETRANS, dado que no se demostró que éstos incumplieran reglamentos o regulaciones en relación con el sistema vial y que hubiesen incidido jurídicamente en la materialización del accidente de tránsito.

Adujo que la policía de carreteras tenía el deber de efectuar la señalización sobre peligro y/o precaución, de conformidad con la obligación impuesta de asegurar la seguridad de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara.

Acotó que aunque el tractocamión fue quien materialmente causó el accidente, lo cierto es que el impacto se produjo cuando aquél estaba regresando a su carril reglamentario, luego de que fuera obligado a asumir esta acción por un retén de la policía de carreteras que no previó las consecuencias de su ubicación.

Indicó que no se demostró en el expediente que el conductor de la motocicleta hubiese violado reglamentos o normas de seguridad para la conducción de este tipo de vehículos, con incidencia factual en la materialización del daño.

A título pues de indemnización, el Juez de primera instancia reconoció perjuicios morales a favor de los demandantes, por haberse acreditado no sólo que el señor Israel Gutiérrez Valencia tenía una unión marital de hecho con la señora Omaira Guerrero Largo, sino que existían vínculos consanguíneos con los demandantes, que permiten inferir que la muerte de la víctima les generó gran tristeza y congoja. La liquidación de tales perjuicios se realizó adoptando los límites señalados en sentencia de unificación del Consejo de Estado.

De otra parte, reconoció perjuicios materiales únicamente a favor de la compañera permanente de la víctima, liquidados sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 25% por prestaciones

sociales, en tanto consideró que no existía prueba certera de que el señor Israel Gutiérrez Valencia devengara \$1'500.000 por su actividad en la Asociación Mineros La Montaña.

Finalmente condenó en costas acudiendo a un criterio objetivo.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada por la Juez *a quo* y actuando dentro del término legal, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fls. 456 a 460, C.1B), de la siguiente manera.

Manifestó que el conductor del tractocamión fue quien invadió el carril contrario por el que se desplazaba la víctima. Añadió que si bien sobre la vía se encontraba un puesto de control, éste no puede considerarse responsable de la infracción de tránsito que cometiera el referido conductor, pues actuó de forma imprudente al adelantar en una vía que no le era permitido y además esquivó el retén desobedeciendo y haciendo caso omiso a la señal de precaución y de cierre que representaba el cono.

Indicó que la Policía Nacional no obligó al conductor del tractocamión a invadir el carril contrario; quien además tenía conocimiento que al estar en una vía con señal de doble línea, le era prohibido adelantar por el carril contrario, y máxime estando a tan pocos metros de una curva y movilizándose en un vehículo de gran tamaño.

Expuso que la colisión era un acto más predecible para el conductor del tractocamión, por lo que le era exigible a éste que detuviera su marcha y esperara que los vehículos que estaban siendo registrados continuaran o que un miembro de la Policía Nacional lo autorizara a seguir.

Cuestionó que sólo se responsabilice a la Policía Nacional de lo ocurrido, desconociendo que fue el conductor del tractocamión el que infringió la norma nacional de tránsito.

Solicitó entonces revocar la providencia recurrida, ya que la causa directa del accidente de tránsito no fue la ubicación del puesto de control sino la imprudencia del conductor del tractocamión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Parte demandante (fls. 10 a 18, C.5)

Inicialmente hizo referencia a las razones por las cuales considera que se encuentran acreditados los perjuicios morales y materiales reclamados en la demanda.

A continuación, sostuvo que del material probatorio allegado se desprende la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, pues ubicó un retén sin señalización alguna, cerca de una curva, lo que ocasionó que el señor Israel Gutiérrez Valencia fuera atropellado por el tractocamión.

Expuso que el propietario del vehículo y la empresa usufructuaria del mismo son igualmente responsables.

Allianz Seguros S.A. (fl. 20, C.5)

Manifestó que toda la responsabilidad recae en la Policía Nacional, por cuanto no tomó las más elementales y mínimas precauciones para la instalación del retén.

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 22 a 25, C.5)

Reiteró, en esencia, los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Guardaron silencio.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Reparto. Para conocer del recurso de alzada, el expediente fue repartido a este Tribunal el 6 de marzo de 2020, y allegado el 15 de julio del mismo año al Despacho del Magistrado Ponente de esta providencia (fl. 1, C.5).

Admisión y alegatos. Por auto del 15 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado para alegatos en caso de no existir solicitud de pruebas por practicar en segunda instancia (fl. 1, C.5). Dentro del término otorgado, la parte demandante, Allianz Seguros S.A. y la Policía

Nacional alegaron de conclusión (fls. 10 a 18, 20 y 22 a 25, ibidem). COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

Paso a Despacho para sentencia. El 9 de septiembre de 2020 el proceso ingresó a Despacho para sentencia (fl. 26, C.5), la que se dicta en seguida, atendiendo el orden de ingreso del respectivo proceso para tales efectos.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, en los estrictos términos en que aquél fue formulado.

Problema jurídico

La cuestión que debe resolverse en el *sub examine* se centra en resolver las siguientes preguntas:

- *¿La muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia le es jurídicamente imputable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y/o al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS S.A.?*
- *En caso de que se configure responsabilidad por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A., ¿Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. están obligadas a reembolsar el valor de una eventual condena?*

Para despejar los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes aspectos: **i)** elementos generales de responsabilidad del Estado; **ii)** régimen de responsabilidad aplicable; **iii)** hechos probados; **iv)** acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad en el caso concreto; **v)** sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios; y **vi)** responsabilidad de los llamados en garantía.

1. Elementos generales de la responsabilidad

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la

omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al actual artículo 140 del CPACA que consagra el medio de control de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La responsabilidad del Estado puede surgir en virtud de diversos títulos de imputación tales como la falla del servicio, el daño especial, o la denominada teoría del riesgo, los cuales obedecen a diversas situaciones en las que el Estado, a través de sus autoridades, está llamado a responder por la producción de un daño antijurídico.

Atendiendo el título de imputación aplicable en cada caso, se constatará la existencia de los siguientes elementos que estructuran la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones; aspectos éstos que conviene dilucidar a manera de exordio.

La jurisprudencia y la doctrina, a partir de las sucesivas reformas constitucionales y legales que se han dado en Colombia, han señalado que para deducir la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones, deben reunirse tres condiciones:

Como primer elemento de la responsabilidad pública, el *daño o perjuicio* por el cual se reclama la indemnización debe tener la característica de ser resarcible, indemnizable, teniendo en cuenta que no todos lo son; algunos perjuicios no son resarcibles por parte de quien los ocasiona, como sucede cuando la persona que los padece está obligada a asumir las consecuencias en virtud del mandato legal o constitucional, impuesto en función del interés general, cuando éste prima sobre el interés individual.

El *hecho de la administración* se concreta en una actuación u omisión de los agentes del Estado, cuando obran u omiten obrar en ejercicio de sus funciones públicas, es decir, en representación de la administración, salvo cuando se configura lo que en la doctrina y jurisprudencia se conoce como la *falta personal del agente*, caso en el cual, responde el empleado total o parcialmente por los perjuicios derivados del hecho.

Finalmente entre la acción u omisión y el perjuicio debe mediar una *relación de causalidad*, lo cual impone al actor el deber de demostrar que el perjuicio provino exactamente de las actuaciones u omisiones de la administración, con un nexo de causa a efecto, el que se rompe, como también lo ha dicho la

jurisprudencia, cuando se prueba una causa extraña a la administración en la producción del daño, como la culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

Por regla general, corresponde a la parte demandante la comprobación plena de los hechos de su demanda, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)⁴, es decir, de los tres elementos que permiten deducir la responsabilidad.

2. Régimen de responsabilidad aplicable

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la Administración; ello no obstante la aplicación del aforismo jurídico “*venite ad factum, iura novit curia*” (dame los hechos, el Juez dará el Derecho), que significa que en materia de acciones de reparación directa se permite al Juez de la causa acudir al régimen de responsabilidad que más se ajuste a los hechos que dan origen al proceso, sin que se esté limitado a lo expuesto por el actor o los sujetos procesales⁵.

Las imputaciones jurídicas de la demanda realizadas contra la parte demandada aluden a la omisión en la que supuestamente incurrió la Policía Nacional al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, ocupando parte de uno de los carriles de la vía, provocando que el conductor del tractocamión propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado a COLDETRANS S.A., ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Conforme a las condiciones descritas en la *causa petendi*, considera este Tribunal que el asunto debe definirse con fundamento en el régimen de responsabilidad por falla en el servicio, criterio de imputación que procede frente a supuestos en los cuales se analiza la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó

⁴ En adelante, CGP.

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 14 de agosto de 2008. Radicación número: 47001-23-31-000-1995-03986-01(16413).

cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada⁶.

Debe precisarse que no obstante que en este caso se presentó colisión de dos vehículos que en principio daría lugar a que su estudio se hiciera a través del régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, ya que se trata de una actividad peligrosa, lo cierto es que la atribución del daño a la parte demandada no se hace en desarrollo de la actividad riesgosa como tal, sino de una supuesta falla en la prestación del servicio que generó a su vez el accidente de tránsito en el que murió el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Para establecer entonces la imputabilidad al Estado y por atracción a particulares, se requiere demostrar, además del daño, la falla en el servicio y el nexo causal entre ambos.

3. Hechos acreditados

En aras de establecer si los elementos del régimen de responsabilidad aplicable en este asunto se encuentran configurados, procede esta Sala de Decisión a reseñar preliminarmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que dieron origen a esta demanda y que se encuentran acreditados en el expediente.

a) Identificación de la vía y características de la misma

Determinar con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los hechos que se imputan a la parte demandada exige establecer primeramente y con certeza la vía sobre la cual ocurrió el accidente que dio origen a esta demanda.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente⁷, se encuentra demostrado que la vía en la que sucedieron los hechos por los cuales se demanda, corresponde a la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950 metros, en el sector conocido como La Sierra, jurisdicción del Municipio de Riosucio.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 16 de agosto de 2007. Radicado número: 41001-23-31-000-1993-07585-01(30114).

⁷ Al respecto, se advierten las siguientes:

- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4).
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito n° C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3– del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).
- Libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1).
- Poligrama n° 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1).

Atendiendo lo indicado en la prueba documental⁸ y testimonial⁹ recaudada en el proceso, se acreditó que la vía referida era de una calzada, con dos carriles, doble sentido vial, pendiente, curva y luego recta, en asfalto en buen estado, en condición seca, sin iluminación artificial, con buena iluminación y sin demarcación horizontal que permitiera adelantar vehículos.

b) Instalación de un puesto de control en la vía por parte de la policía de carreteras

De conformidad con el Oficio nº 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), expedido por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los conceptos de área de prevención, puesto de control y retén difieren en lo siguiente:

***Área de prevención:** Punto sobre la malla vial nacional donde se ubica una patrulla de la policía de tránsito y transporte encargada de transmitir a la ciudadanía recomendaciones y mensajes educativos, buscando influir positivamente sobre la conducta de los usuarios de las vías, a través de los programas y campañas desarrollados por la Dirección de Tránsito y Transportes (instructivo 073 PLANE-DITRA del 25 de Junio del 2008 “CONCEPTUALIZACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE CARRETERAS”, teniendo en cuenta el mismo como un documento doctrinal que unifica los criterios de las actividades del servicio policial de Tránsito y Transporte, en el marco de la aplicación de los procesos misionales).*

***Puesto de control:** Actividad del servicio de Policía que tiene como objetivo realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delincuenciales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.*

***Retén:** De acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de tránsito (Ley 769 de 2002) en su artículo 2, define: “Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”.*

⁸ De las características de la vía dieron cuenta los siguientes documentos:

- Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).

⁹ Sobre el particular, pueden consultarse las declaraciones de los señores Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem) y Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Aun cuando en la investigación penal adelantada se observa que la Policía Nacional discutió que no había establecido un puesto de control sino un área de prevención, lo cierto es que en el marco de la citada investigación se determinó que efectivamente la entidad accionada instaló un puesto de control en la vía donde acaecieron los hechos que más adelante se precisarán.

En efecto, según consta en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), a las 7:30 a.m. del 12 de junio de 2013, los policiales Orozco Flórez, Rendón Rincón, González López, Fernández Rivera, Acevedo Pulgarín y Mejía Zuluaga, salieron con todos los elementos para el servicio, con destino al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control.

La citada anotación guarda coherencia con la observación hecha en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), referente a que cerca del lugar de los hechos se encontraba un puesto de control de la Policía Nacional SETRA – DECAL UNIR 21.2 (fl. 35, C.4).

Adicional a lo anterior, con base en lo narrado por los uniformados que estuvieron en la zona para el día de los hechos, se concluye que las actividades que estaban efectuando correspondían a las de registro y control, esto es, a un puesto de control y no a un área de prevención.

c) Requisitos mínimos y procedimiento para la instalación de un puesto de control en una vía

Conforme al Oficio nº 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1º de octubre de 2013 (fl. 135, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, el cual fue anexado con dicha comunicación (fls. 136 a 139, C.4) y del que se extrae lo siguiente:

- El objetivo del puesto de control es realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delictuales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.
- El puesto de control debe tener previa orden de servicios; no puede exceder de 2 horas en un mismo lugar; debe estar conformado como mínimo por 8 unidades en la zona urbana y 10 unidades en la zona

rural; y tiene que ser ubicado en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.

- El puesto de control debe establecerse teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo al personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio.
- Debe informarse al CAD o radio operador el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.
- El ingreso de los vehículos al puesto de control debe hacerse de forma selectiva, dando la señal de pare, y teniendo en cuenta la cantidad que pueden atender los policías integrantes del puesto de control.
- Debe haber un policial asignado al manejo de la señal de pare o siga, otros policiales encargados de la verificación de personas y registro a vehículos, y un policial más para diligenciar las planillas.
- En el esquema de instalación de un puesto de control se observa que a 50 o 100 metros de la entrada al puesto de control debe haber policiales a cargo de la seguridad y de la apertura, así como otros encargados de la requisa y del tránsito.

Tal como se indicó en el Oficio n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los requisitos mínimos del puesto de control, son:

Personal mínimo: 0-1-7 Policiales.

Como mínimo el puesto de control estará conformado por ocho (08) unidades en la zona urbana o cabecera municipal y diez (10) unidades en la zona rural, debe ser rotativo (dos horas por lugar), ubicándolo en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.

- a) ***Seguridad:*** Unidades encargadas de la seguridad se ubican en los extremos del puesto de control y velan por la integridad física del personal que conforma el puesto de control, permaneciendo alerta para evitar ataques delincuenciales externos como hostigamientos.
- b) ***Persecución e Inmovilización:*** El conductor de la patrulla permanece al lado del vehículo para reaccionar ante una eventual fuga y manipula la tabla de seguridad con el fin de detener el vehículo en fuga.
- c) ***Control de Tránsito:*** El conductor de la motocicleta (Agente de Tránsito), aplica la normatividad y reacciona ante fuga de vehículo.

- d) **Regulación de Tránsito y Selección de Vehículos:** El palettero se ubica al inicio del puesto de control y hace las indicaciones al vehículo escogido para ingresar al puesto de control.
- e) **Inspección y Registro:** Unidades encargadas de requisar personas y registrar vehículos. Para tal fin deben iniciar con un saludo respetuoso, identificarse ante los ocupantes del vehículo, explicar la finalidad del servicio y solicitarles que se bajen del mismo para realizarles la requisa.
- f) **Seguridad Requisa y Registro:** Unidad encargada de la seguridad de quienes registran y requisan.
- g) **Control y Supervisión:** El señor Comandante del puesto de control se encarga de supervisar al personal en sus labores y de reportar a la central de radio las placas y documentos de las personas y vehículos objeto de la requisa y registros, para verificar antecedentes.

Ubicación: Los puestos de control deben ser ubicados en sitios que brinden seguridad y tranquilidad al personal y usuarios de la red vial nacional.

- d) Desarrollo del puesto de control instalado en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 32

Como se indicó anteriormente, el 12 de junio de 2013, seis (6) uniformados de la Policía Nacional se dirigieron al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control en la zona. De lo anterior se dejó constancia únicamente en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), esto es, no se expidió previamente orden de servicios para realizar tal actividad.

Pese a lo establecido en el procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta que se trataba de una zona rural, las unidades policiales asignadas no fueron las necesarias, esto es, 10 policías.

En relación con la ubicación del puesto de control, sólo consta en el expediente que el mismo se instaló en una recta, seguida de una curva pronunciada que se hallaba más o menos a media cuadra¹⁰ o a 50 metros¹¹.

Quedó demostrado igualmente en el proceso que el citado puesto de control se ubicó en parte del carril que conducía de Anserma a Riosucio, para lo cual se usaron como señales únicamente dos conos a lado y lado.

¹⁰ Tal como lo informó en su declaración el policía Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem).

¹¹ Según se consignó en el acápite de observaciones del Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), por referencia que le hicieron los testigos de los hechos al policía Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem).

Ninguno de los policías que integraban el puesto de control fue asignado a manejar señal de pare o siga, y tampoco a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieron en el sector.

e) Accidente de tránsito

Encontrándose en ejecución el puesto de control instalado por la Policía Nacional en los términos descritos anteriormente, el señor Julián González Valencia transitaba por la vía en dirección Anserma – Riosucio, conduciendo el tractocamión de placas TTG200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado con administración y guarda en la actividad a COLDETRANS S.A.

Se acreditó en el expediente que siendo aproximadamente las 10:30 a.m., esto es, excediendo el límite de las dos (2) horas permitidas para efectuar puesto de control en una zona, los policías que lo conformaban estaban registrando cuatro (4) vehículos al mismo tiempo: una cama baja o niñera que transportaba una retroexcavadora, dos vehículos que la escoltaban y un camión; superando la capacidad para realizar los registros, teniendo en cuenta el número de uniformados que estaban presentes.

En tanto no se le solicitó detenerse en el puesto de control por parte de la policía de carreteras, y dado que, como se indicó anteriormente, ningún policía fue designado para manejar señal de pare o siga y tampoco para conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que durara la retención en el puesto de control, el conductor del tractocamión continuó su ruta, para lo cual procedió a invadir el carril contrario, con el fin de superar el puesto de control donde estaban los cuatro (4) vehículos mencionados.

Realizando dicha maniobra, antes de llegar a la curva que se encontraba próxima, teniendo el cabezote del tractocamión casi de nuevo en su carril pero el tráiler del mismo todavía en el carril contrario, el conductor de dicho vehículo se encontró de frente con una motocicleta conducida por el señor Israel Gutiérrez Valencia, quien no tuvo oportunidad alguna de reaccionar a la colisión y falleció instantáneamente en el lugar.

De la manera en la cual se produjo el accidente de tránsito mencionado, dan cuenta los siguientes elementos probatorios:

- En el libro de minuta de guardia y registro de novedades se consignó a las 10:30 a.m. que finalizando el área de prevención instalada en el sector del kilómetro 31 + 800 metros de la vía Cauyá – La Pintada, un vehículo tipo tractocamión había colisionado con un motociclista, el

cual perdió la vida instantáneamente (fl. 38, C.4).

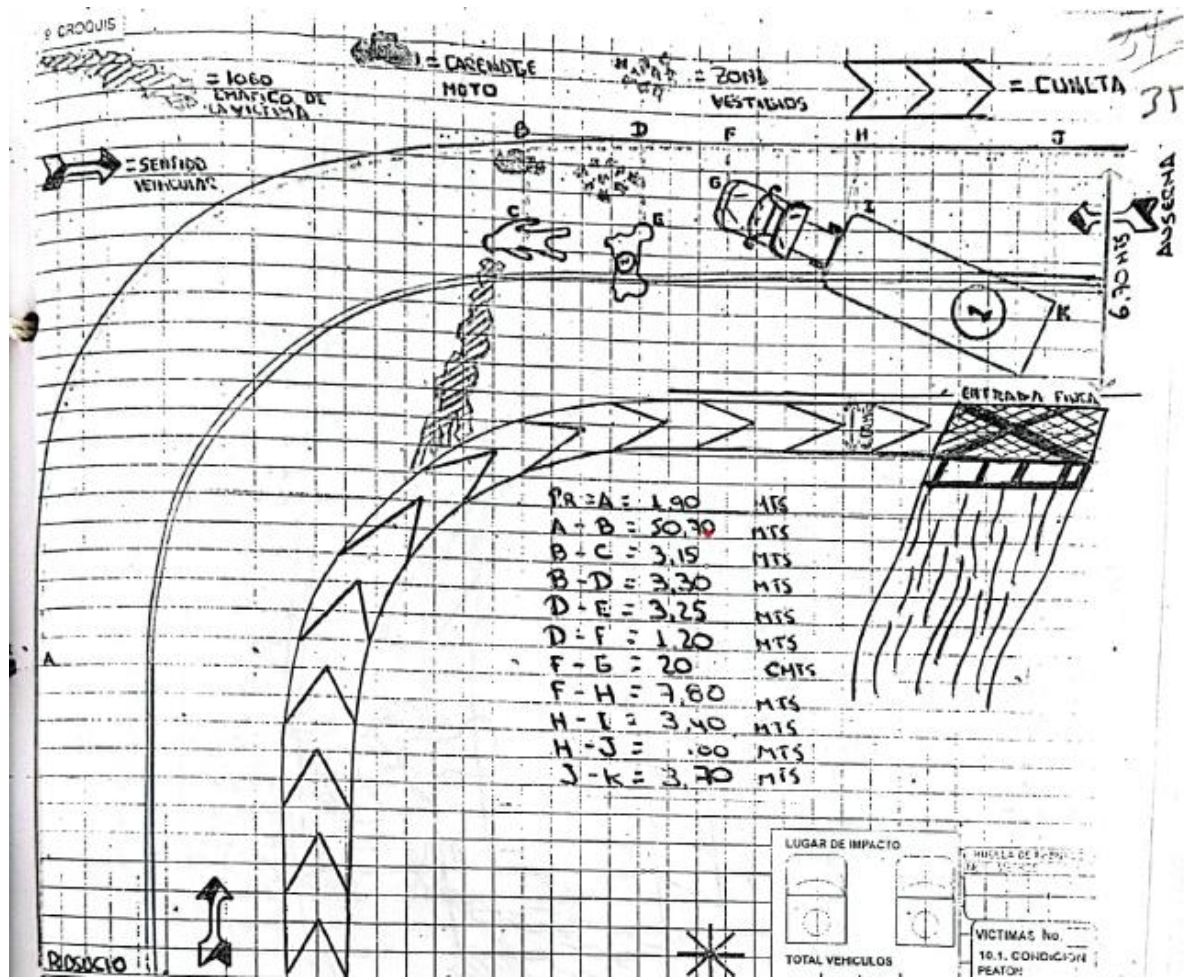
- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4), diligenciada por el patrullero Jhon Jaime Orozco Flórez, quien informó que: *“nos encontrabamos (sic) realizando area (sic) de prevención, en esos momentos senti (sic) un golpe al observar vimos un tractocamion (sic) color naranja el cual colisiono (sic) con un motociclista causandole (sic) la muerte instantaneamente (sic)”*.
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón (fls. 34 a 36, C.4).

Además de señalar las condiciones y características de la vía, ya indicadas en esta providencia, refirió que los vehículos implicados en la colisión fueron un tractocamión de placas TTG200 y una motocicleta de placas XFG83A, conducidos por el señor Julián González Valencia y el señor Israel Gutiérrez Valencia.

En observaciones, consignó que: *“habia (sic) un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL SETRA – DECAL UNIR 21.2”* (fl. 35, C.4).

No estableció las hipótesis del accidente de tránsito.

El croquis levantado por el policía de tránsito fue el siguiente:



- Informe Ejecutivo -FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4), rendido por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien respecto del accidente de tránsito, narró lo siguiente: “Siendo las 10:30 horas del día 12-06-2013 fuimos informados por el señor subintendente JHON JAIME OROZCO FLÓREZ vía celular, sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vereda la cierra (sic), ubicado en la vía que de Anserma conduce a Riosucio en el km 31+950 vereda la cierra (sic), inmediatamente me dirigí a dicho lugar para verificar la información, y fue entonces cuando llegué al Km. 31 +950 metros de la vía Cauya (sic) – La Pintada, en donde encontré una motocicleta estacionada al costado de la vía pregunte (sic) a las personas del sector quienes me confirmaron que esa motocicleta en la mitad de la vía la cual estaba en el piso, al lado había una persona sin vida y al frente un vehículo tracto camión el cual había colisionado con la motocicleta Se procedió a realizar los actos urgentes, (...) posteriormente le solicite (sic) al médico de turno la respectiva prueba de beodez, la cual arrojó resultado NEGATIVO, (...)” (fl. 3, C.4).
- Poligrama nº 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1), con el cual el Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Caldas informó al CAD-SETRA-DECAL-DITRA CIEVS – E-100 DECAL sobre el accidente de tránsito ocurrido a la 1:30 p.m. (sic) en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 +

950 metros, en el sector La Sierra del Municipio de Riosucio. En dicho documento se indicó quién conoció del caso y se formularon como hipótesis del accidente las de posible exceso de velocidad por parte de la moto, e invasión de carril por parte del tractocamión.

- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4), diligenciada por el servidor de policía judicial Andrés Javier Hurtado Marín, en relación con el cuerpo del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Indicó que al llegar al lugar evidenció la contaminación de los hechos, ya que el cuerpo sin vida del señor Israel Gutiérrez Valencia se encontraba cubierto con una manta blanca.

Anotó que el cabezote del tractocamión implicado en los hechos se encontraba en diagonal entrando en su carril y que el tráiler del mismo estaba en el carril de contravía.

Señaló que la moto estaba a lo ancho de la vía sobre la mitad de los dos carriles, y que el carenaje de la misma estaba suelto casi sobre la línea blanca del carril hacia Riosucio.

Consignó que entre acordonamiento había de a dos conos a lado y lado.

- Álbum fotográfico del accidente de tránsito, realizado por funcionario de policía judicial (fls. 25 a 30, C.4). Se indicó en el mismo que el tractocamión iba en sentido vial Quinchía – Riosucio, en contravía, entrando a una curva, quedando su cabezote con dirección a su carril de sentido vial; y que la motocicleta al parecer iba de Riosucio a Quinchía, saliendo de la misma curva.
- Informe Investigador de Campo –FPJ-11– del 3 de julio de 2013 (fls. 74 y 75, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas a los subintendentes Adrián Rendón Rincón y Carlos González López, por cuanto el primero realizó bosquejo de planimetría y topográfico, y el segundo se encontraba como segundo al mando en el área de registro y control.

Se indicó que en el lugar de los hechos se encontraba personal de la seccional de tránsito y transporte de Caldas, realizando un área de registro y control; que dicha área no fue dibujada en el bosquejo topográfico, habida cuenta que cuando llegó el funcionario encargado de ello, no había conos que referenciaran la existencia del área de

prevención; que los conos que utilizaron para el área de registro y control se usaron luego para acordonar y proteger la escena.

- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 9 de octubre de 2013 (fls. 110 a 115, C.4), en el cual se mencionó el resultado de la entrevista al señor Ángel Alberto Pulgarín Gil, testigo de los hechos, indicando que aquél era conductor de camión, que el día del accidente se encontraba en el sitio, ya que los uniformados que estaban haciendo el retén le hicieron señal de pare, por lo que se encontraba a un costado de la vía y observó un tractocamión que estaba adelantando y cuando se disponía a ingresar a su carril se sintió un golpe y luego el vehículo se detuvo, posterior a lo cual advirtió una persona tendida sobre la vía en frente del camión. Se refirió que el entrevistado manifestó que el accidente se pudo producir porque había varios vehículos detenidos y la mula tuvo que avanzar casi hasta la curva para ingresar de nuevo a su carril, mientras que la moto había podido esquivar al camión, ya que había espacio suficiente para cruzar por un lado de éste.
- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 20 de enero de 2014 (fls. 145 a 149, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas telefónicamente a los testigos del señor Julián González Valencia, esto es, a los señores Ricardo Madrid Galeano, Gustavo Cendales Vargas y Manuel Darío Posada Sánchez.

En relación con la primera entrevista, se indicó que el señor Ricardo Madrid Galeano manifestó que el día de los hechos se desplazaba como escolta de una cama baja y que fueron requeridos por un retén de la policía de carreteras. Se señaló que el entrevistado acotó que estando en el retén, fue parado igualmente un camión que se desplazaba por el lugar, y que luego apareció una tractomula que se vio obligada a tomar el carril izquierdo y casi sobre la curva, ya que el espacio en que se encontraba ubicado el puesto de control era muy corto. Se anotó que el entrevistado indicó que cuando la tractomula estaba retomando el carril derecho, apareció una motocicleta a alta velocidad, que impactó de frente con el tractocamión y murió de forma instantánea. Se consignó que el entrevistado refirió que sólo había cuatro (4) agentes de policía adelantando el puesto de control, lo cual era insuficiente, y que al ocurrir el accidente, éstos retiraron los conos que tenían apostados en la mitad de la vía para cerrarla en los extremos mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Por su parte, se anotó que el señor Gustavo Cendales Vargas manifestó que igualmente fue requerido por la policía de carreteras para un retén

a un lado de la vía, y que luego se hizo estacionar también a un camión más adelante de él y de su esquema de trabajo. Refirió que apareció una tractomula que bajó la velocidad y por lo estrecho de la vía se vio obligada a tomar el carril izquierdo para adelantar los carros estacionados. Se señaló que el entrevistado añadió que como uno de los conos de señalización estaba ubicado casi en el extremo de la curva, cuando la tractomula retomaba el carril derecho, apareció una motocicleta que transitaba en sentido contrario y por la velocidad que llevaba no alcanzó a frenar e impactó de frente con el camión, falleciendo en el lugar. Se indicó que el entrevistado refirió que en el retén sólo había cuatro (4) policías, que ninguno de ellos estaba controlando el tráfico de vehículos, y que luego del accidente, aquellos retiraron los conos de señalización del centro de la vía para cerrar el paso mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Respecto del señor Manuel Darío Posada Sánchez, se consignó que éste manifestó que ese día iba para Medellín y antes de llegar a Riosucio se encontró un puesto de control de la policía de carreteras, la cual lo hizo estacionar a un costado de la vía. Se indicó que el entrevistado afirmó que estando allí apareció un camión al que también hicieron estacionar delante de la cama baja en la que él se desplazaba; que luego apareció una tractomula que viajaba en el mismo sentido y que por la estrechez de la carretera, tuvo que salir de su carril y tomar el izquierdo para poder sobrepasar los vehículos que estaban estacionados. Se consignó que el entrevistado sostuvo que como el último cono de señalización estaba ubicado casi terminando en tramo recto, cuando la tractomula iba a retomar de nuevo su carril derecho, apareció una moto que subía muy rápido y no alcanzó a detenerse o maniobrar e impactó de frente con el camión. Se precisó que el entrevistado adujo que en el retén sólo había cuatro (4) policías, y que el tramo donde se ubicó era muy corto.

- Testimonio del Intendente de la Policía Nacional, señor Jhon Jaime Orozco Flórez¹², del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
 - El día de los hechos se encontraba desarrollando la labor de registro y control.
 - No recuerda cuántos policías se encontraban en el puesto de control, y aunque sólo tiene presente a un compañero, indicó que había más pero no sabe precisar cuántos.
 - Los policiales estaban dentro del área de registro y control, no estaban arriba o más abajo del puesto de control.

¹² Minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem.

- No utilizaron paletas para el pare y siga de los vehículos.
 - Tenían señalizado con conos a cada extremo del área de registro y control. No recuerda cuántos conos utilizó al principio y fin del puesto de control.
 - No tenían policial al inicio y al final del puesto de control, dando vía a los conductores o indicándoles que transitaran con precaución. Sin embargo, consideró procedente que hubiera un policial al inicio y al final dando vía a los conductores.
 - Momentos antes del accidente se hizo señal de pare a una cama baja que llevaba una retroexcavadora, para su correspondiente registro.
 - Efectuando la función de registro y control, observó que, como había otro vehículo que se estaba registrando, un tractocamión al cual no se le detuvo para registro, se fue en contravía por todo el puesto de control, en sentido Anserma – Riosucio. Cuando ya iba a finalizar el puesto de control, donde estaba el último cono de la señalización, esto es, cuando iba a entrar a su propio carril, ya estaba la curva y apareció un motociclista con el cual impactó, resultando muerto este último.
 - Para seguir por la vía, el tractocamión tenía que invadir el otro carril.
 - El camión que tenían dentro del área de registro no permitía que el tractocamión pudiera pasar por el carril que le correspondía, por lo que éste se metió en contravía y pasó todo el puesto de control en contravía.
 - El tractocamión violó una norma de tránsito al invadir el carril.
 - No sabe a qué velocidad iba el motociclista.
 - Con el puesto de control estaban ocupando parte del carril bajando, y como el tractocamión no cabía, debía esperar a que de pronto uno de los policiales le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha.
 - Ningún policía le dio vía al tractocamión y tampoco lo detuvo.
 - El accidente se produjo terminando la recta e iniciando la curva.
 - En la curva no se alcanzaba a ver si venía otro vehículo en sentido contrario.
- Testimonio del policía de carreteras, señor Adrián Esteban Rendón Rincón¹³, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Realizó el informe del accidente de tránsito.
 - Cuando llegó al lugar de los hechos, encontró carros a lado y lado

¹³ Minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem.

de la vía y estaba cerrado el acordonamiento con conos. Observó el tractocamión atravesado en la vía, la persona fallecida y la motocicleta.

- El tractocamión quedó en sentido Anserma – Riosucio. El cabezote quedó en el carril que le correspondía pero la parte del tráiler estaba en sentido contrario, invadiendo el carril de la motocicleta.
 - El accidente ocurrió entrando a una curva, en la que luego llega a una recta, y en la que normalmente montan el puesto de control.
 - En la curva, el tractocamión se estaba metiendo a su carril, y venía en sentido contrario.
 - El motociclista impactó contra el cabezote del tractocamión. No tiene presente en qué parte del cabezote se dio el impacto.
 - Cuando llegó al sitio no vio el puesto de control y puso en observaciones que según le informaron los testigos que estaban allí, existía un puesto de control aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
 - El puesto de control que le indicaron que había a 50 metros estaba en una recta.
 - No hizo hipótesis del accidente porque sus superiores (Seccional de Tránsito de Caldas) le dijeron que no la realizara, ya que el asunto tenía que ser investigado.
 - La orden de que no se dejaran hipótesis fue verbal, pero lo más seguro es que haya quedado consignada en acta.
 - El motociclista no tenía buena visibilidad en la curva. Lo más probable es que si un vehículo venía en contravía, hubiera colisión.
 - No identificó el punto exacto del impacto. No quedó precisado en el informe de accidente de tránsito.
 - Había dos conos pero ya por fuera, como atajando los vehículos para que no se metieran a la escena donde sucedieron los hechos.
- Testimonio del conductor del tractocamión implicado en el accidente, señor Julián González Valencia¹⁴, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Entre las 9 y 10 de la mañana, en sentido vial Anserma – Riosucio, iba en una tractomula con una carga de maíz desde Buenaventura para Supía. Llegando a un sector conocido como La Sierra, cerca de Riosucio, se encontró con un retén de la policía de carreteras, que a un lado tenía orillada una cama baja con una retroexcavadora encima y sus dos acompañantes (dos carros particulares).
 - El retén estaba antes de la curva pero muy pegado a ésta. Estaba a

¹⁴ Octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A.

unos 15 metros antes de la curva.

- Se dio cuenta que había un retén porque vio conos. No tenían paletas para dar vía de un lado a otro. Había 10 conos, 10 delineadores.
- Vio de 3 a 4 agentes de policía en ese retén, pero no recuerda bien porque han pasado varios años y además por el susto que pasó por lo sucedido.
- Cuando llegó a la parte donde estaba orillada la cama baja, había otro camión delante de él, y la policía le hizo señas de que parara, y el camión paró.
- Había 4 vehículos en el retén: la cama baja, los dos particulares que la acompañaban y el camión que estaba antes de él y que lo detuvieron.
- Teniendo en cuenta que quedó en la vía, ya que no le hicieron señal de pare a él sino sólo al camión que estaba adelante, el conductor del tractocamión decidió proseguir, por lo que pasó por un lado del retén, para lo cual hizo la maniobra de invadir el carril contrario. En el momento no consideró que fuera mejor esperar, porque la policía no lo había parado y entonces siguió.
- Ya pasando los últimos conos que estaban casi llegando a la curva, teniendo prácticamente metido el cabezote a su derecha, esto es, a su carril, el conductor sintió el golpe de la moto que apareció rápido y se pegó con la parte frontal derecha de la mula, en el bumper, en todo el capó, casi hacia el centro.
- No vio venir la motocicleta, sólo sintió el impacto.
- Se bajó a mirar qué le había pasado al motociclista y ya no había nada que hacer.
- Desde que advirtió la presencia del retén hasta que hubo el impacto, cree que había unos 10 metros.
- El retén no estaba bien ubicado porque no había sido instalado en toda la recta y no tenía paleteros para dar vía a lado y lado. Debió haber tenido visibilidad desde ambos lados.
- En dicha curva no se puede adelantar porque los policías estaban muy precisos con el retén pegado a la curva.
- Es una curva ciega, por lo que el conductor de la motocicleta no podía advertir que había un retén más adelante. Tampoco podía ver que el tractocamión venía.
- Hay testigos que dan cuenta de que la culpa del accidente no fue del conductor del tractocamión sino del retén mal ubicado, que estaba montado prácticamente cerca de la curva.

4. Acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad por falla en el servicio en el caso concreto

Los presupuestos que permiten endilgar responsabilidad bajo el título de imputación por falla en el servicio se concretan en el daño antijurídico sufrido por el interesado, la conducta anormal de la Administración, y finalmente, una relación de causalidad entre esta última y aquél, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio; aspectos cuya configuración en el *sub examine* se analizan a continuación.

4.1 El daño

En relación con la noción de daño, como primer requisito del proceso de determinación de la responsabilidad que le pueda caber a la entidad enjuiciada, la Sala observa que ese concepto se distingue del referido al perjuicio, entendido el primero como el hecho o situación objetiva verificable con los sentidos, que lesiona de manera definitiva un derecho o interés lícito o altera su goce pacífico; el segundo corresponde al menoscabo patrimonial subjetivo sufrido por la víctima del daño y como consecuencia directa de este, que comporta su faz indemnizable¹⁵.

Esa misma postura ha sido adoptada por el Consejo de Estado al señalar que *“(...) es necesario reiterar que el daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad, y una vez verificada su configuración, se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada, como quiera que aquél es requisito indispensable de la obligación de reparar. En ese orden de ideas, el daño, en su aspecto objetivo, debe ser entendido como la lesión de un derecho, interés o atributo de la persona, sin que exista la necesidad de relacionarlo con la actividad que lo causó, pues es una entidad fenoménica u ontológica que lejos de estar relacionado con el deber ser de las cosas, es un dato objetivo apreciable por los sentidos y, por consiguiente, una entidad natural. De allí que, la mera ocurrencia del daño y su nota de antijuricidad es el presupuesto indispensable que genera el deber de reparar. (...) La labor del juez, en principio, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, como violación a un interés legítimo, esto es, como fenómeno, como dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia, luego, aquél asume una posición axial frente al mismo, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado éste, comprobar la posibilidad de imputación o no, a la entidad demandada”*¹⁶.

¹⁵ Antaño la Corte Suprema de Justicia afirmó que *“(...) el daño, considerado en sí mismo, es la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su patrimonio, al tiempo que el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó”*. Sala de Negocios Generales, 13 de diciembre de 1943, M.P. Dr. Cardozo Gaitán.

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Exp. 20001-23-31-000-1998-03813-

Es preciso recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, no basta la demostración de la ocurrencia del daño puro y simple para exigir del Estado la obligación de repararlo, sino que se requiere que el mismo sea calificado como antijurídico¹⁷.

La antijuridicidad del daño representa, entonces, la ausencia del deber jurídico de soportarlo por parte de quien lo sufre. Ahora, el daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo se torna imprescindible que se acrediten los aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama, a saber: **i)** debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, como se indicó; **ii)** que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; **iii)** que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, de manera que no puede limitarse a una mera conjetura o alea.

En el caso que convoca la atención del Tribunal, según lo expuesto en la demanda y de conformidad con el material probatorio aportado al proceso, el daño alegado por la parte actora se concreta en el lamentable fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, en las condiciones y de la manera referida en el acápite correspondiente de los hechos probados.

El citado daño consta además en la siguiente prueba documental, corroborada por la prueba testimonial recaudada¹⁸:

- Informe Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013 (fls. 102 a 109, C.4), en el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el señor

01(18451). Ver también sentencia del 19 de octubre de 2011, de la misma Corporación y Sección, con ponencia de la Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

¹⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 05001-23-25-000-1992-3233-01(13233).

¹⁸ Sobre el particular, rindieron declaración los señores Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem), Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem), Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Luz Damary Uchima Guevara (noveno audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), José Didier Chiquito Trejos (décimo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Roberto Elías Lema Castro (minuto 00:01 a 17:02 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A) y Nulber Londoño Velasco (minuto 17:10 a 27:33 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Israel Gutiérrez Valencia sufrió “(...) un TRAUMA CRANEO-ENCEFALICO (sic) SEVERO que gener[ó] FRACTURA DE BASE DE CRANEO (sic), dicho traumatismo genera un CUADRO de HIPERTENSION (sic) ENDO-CRANEANA SEVERA y por consiguiente la muerte en el lugar de los hechos” (fl. 113, ibidem).

- Registro Civil de Defunción expedido por la Registraduría Municipal de Riosucio, en el consta que el 12 de junio de 2013 falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia (fl. 54, C.1).

Así pues, habiéndose constatado la existencia del daño invocado, pasa la Sala a abordar el análisis de la imputación a la parte demandada, en aras de establecer si aquél es atribuible o no a ésta.

4.2 La falla en el servicio

Se recuerda que, como se indicó al momento de señalar el título de imputación con el cual se debe analizar la responsabilidad de la parte demandada en este asunto, los accionantes aducen que la Policía Nacional omitió el reglamento previsto para instalar el puesto de control en la vía en la que ocurrió el accidente, y que al ocupar parte de uno de los carriles de la vía sin las medidas de seguridad requeridas, llevó a que el conductor del tractocamión ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Habida cuenta que la imputación realizada por la parte demandante alude a la omisión en el cumplimiento del procedimiento para la instalación de puestos de control, procede esta Sala de Decisión a establecer primeramente la existencia de un contenido obligacional a cargo de la entidad accionada en esta materia, para luego determinar, con base en las pruebas allegadas, si se configuró la falla invocada.

Tal como se indicó en el acápite de hechos probados, la Policía Nacional indicó que el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012. De lo anterior dan cuenta los Oficios n° 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1° de octubre de 2013 (fl. 135, C.4) y n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscritos por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas.

Al examinar dicho procedimiento, el Tribunal observa que el fundamento

legal del mismo, según se indicó en el respectivo documento, es el siguiente:

- Constitución Política: artículos 2, 29 y 218.
- Ley 909 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
- Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- Ley 872 de 2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios).
- Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).
- Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional).
- Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).
- Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).
- Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
- Ley 1275 de 2008 (sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).
- Ley 1453 de 2011 (que reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio, y dictó otras disposiciones en materia de seguridad).
- Resolución 0911 del 1º de febrero de 2010 (Manual de Patrullaje Urbano).
- Ley 0019 de 2012 (anti trámites).

Revisada cada una de las normas referidas, la Sala advierte que ninguna de ellas prevé de manera expresa y clara, la forma en la cual deben instalarse y ejecutarse puestos de control.

En efecto, el Código Nacional de Tránsito se limitó a definir el término “retén” como el *“Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”* (artículo 2); al paso que estableció facultades o competencias a cargo de la Policía Nacional, específicamente de sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras, para que en su calidad de autoridad de tránsito, vele por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público, con funciones de carácter regulatorio y sancionatorio, y acciones orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías (artículo 7). Adicionalmente, dispuso que la Policía Nacional debe reglamentar el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, así como de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras (parágrafo 2 del artículo 7).

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal adelantó la búsqueda

normativa y jurisprudencial respecto de los requisitos para instalar puestos de control, hallando que en concepto n° 20091340022421 del 20 de enero de 2009, expedido por el Ministerio de Transporte, se señaló que tal materia estaba regulada en la Resolución 9960 de 1992 (Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional); afirmación ésta que también fue hecha por el Consejo de Estado en providencias relativas al tema¹⁹.

No obstante lo anterior, al examinar la Resolución 9960 de 1992, esta Corporación advierte que la misma no contempló un procedimiento específico para la instalación de puestos de control, pero realizó las siguientes precisiones aplicables a la materia:

- Definió puesto de control como el *“Lugar estratégico donde se cumplen actividades de registro y control en cumplimiento de los planes operativos, y cuyas características principales son la seguridad y movilidad de sus unidades”* (artículo 90).
- Estableció que la policía vial tiene el objeto de vigilar, hacer cumplir las normas y disposiciones que rigen y regulan el tránsito y transporte automotor por las carreteras nacionales; que debe velar por las condiciones de seguridad de los vehículos en circulación, remover los obstáculos en las vías, suministrar información a los usuarios cuando la soliciten, controlar el tránsito de vehículos sin luces o señales que permitan evitar accidentes, auxiliar a los conductores, asumir el control y dirección del tránsito en vías obstruidas y atender los accidentes en carretera (numeral 5 del artículo 116).
- Indicó que uno de los medios con los que cuentan las autoridades de policía, capaces de prevenir la comisión de los delitos y las contravenciones previstas en la ley penal y en los códigos de policía, son los reglamentos, entendidos como una manifestación de voluntad administrativa en forma de regla general escrita, emitida por una autoridad que tenga poder reglamentario (artículo 124).

La Sala observa que la ausencia de una reglamentación general expresa en materia de requisitos para la instalación de puestos de control, en contraste con la facultad que tienen los organismos de tránsito para organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción

¹⁹ Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).

(artículos 2 y 6 del Código Nacional de Tránsito), conduce a esta Sala de Decisión a inferir que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas tenía competencia para establecer a través de manuales internos, las directrices para llevar a cabo las actividades propias de un puesto de control, tal como lo hizo en el procedimiento que obra en el expediente y que se mencionó en el acápite de hechos acreditados precisado en estas consideraciones.

Recuérdese que, según se ha planteado por la doctrina nacional²⁰, la actividad interna, intraorgánica o interorgánica de la Administración origina los denominados actos de administración, tales como instrucciones o circulares, que resultan obligatorios para el nivel interno de la entidad.

En ese sentido, a pesar del vacío normativo que sobre este tema parece existir, este Tribunal no puede pasar por alto que para la época de los hechos que dieron origen a esta demanda, existía la reglamentación interna que se acaba de mencionar, específicamente un manual, que establecía de qué manera debía adelantarse un puesto de control y, en ese sentido, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas debía sujetarse a aquél para el despliegue de sus operativos en carretera.

Esa es la interpretación que también hace el Consejo de Estado en las providencias referidas anteriormente²¹, en la medida en que reconoce que internamente la Policía Nacional y sus Seccionales de Tránsito manejan un manual de procedimiento para instalación de puestos de control, lo que guarda relación con la facultad legal que le asiste a tal entidad de instalar puestos de control para realizar operativos en las vías.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado en el acápite de hechos probados en relación con los requisitos mínimos para la instalación de un puesto de control, esta Sala de Decisión advierte de manera evidente que la Policía Nacional, en efecto, desatendió el procedimiento previsto, en tanto:

²⁰ En efecto, sobre el particular puede consultarse el libro *Los convenios de la Administración: Entre la gestión pública y la actividad contractual* (Bogotá, Editorial Temis, 2020), páginas 108 y 109, en el cual se analiza por su autor (Augusto Ramón Chávez Marín) la naturaleza de los actos originados en la actividad interorgánica.

²¹ Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).

- No expidió previamente orden de servicios para realizar el puesto de control.
- No se asignaron las unidades policiales requeridas para la mencionada actividad y atendiendo la zona rural de la que se trataba y que exigía un mínimo de 10 policías.
- Excedió el límite de dos (2) horas previsto para realizar puesto de control en una misma zona.
- El puesto de control no fue ubicado en un lugar apropiado, en tanto se instaló no sólo cerca de una curva pronunciada, sino además ocupando parte de uno de los carriles sin usar la señalización adecuada, sin contar con policías asignados a manejar la señal de pare o siga, y a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieran en el sector. Lo anterior, con el fin de evitar congestión vehicular, así como riesgo para los conductores o peatones.
- Los vehículos seleccionados para el registro y control no se limitaron a aquellos que pudieran atender dadas las circunstancias antes referidas, esto es, número de policiales a cargo, ubicación del puesto de control y ausencia de señalización correspondiente, sin generar o incrementar riesgos para quienes transitaran por el lugar.
- No se dispusieron policiales a cargo de la seguridad y de la apertura a 50 o 100 metros de la entrada a dicho retén, como se señala en el esquema de cómo debe instalarse un puesto de control.

Tal como ha tenido oportunidad de señalarlo el Consejo de Estado²², “(...) *el servicio policial debe prestarse con estricta aplicación al principio de planeación y, por tanto, los comandantes de la institución se encuentran obligados a planear y distribuir los servicios teniendo en cuenta las características del grupo a su mando, para prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentan contra la seguridad y bienestar de la comunidad, mantener y defender el orden público, garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, con ocasión de la prestación del servicio. (...)*”. Y nótese cómo en el presente asunto la entidad demandada no efectuó los planes de prevención necesarios para minimizar los riesgos derivados del acto propio del servicio que estaba desarrollando.

²² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín. Sentencia del 12 de diciembre de 2019. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445).

Todo lo anterior constituye una evidente falla en el servicio por parte de la Policía Nacional.

En relación con la responsabilidad del vehículo tipo tractocamión que se vio implicado en el accidente, el Tribunal advierte que el conductor del mismo incurrió en infracciones comprobadas al Código Nacional de Tránsito, pues realizó una maniobra de adelantamiento de vehículos no sólo en un tramo de la vía en donde existía línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, sino también cerca de una curva, siendo desfavorable por ello la visibilidad y ofreciendo peligro para quienes transitaran por el carril contrario. Lo anterior, en abierta contradicción con las prohibiciones previstas por el artículo 73 de la Ley 769 de 2002:

ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. *No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:*

(...)

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

En curvas o pendientes.

Cuando la visibilidad sea desfavorable.

(...)

En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.

La anterior prohibición está relacionada con la obligación que les asiste a los conductores de vehículos de transitar por sus respectivos carriles, y de adelantar sólo cuando no entorpezca el tránsito ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. Así se desprende del artículo 60 de la Ley 769 de 2002:

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. *Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.*

(...)

PARÁGRAFO 2o. *Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.*

El artículo 131²³ de la Ley 769 de 2002 contempla expresamente sanciones para el conductor y/o propietario de un automotor que incurra en las infracciones relativas a adelantar a otro vehículo en curva, así como la de conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

Aun cuando esta Corporación no desconoce que las circunstancias en las cuales se instaló el puesto de control por parte de la Policía Nacional incidieron de una u otra manera en la comisión de las infracciones antes referidas, lo cierto es que tampoco puede pasar por alto que el conductor del vehículo obró imprudentemente, pues decidió *motu proprio* continuar su trayecto invadiendo para ello el carril contrario, no sólo sin esperar alguna señal de los uniformados o que los vehículos que habían sido detenidos para registro y control avanzaran, sino también sin cerciorarse que contaba con espacio suficiente para nuevamente devolverse a su carril o que no venía otro vehículo, pese a que, según consta en su declaración, observó que el retén se encontraba muy cerca de la curva.

La existencia del puesto de control, con las escasas señales usadas y que incluso fueron advertidas por el mismo conductor del tractocamión al llegar al sector, exigía de parte de éste que tomara las precauciones del caso,

²³ “**ARTÍCULO 131. MULTAS.** Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

A.1. No transitar por la derecha de la vía.

A.9. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.

(...)

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

D.6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.7. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

realizando las maniobras necesarias para continuar por su ruta sin atentar contra su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.

4.3 Nexo de causalidad

El simple incumplimiento de las obligaciones referidas a cargo de la Policía Nacional y de los particulares accionados, no genera una responsabilidad automática por la ocurrencia de un accidente, pues es necesario establecer si la referida omisión fue la causa del hecho o si se configuró alguna causal que rompiera la imputación.

Para el caso concreto y con fundamento en las razones que se indicaron al momento de analizar la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, este Tribunal considera que el desconocimiento de los requisitos mínimos en la instalación y ejecución de un puesto de control en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, para el 12 de junio de 2013, constituye una causa eficiente en la producción del daño que se dice padecido por los demandantes, o si se quiere, contribuyó e incrementó las posibilidades de configuración del hecho dañino.

En efecto, de no haber existido el mencionado puesto de control de la manera en que se describió en esta providencia, el señor Israel Gutiérrez Valencia hubiera podido transitar por su carril sin la existencia del riesgo de que los vehículos que se desplazaban en sentido contrario pudieran invadir su carril por razón del obstáculo que la misma Policía Nacional generó en la vía.

Ahora, este Tribunal considera que en el deceso del señor Israel Gutiérrez Valencia también influyó como causa eficiente y determinante, la conducta imprudente del conductor del tractocamión, pues aun cuando las condiciones del puesto de control le permitieron invadir finalmente el carril izquierdo, lo cierto es que, contrario a lo manifestado por el Juez *a quo*, aquél no se vio **obligado** por ningún miembro de la Policía Nacional a continuar el trayecto de la manera en que lo hizo. Por lo contrario, fue su propia decisión, violatoria, como se vio, del Código Nacional de Tránsito, la que materializó el riesgo creado en la vía, que provocó la muerte del motociclista.

Atendiendo lo expuesto, la Sala considera que el hecho dañino no se produjo única y exclusivamente por la omisión de la Policía Nacional sino también por la conducta del conductor del tractocamión, pues de no ser así, se estaría haciendo apología al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte y, adicionalmente se partiría de una premisa falsa,

pues si bien las condiciones del puesto de control crearon un riesgo para quienes transitaban por el lugar, lo cierto es que el conductor de la tractomula contribuyó de manera cierta y eficaz a la materialización del mismo.

En ese sentido, para esta Corporación, el daño invocado por los demandantes fue consecuencia tanto de la omisión de la Policía Nacional, como de la conducta del conductor del tractocamión, en porcentajes de contribución causal del 50% cada uno.

El Tribunal precisa que la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, como quiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo.

5. Responsabilidad solidaria del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS

De conformidad con el certificado expedido el 3 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos (fl. 69, C.1), el tractocamión de placas TTG200 es propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y, en tal sentido, recae en él la obligación de reparar el daño que fuere causado con su vehículo a terceros.

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

En reciente sentencia del 5 de abril de 2021²⁴, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente respecto de la responsabilidad solidaria que se predica por parte del propietario del vehículo con el cual se genera un daño y de la empresa de transporte a la cual se encuentra afiliado éste:

En relación con esta temática tiene dicho la Corte que:

²⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1084-2021 del 5 de abril de 2021. Radicación número: 68001-31-03-003-2006-00125-01.

(...) por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, 'legítima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...' (cas. civ. sentencia número 021 de 1º de febrero de 1992) debe responder por los daños causados, dado que 'el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo' (CCXXXI, 2o volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01).

De allí que, en concordancia, el artículo 991 del Código de Comercio, modificado por el canon 9º del decreto 01 de 1990, consagre que «[c]uando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención del propietario.»

(...)

La posición de guardián de la actividad desarrollada con un rodante causante de daños en accidente de tránsito se predica de las empresas de transporte, entre otras personas, «no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.» (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627).

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el

50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

6. Sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios

En tanto la entidad recurrente no discutió el reconocimiento y liquidación que el Juez de primera instancia hizo respecto de los perjuicios solicitados por la parte actora, esta Sala de Decisión se abstendrá de analizar este aspecto.

7. Responsabilidad de los llamados en garantía

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso correspondiente. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena contra el llamante.

El artículo 225 del CPACA, regula la figura del llamamiento en garantía así:

ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. *Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.

a) Llamada en garantía por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio

En punto al llamamiento en garantía de la aseguradora Allianz Seguros S.A., se recuerda que éste se efectuó con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 142 a 144, C.1 y 246 a 281, C.1A).

En relación con el citado llamamiento en garantía, la aseguradora propuso los medios exceptivos que se resuelven a continuación:

▪ ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”.***

Allianz Seguros S.A. manifestó que en este caso se configuró la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro, por cuanto transcurrieron más de dos (2) años entre la fecha en que la víctima falleció y aquella en la cual fue vinculada al proceso la aseguradora.

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro se encuentra regulada en el artículo 1.081 del Código de Comercio, así:

ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.

Ahora bien, como lo ha señalado el Consejo de Estado²⁵ con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia²⁶, para el cómputo del término de prescripción precitado se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 1.131 del Código de Comercio, puesto que “<<(…) La demanda judicial o extrajudicial de la indemnización de la víctima al asegurado, la toma el citado precepto como hecho mínimo para la exigibilidad de la responsabilidad que pueda reclamar el asegurado frente al asegurador […] Luego si solo desde ese instante puede reclamarse la responsabilidad al asegurador por parte del asegurado, mal puede hacerse el cómputo de la prescripción desde época anterior.>>”.

El artículo 1.131 del Código de Comercio dispone:

ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO. *En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.*

Bajo ese entendimiento y teniendo en cuenta que el término de prescripción en este caso comenzaba a correr a partir de la fecha de notificación de la demanda al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, esto es, desde el 4 de julio de 2015, y vencía el 4 de julio de 2017, se concluye que la acción derivada de la póliza no había prescrito para cuando se le notificó a Allianz Seguros S.A. el llamamiento en garantía (20 de abril de 2016).

- **“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”.**

Allianz Seguros S.A. sostuvo que su eventual responsabilidad se encuentra limitada por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena.

El valor que tendría que asumir la aseguradora corresponde al 50% de la condena impuesta en primera instancia, que fue de \$213'388.909,17 por concepto de perjuicios materiales y de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales (\$414'058.000 a 2019), para

²⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Martín Bermúdez Muñoz. Sentencia del 3 de agosto de 2020. Radicación número: 76001-23-31-000-2006-02078-01(43650).

²⁶ Cita de cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de mayo de 1994, rad. 4106.

un total de: \$627'446.909,17.

Ahora, conforme a la póliza de seguro, el valor asegurado por concepto de responsabilidad civil extracontractual asciende a la suma de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

Sin perjuicio de que la suma que la aseguradora tiene que asumir es inferior al valor asegurado, lo cierto es que el medio exceptivo formulado es procedente, en la medida en que efectivamente existe un límite para dicho pago, y así se declarará en la parte resolutive de esta providencia.

▪ ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.***

Conforme se observa en lo pactado en la póliza de seguro, se acordó el pago de un deducible de \$1.100'000.000 del valor asegurado de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

En ese sentido, esta Corporación declarará probada la citada excepción, pues al afectarse parte del valor asegurado en la póliza, el asegurado deberá asumir el valor que corresponda por concepto de deducible.

▪ ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.***

Adujo la aseguradora que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda y, por ello, hasta tanto no se acredite la ocurrencia del siniestro, su cuantía y se haya declarado judicialmente responsable al llamante en garantía, el amparo o cobertura de la póliza no resulta aplicable.

Dado que en este proceso se demostró que efectivamente el vehículo tractocamión respecto del cual se constituyó la póliza de seguro, colisionó con la motocicleta en la que se desplazaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, produciendo la muerte inmediata de éste; y que además dicho impacto fue consecuencia en parte de la conducta imprudente del conductor del automotor implicado, esta Sala de Decisión considera que sí se configuró el siniestro y, por ende, se hará efectiva la garantía referida en la póliza, teniendo en cuenta en todo caso el límite de valor asegurado, así como el deducible que el asegurado habrá de asumir.

Por lo expuesto, la Sala declarará no probadas las excepciones de ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE***

SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”; mientras que tendrá por probadas las de “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.

b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1). Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, se concluye que en este caso se acreditó la existencia de responsabilidad extracontractual por parte de la Policía Nacional (en un 50%) y del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS (en un 50% de manera solidaria), en el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia. En ese orden de ideas, habrá de modificarse la providencia objeto de apelación, para declarar igualmente responsables del daño antijurídico al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, así como para precisar los porcentajes de participación de los mismos en el hecho dañino.

Adicionalmente, se condenará a Allianz Seguros S.A. a que reembolse el valor a que está obligado a pagar el señor Juan Augusto Ríos Osorio, llamante en garantía, con ocasión de este proceso.

De otra parte, se negará el llamamiento en garantía frente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Finalmente se precisa que, en tanto no fueron objeto de apelación, el Tribunal mantendrá la decisión adoptada por el Juez de primera instancia en relación con los perjuicios reconocidos y su monto.

Costas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, esta Sala de Decisión se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, como quiera que la demanda no fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, como lo exige la norma.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. MODIFÍCASE la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del proceso de reparación directa promovido por los señores Omaira Guerrero Largo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, COLDETRANS S.A. y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Lo anterior, en el siguiente sentido:

Segundo. MODIFÍCASE el ordinal primero de la providencia recurrida, el cual quedará así:

DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en un 50%, y de manera solidaria al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS en el 50% restante, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Tercero. ADICIÓNANSE los siguientes incisos al ordinal segundo del fallo apelado, así:

DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS, que denominaron: “HECHO DE UN TERCERO”, “CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”, “INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”, “INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS” e “(...) INNOMINADA”.

DECLÁRANSE no probados los siguientes medios exceptivos formulados por Allianz Seguros S.A.: “PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.

DECLÁRANSE probadas las excepciones propuestas por Allianz Seguros S.A. y que denominó: “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.

DECLÁRASE probado el siguiente medio exceptivo formulado por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.: “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD” y, en consecuencia, ABSUÉLVESE de responsabilidad a la citada llamada en garantía.

Cuarto. REVÓCASE el ordinal tercero de la providencia objeto de debate, con el cual se negaron las pretensiones de la demanda respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS.

Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

CONDÉNASE a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.

Sexto. MODIFÍCANSE los ordinales quinto y séptimo del fallo objeto de apelación, en el sentido de disponer que la condena por concepto de perjuicios, tanto materiales como morales, se predica en un 50% frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y en un 50% y de manera solidaria respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A.


Séptimo. En lo demás, **CONFÍRMASE** la providencia recurrida.

Octavo. ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente expuesto.

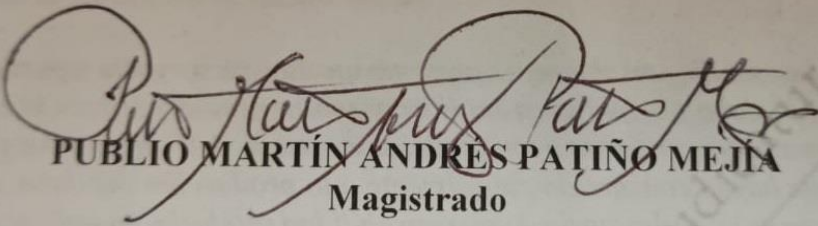
Noveno. NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA.

Décimo. Ejecutoriada esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen y **HÁGANSE** las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase



AUGUSTORAMÓN CHÁVEZ MARÍN
Magistrado


PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA
Magistrado


CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

No. 153

FECHA: 29/08/2022



HÉCTOR JAIME CASTRO CASTAÑEDA
SECRETARIO



Fernando Mancera
Abogados & Asesores

Manizales, diciembre 13 de 2023

Doctor

JUAN GUILLERMO ANGEL TREJOS

JUEZ

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

REFERENCIA: SOLICITUD DE TERMINACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEIDA CAUTELAR EN PROCESO EJECUTIVO POR CONTRATO DE TRANSACCIÓN A FAVOR DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A."

RADICADO: 2014 - 00566 - 00

NATURALEZA: PROCESO EJECUTIVO

EJECUTANTE: OMAIRA GUERRERO LARGO Y OTROS

EJECUTADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A. - NIT. 860026182-5
JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A.
"COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7

DERECHO DE POSTULACIÓN

JOSE FERNANDO MANCERA TABARES, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, Abogado en ejercicio, portador de la T.P. No. 67.555 del H.C.S.J., obrando en mi calidad de apoderado de los ejecutantes y la doctora ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LÓPEZ, obrando en calidad de Representante Legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7, de la manera más respetuosa nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle la terminación del proceso Ejecutivo con relación al pago del 25% que le corresponde a la compañía COLDETRANS S.A., dentro del proceso ejecutivo, al ser condenada solidariamente, consecencialmente, en concordancia con el Art. 461 del Código General del Proceso, comedidamente solicitamos:

Edificio Atlas - Calle 21 #23-22 Oficina 1704 - Teléfono 8821199 - Cels 310 8302835 - 3127975839
e-mail: fmaabogados@gmail.com - Manizales - Caldas



Fernando Mancera
Abogados & Asesores

1. Decretar la terminación del proceso ejecutivo por pago del 25% de la obligación que le corresponde a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, dentro del proceso ejecutivo por existir **contrato de transacción** entre las partes, sin condena en costas, ni agencias en derecho, en contra de la compañía.
2. Decretar el levantamiento del embargo de las de las cuentas que posea **COLDETRANS S.A.**, en las entidades bancarias banco Davivienda, Banco BBVA y Bancolombia, por la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000)**.
3. En caso de haberse librado los oficios respectivos a las entidades mencionadas, solicito respetuosamente se oficie nuevamente con el fin de informar que no se decrete la medida de embargo.

Finalmente, renunciamos a la ejecutoria del auto favorable, siempre que se acepte y ordene lo pedido en este memorial, para tal efecto se anexa copia del contrato de transacción suscrito entre la parte ejecutante y la compañía COLDETRANS S.A.

Es de advertir al Despacho que, el proceso ejecutivo se continuará en contra del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y ALLIANZ SEGUROS, con el fin de obtener el pago del 25% restante, del pago de los intereses comerciales, moratorios y agencias en derecho hasta que se produzca el respectivo pago por los ejecutados, quienes fueron condenado de manera solidaria y en el cual se libro mandamiento de pago por la vía ejecutiva el día 4 de diciembre de 2023.



Fernando Mancera
Abogados & Asesores

Cordialmente,

JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES
C.C. No. 10.282.610 de Manizales
T.P. No. 67.555 del C.S. de la
Judicatura
Apoderado de la parte ejecutante

Coadyuvo el presente memorial,

ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ
C.C. No. 42.010.815
Representante Legal
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A.
"COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7

CONTRATO DE TRANSACCIÓN

Este acto es celebrado entre los siguientes:

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

LA PARTE RECLAMANTE

Está integrada por:

OMAIRA GUERRERO LARGO (Compañera Permanente del Fallecido), mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.384.325 de Riosucio (Caldas).

ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE (Padre del Fallecido), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.537.516 de Quinchía (Risaralda).

BERTILDA ROSA VALENCIA (Madre del Fallecido), mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.038.479 de Quinchía (Risaralda).

ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA (Hermano del Fallecido), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.893.638 de Quinchía (Risaralda).

FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA (Hermano del Fallecido), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.538.839 de Quinchía (Risaralda).

OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA (Hermano del Fallecido), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.894.306 de Quinchía (Risaralda).

UBER GUTIERREZ VALENCIA (Hermano del Fallecido), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.095.765 de Manizales.

Las personas que se han identificado, podrán denominarse en este acto, como "*Los reclamantes*" o "*Solicitantes*", o por el nombre propio o de manera en que se indique claramente la alusión a aquellos.



APODERADO DE LOS RECLAMANTES O SOLICITANTES:

JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.282.610 de Manizales, mayor de edad, abogado portador de la tarjeta profesional número 67.555 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien "*Los reclamantes*", mediante este acto, expresamente le confieren poder especial, amplio y suficiente para que los represente en la celebración del mismo, además para firmar en su nombre, transigir, recibir y para alcanzar los fines de la transacción, de manera que él con sus actos los pueden obligar.

LA PARTE SOLICITADA O RECLAMADA

Está conformada por la siguiente sociedad comercial:

LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, representada legalmente por la Representante Legal **ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.010.815 y localizable Carrera 16 con Calle 8 Esquina. Servicentro Primax del Barrio La Romelia del Municipio de Dosquebradas (Risaralda) o a través del correo electrónico gerencia@coldetrans.com, calidad que se acredita mediante el certificado de existencia y representación legal respectivo expedido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la cual para efectos de este acto se podrá denominar como LA RECLAMADA Y/O CONDENADA SOLIDARIAMENTE.

Los intervinientes se podrán denominar como partes en conjunto, indicando a todos los contratantes o la referencia a una sola de ellas se podrá también hacer como parte.

II. ANTECEDENTES

1. El día 12 de junio de 2013, ocurrió un accidente de tránsito en el cual se vieron involucrados los vehículos motocicleta de placa XFG83A conducido por el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (Q.E.P.D, y el vehículo tractocamión de placas TTG-200, conducido para el momento de los hechos por el señor JULIAN GONZALEZ VALENCIA.
2. Como consecuencia de la colisión entre ambos vehículos el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (Q.E.P.D.) falleció.
3. Para el 12 de junio de 2013, el vehículo tractocamión de placas **TTG-200**, era conducido por el señor Julián González Valencia, de propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.225.828, y se encontraba afiliado a la Compañía Colombiana de Transporte S.A. "COLDETRANS S.A." con NIT 890000440-7.

4. El día 5 de diciembre de 2019, se profirió sentencia de Primera Instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y; Modificada, Adicionada y Revocada en los ordinales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 en Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia No. 126 del 26 de agosto de 2022, en proceso de Reparación Directa instaurada por la señora **OMAIRA GUERRERO LARGO Y OTROS** contra **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A. - JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y LLAMADOS EN GARANTÍA ALLIANZ SEGUROS S.A. - COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA**, por el fallecimiento del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, quedando debidamente ejecutoriada el día 1 de noviembre de 2022.
5. Con ocasión al hecho anterior, se presentó proceso ejecutivo ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales en contra de **COLDETRANS S.A, JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y ALLIANZ SEGUROS**, con el fin de obtener el pago del fallo judicial.
6. Mediante A.I. 1383 de fecha 4 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de los deudores solidarios **COLDETRANS S.A, JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y ALLIANZ SEGUROS**, por las siguientes sumas:
 - Por la suma de \$50.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Omaira Guerrero Largo.
 - Por la suma de \$50.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Arsoman Gutiérrez Navarrete.
 - Por la suma de \$50.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Bertilda Rosa Valencia.
 - Por la suma de \$25.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia.
 - Por la suma de \$25.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Fernando Gutiérrez Valencia.
 - Por la suma de \$25.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Otoniel de Jesús Gutiérrez Valencia.
 - Por la suma de \$25.000.000 por concepto del 50% de perjuicios morales a favor de Uber Gutiérrez Valencia.
 - Por la suma de \$140.727.260 por concepto de perjuicios materiales a favor de la señora Omaira Guerrero Largo.
 - Por la suma de \$17.834.722 por concepto de agencias en derecho del proceso declarativo.

Para un total de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$408.561.982), de los cuales la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A.**, debe pagar la mitad del valor, es

decir la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991) y el valor restante deberá ser asumido por el señor JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y ALLIANZ SEGUROS.

III. CONSIDERACIONES

Dados los antecedentes expuestos y las diferencias que suscitan, para precaver una controversia entre las partes, proceden a formular las siguientes consideraciones:

1. Que las partes de manera libre y espontánea, con capacidad legal de disponer y transigir, mediante este acto pueden precaver controversias y dirimir todas y cada una de las diferencias entre ellas, ya sean eventuales, ciertas, conocidas, latentes, pasadas, presentes y futuras, surgidas o que puedan llegar a emerger o suscitarse, originadas con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, y por los efectos y/o las consecuencias adversas o perjuicios de cualquier índole; y, en especial, a dar por terminado con respecto a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A.** (i) proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, bajo radicación No.17001-33-33-003-2014-00566-00; así como de abstenerse de promover nuevos litigios por el mismo acontecimiento, de cualquier naturaleza y ante cualquier jurisdicción, para lo cual suscriben el presente contrato, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 2469 y siguientes del Código Civil y 312 y siguientes del Código General del Proceso y continuar con el proceso ejecutivo para obtener el pago restante, es decir, la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991)** en contra el señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**.
2. Que las diferencias materia de transacción, motivadas en el citado evento accidental, corresponden a la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, por el porcentaje que le corresponde a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A.**, al ser condenada de manera solidaria en el fallo judicial proferido en Sentencia de Primera Instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales y; Modificada,

Adicionada y Revocada en los ordinales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 en Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo del Caldas, en Sentencia No. 126, el día 26 de agosto de 2022, en proceso de Reparación Directa con Radicado 17001-33-33-004-2014-00566-00, instaurado por la señora **OMAIRA GUERRERO LARGO Y OTROS** contra **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A. - JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO**, por el fallecimiento del señor **ISRAEL GUTIÉRREZ VALENCIA**, y que a través del proceso ejecutivo que se promovió para el pago del fallo judicial, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, mediante A.I. 1383 de fecha 4 de diciembre de 2023, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de los deudores solidarios **COLDETRANS S.A, JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y ALLIANZ SEGUROS**.

3. Que la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A.**, manifiesta que a través de este acto, está haciendo efectivo el pago del 25% que le corresponde de manera solidaria dentro del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, donde mediante A.I. 1383 de fecha 4 de diciembre de 2023, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de los deudores solidarios **COLDETRANS S.A, JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO Y ALLIANZ SEGUROS**, por los hechos acaecidos el día 12 de junio de 2013, quedando pendiente seguir con la ejecución contra el señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**, para que cancelen la suma que les corresponde a ellos al ser condenados solidariamente, es decir, la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991)**.
4. Que las partes mediante este acuerdo, voluntariamente solucionan las diferencias entre sí y precaven cualquier reclamo judicial o extrajudicial entre ellas, por ese hecho y no dejan pendiente concepto o motivo alguno que pueda fundar posteriores solicitudes o demandas relativas a los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, con respecto a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A.**, descritos en el acápite de antecedentes, las partes se pueden obligar incondicionalmente a transigir y a abstenerse a promover reclamos o litigios por el mismo acontecimiento, de cualquier naturaleza y ante cualquier jurisdicción.
5. Que los reclamantes declaran que, salvo ellos mismos, no existen otras personas que tengan o puedan alegar derecho alguno a reclamar una

OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991), al ser condenados en forma solidaria.

De esta forma se transigen las pretensiones judicialmente expresadas por **LOS RECLAMANTES**, y las que eventualmente se puedan formular en el futuro, cubriendo todo tipo de detrimento resarcible. Para el efecto, el pago de esa cantidad se hará por parte de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A.** a favor de **LOS RECLAMANTES** conforme se detalla en la siguiente cláusula.

TERCERA. FORMA Y PLAZOS PARA EL PAGO. Las partes acuerdan que la suma total indicada en la cláusula segunda, se pagará mediante cheque de gerencia, a nombre de: **OMAIRA GUERRERO LARGO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.384.325 de Riosucio (Caldas), por un valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$96.025.972)**, **ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.893.638 de Quinchía (Risaralda), por un valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS (\$56.987.014)** Y **OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.894.306 de Quinchía (Risaralda), por un valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS (\$56.987.014)**, el día 12 de diciembre de 2023, en las instalaciones de las oficinas de **COLDETRANS S.A.**, ubicada en la Carrera 16 con Calle 8 Esquina Servicentro Primax del Barrio La Romelia del Municipio de Dosquebradas (Risaralda), al ser entregado el presente contrato en UN (1) ejemplar del presente contrato de transacción debidamente firmado y con nota de presentación personal ante notario público por **LOS RECLAMANTES** y su apoderado.

PARÁGRAFO PRIMERO. LOS RECLAMANTES deberán radicar para efectos del pago el escrito mediante el cual se solicita la terminación del proceso ejecutivo frente a la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A.**; que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, bajo radicación No.17001-33-33-003-2014-00566-00, en virtud del presente acuerdo transaccional, y manifestarán que renuncian de manera expresa al cobro de costas y agencias en derecho, como se pacta en este acuerdo, y según lo reglado en el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, así mismo se manifestará que el proceso ejecutivo continuará contra el señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**, con el fin de obtener el pago restante del fallo judicial, es decir, la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991)**.

Dosquebradas (Risaralda), por todo concepto o en relación con los hechos objeto de esta transacción. 5. Que con el pago estipulado que recibirán queda resarcido completamente y se satisfacen todas sus pretensiones y por tal motivo, renuncian o desisten expresa y definitivamente de las acciones judiciales o extrajudiciales en curso y se abstendrán de iniciar otras en contra de **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200. 6. Que, en cualquier caso, **LOS RECLAMANTES**, con respecto de los hechos aquí mencionados, se comprometen a salir en defensa de los intereses de **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, coadyuvando lo pactado cualquier excepción o defensa, que deba ejercer ante eventuales reclamaciones o demandas que formulen terceros. 7. Que autoriza a **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, para esgrimir la presente transacción como prueba del acuerdo y de los efectos de cosa juzgada de la misma, así como para oponer del pago del resarcimiento integral de los perjuicios derivados de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2013, que se expusieron en las consideraciones previas, con el fin de terminar cualquier proceso judicial o trámite extrajudicial que se adelante o este adelantándose en su contra, pues esta transacción es total entre las partes, no dejando entre ellas conceptos pendientes; aclarando que el proceso ejecutivo sólo terminará para **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, al pagar el porcentaje que le correspondió con ocasión al fallo judicial y al libramiento de pago por la vía ejecutiva, proceso que seguirá adelante contra el señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**, con el fin de obtener el pago restante, es decir, la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991)**.

SEXTA. En este estado, **LOS RECLAMANTES** y su apoderado manifiestan que aceptan de forma pura y simple la cantidad transigida, como pago único y definitivo a cargo de **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, por los daños indemnizables, de forma que así solucionan todas las diferencias en torno a este caso y renuncian o desisten de cualquier reclamo judicial o extrajudicial adicional, o de pago adicional, a la luz de cualquier responsabilidad civil, ya sea extracontractual o contractual, eventualmente imputable a la aseguradora **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7**, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, representada legalmente por la Representante Legal **ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.010.815 y localizable Carrera 16 con Calle 8 Esquina Servicentro Primax del Barrio La Romelia del Municipio de Dosquebradas (Risaralda), ya que **LOS RECLAMANTES** hacen extensivo a éstos los efectos liberadores de la transacción y el paz y salvo, sólo por el pago de la

indemnización del porcentaje a cargo de **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A."** - NIT. 890000440-7; continuando con el proceso ejecutivo contra del señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**, con el fin de obtener el pago restante del fallo judicial y que se ordenó mediante libramiento de pago por la vía ejecutiva, la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991)**.

SÉPTIMA. EFECTOS JURÍDICOS. Este contrato de Transacción ha sido celebrado por las partes en forma libre, voluntaria y con la clara intención de acogerse a las consecuencias legales reguladas por el Artículo 2483 del Código Civil Colombiano, que consagra los efectos de la Transacción: *"La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia"* y sus disposiciones tienen plena validez y fuerza legal, sea cual fuere la jurisdicción en que sean invocadas, alegadas o defendidas. Este acuerdo termina los litigios pendientes o en curso y precaven cualquier otro que se hubiere o pudiere promover antes o después de este acto, dada la norma del título XXXIX del libro 4 del Código Civil Colombiano.

OCTAVA. PENALIDAD. En caso de que una vez firmada la presente transacción, **LOS RECLAMANTES**, por sí mismos o por interpuesta persona, procedan o continúen el trámite de algún tipo de acción judicial en contra de **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A."** - NIT. 890000440-7, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, deberán pagarle a título de cláusula penal a estos, la suma equivalente al doble del valor por ellos recibida, debidamente indexada. De la misma manera se procederá si **LOS RECLAMANTES** y/o su apoderado judicial, incumplen alguna de las obligaciones a su cargo, conforme el presente contrato de transacción.

NOVENA. LOS RECLAMANTES, bajo la gravedad de juramento, manifiestan expresamente que ellos son los únicos con derecho a ser resarcidos o personas que podrían reclamar una indemnización derivada para ellos, a raíz del hecho descrito en cláusulas anteriores, y afirman que saben que no existen otras personas que puedan alegar derecho alguno o que tengan derecho a reclamar una indemnización por los hechos ocurridos el día 12 de junio de 2013, descrito en el acápite de antecedentes, con ocasión del acuerdo del resarcimiento aquí reconocido; declaración ésta en virtud de la cual **LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A."** - NIT. 890000440-7, en su calidad de empresa usufructuaria del vehículo de Placas TTG200, acepta y celebra este contrato. En virtud de ello, **LOS RECLAMANTES** se comprometen a responder con su propio peculio, ante la eventual aparición de personas que aleguen y puedan acreditar tener algún derecho que se derive de los hechos descritos en el acápite de antecedentes de este contrato, de manera que **LOS RECLAMANTES** garantizan que ellos serán quienes indemnicen a esas personas que eventualmente se presente, dejando establecido que se continuará con el proceso ejecutivo contra el señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y la compañía de seguros **ALLIANZ SEGUROS**, con el fin de obtener el pago restante del fallo judicial y que se ordenó el pago de la misma, a través del libramiento de pago por

la vía ejecutiva, la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$204.280.991).

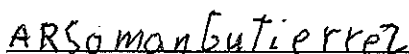
DÉCIMA. Presente en este contrato, el Doctor JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.282.610 de Manizales, mayor de edad, abogado facultado para el ejercicio de su profesión, con tarjeta profesional número 67.555 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado de LOS RECLAMANTES, expresamente manifiesta que se encuentra conforme con los términos de la presente transacción y que ha explicado sus efectos a sus mandantes. Igualmente se compromete el profesional del derecho en mención a no radicar oficios de embargo en las cuentas bancarias correspondientes a LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7 y además a solicitar de manera inmediata el levantamiento de las medidas cautelares en lo correspondiente a LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT. 890000440-7.

Para constancia se suscribe este contrato en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor literal, el día 11 de diciembre dos mil veintitrés (2023).

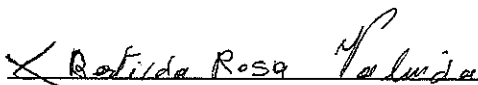
LOS RECLAMANTES:



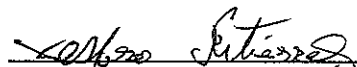
OMAIRA GUERRERO LARGO
C.C. No. 30.384.325 de Riosucio (Caldas)



ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE
C.C. No. 4.537.516 de Quinchía (Risaralda)



BERTILDA ROSA VALENCIA
C.C. No. 25.038.479 de Quinchía (Risaralda)



ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchia

Compareció Arsomay Gutiérrez
Navarrete

Quien exhibió la C.C. 4537.516

Expedida en Quinchia

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Arsomay Gutiérrez
Firma del Compareciente

Martha Lidia Osorio Osorio
Notaria Única
Circuito de Quinchia
en Risaralda

11 DIC 2023

Quinchia

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchia

Compareció Bertilda Rosa
Valencia

Quien exhibió la C.C. 25.038.479

Expedida en Quinchia

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Bertilda Rosa Valencia
Firma del Compareciente

Martha Lidia Osorio Osorio
Notaria Única
Circuito de Quinchia
en Risaralda

11 DIC 2023

Quinchia

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchia

Compareció Alvaro Antonio
Gutiérrez Valencia

Quien exhibió la C.C. 9.893.638

Expedida en Quinchia

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Alvaro Antonio Gutiérrez Valencia
Firma del Compareciente

Martha Lidia Osorio Osorio
Notaria Única
Circuito de Quinchia
en Risaralda

11 DIC 2023

Quinchia

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchia

Compareció Fernando
Gutiérrez Valencia

Quien exhibió la C.C. 4.538.839

Expedida en Quinchia

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Fernando Gutiérrez Valencia
Firma del Compareciente

Martha Lidia Osorio Osorio
Notaria Única
Circuito de Quinchia
en Risaralda

11 DIC 2023

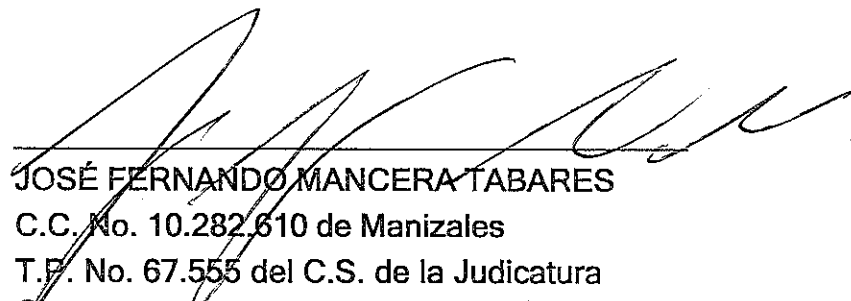
Quinchia

UNIVERSIDAD DE QUINCHÍA
VOTARIA
C.C. No. 9.893.638 de Quinchía (Risaralda)

Fernando Gutierrez V
FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA
C.C. No. 4.538.839 de Quinchía (Risaralda)

OTONIEL GUTIERREZ
OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA
C.C. No. 9.894.306 de Quinchía (Risaralda)

Uber Gutierrez V
UBER GUTIERREZ VALENCIA
C.C. No. 75.095.765 de Manizales


JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES
C.C. No. 10.282.610 de Manizales
T.P. No. 67.555 del C.S. de la Judicatura
Correo electrónico:
fmaabogados@gmail.com
Apoderado de la parte demandante

LA PARTE SOLICITADA O RECLAMADA:

ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ
ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO LOPEZ
C.C. No. 42.010.815
Representante Legal
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. "COLDETRANS S.A." - NIT.
890000440-7



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchía

Compareció Otoniel de Jesus Gutierrez Valencia

Quien exhibió la C.C. 9.814.306.

Expedida en Quinchía

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Otoniel Gutierrez

NOTARIA ÚNICA del Circuito de Quinchía en Risaralda

Martha Lida Osorio Obando
Notaria Única

11 DIC 2023

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Única del Circuito de Quinchía

Compareció Uber Gutierrez Valencia

Quien exhibió la C.C. 75.095.765.

Expedida en Manizales

Y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Uber Gutierrez

NOTARIA ÚNICA del Circuito de Quinchía en Risaralda

Martha Lida Osorio Obando
Notaria Única

11 DIC 2023

NOTARIA PRIMERA DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA

RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Primera del Circuito de Dosquebradas - Risaralda, compareció:

MANCERA TABARES JOSE FERNANDO

Quien se identificó con la: C.C. 10282610 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y es cierto su contenido.

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

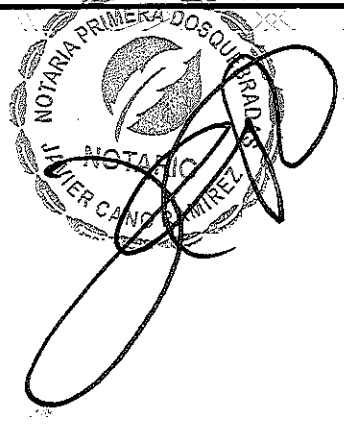
Dosquebradas, 2023-12-12 10:39:12

X [Firma]
El Compareciente

Cod. 19wdb

SDO3481-c993f5f3

JAVIER CANO RAMIREZ
NOTARIO PRIMERO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA



NOTARIA PRIMERA DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA

RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Primera del Circuito de Dosquebradas - Risaralda, compareció:

OROZCO LOPEZ ZORAIDA DEL SOCORRO

Quien se identificó con la: C.C. 42010815 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y es cierto su contenido.

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

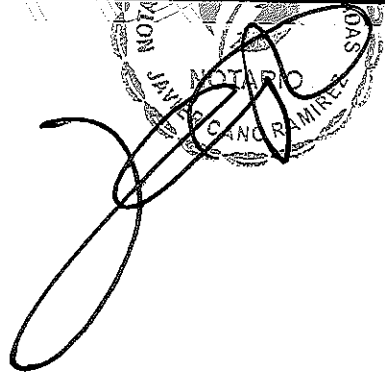
Dosquebradas, 2023-12-12 10:40:25

X [Firma]
El Compareciente

Cod. 19whi

SDO3481-b961b699

JAVIER CANO RAMIREZ
NOTARIO PRIMERO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA



**NOTARÍA PRIMERA DE
DOSQUEBRADAS - RISARALDA**



**RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y
CONTENIDO**

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

NOTARÍA PRIMERA
DOSQUEBRADAS

Ante la Notaría Primera del Circulo de Dosquebradas -
Risaralda, compareció:

GUERRERO LARGO OMAIRA

Quien se identificó con la: **C.C. 30384325**
y declaró que la firma que aparece en el presente
documento es suya y es cierto su contenido.

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al
ser verificada su identidad cotejando sus huellas
digitales y datos biográficos contra la base de
datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para
verificar este documento.

Dosquebradas, 2023-12-12 11:01:52



Cod. 19y5p



X 
El Compareciente

SDO3481-f2378895

JAVIER CANO RAMIREZ
NOTARIO PRIMERO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA

